



ALGO GRANDE

VA A OCURRIR EN ESTE

PUEBLO

Las palabras pacto, dialogo y negociación están a la orden del día al ritmo de la insubordinación social y de las jornadas de movilización intermitente que caracterizan el actual periodo de crisis y búsquedas en Colombia. Son muchas las propuestas y serán múltiples los caminos para los diálogos fáciles, para los difíciles y para hacer posibles los imposibles.

Autores:

Camilo González Posso

Isaboth Cortés Espitia

Juana Cabezas Palacios

Valeria Quintana Rodríguez

Juan Sebastián Céspedes Mendoza

Aida Milena Acevedo Jaramillo

En abril se puso en marcha la
generación del cambio

Editor

Dr. Camilo González Posso

■ ALGO **GRANDE**

VA A OCURRIR EN ESTE

**PUE
BLO**

En abril se puso en marcha la
generación del cambio

Editor

Dr. Camilo González Posso



Fotografía: Alejandro Calderón



ELECTORAL

Estación

82.47

PERSONAS DESAPARECIDAS

Algo grande va a ocurrir en este pueblo

En abril se puso en marcha la generación del cambio

Editor:

Dr. Camilo González Posso

Autores:

Dr. Camilo González Posso

Presidente Indepaz

Isaboth Cortés

Juana Cabezas

Valeria Quintana

Investigadoras de Indepaz

Juan Sebastián Céspedes Mendoza

Aida Milena Acevedo Jaramillo

Colaboradores de Indepaz

Informe Temblores ONG – Indepaz:

Observatorio Indepaz, Leonardo González Perafán (Director)

Temblores ONG, Alejandro Lanz, Sebastián Lanz (Directores)

Fotografías: Santiago González

Alejandro Calderón - Pag 36, 53, 54, 68, 174, 214

Ilustraciones:

Valeria Quintana

Diagramación:

egdesing.publicidad@gmail.com

Impresión:

Comercializadora OPM S.A.S.

Email: opmdigital@gmail.com

ISBN 978-958-8397-26-9

Bogotá, D.C. 22 de Abril de 2.022

Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (978-958-8397)

Agradecimiento a Hispanics in Philanthropy, Fondo Noruego de Derechos Humanos, Fundación Heinrich Böll y los colaboradores que hicieron posibles los informes y aportes académicos.

ÍNDICE

Presentación: ¡90 días que conmovieron todo!	9
---	----------

PRIMERA PARTE **UN AÑO DESPUÉS**

Por: Isaboth Cortés, Juana Cabezas y Valeria Quintana La deuda del Gobierno Nacional frente al esclarecimiento de las graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante el Paro Nacional 2021	15
---	-----------

SEGUNDA PARTE **EL PARO DESPUÉS DEL PARO**

Por: Camilo González Posso	
Colombia 2021 – 2022: el paro después del paro	37
Colombia en el borde del caos puede saltar a la paz	55
Cali es valle, pacífico y además es loma	61
Diálogo nacional genuino e incluyente: ¿Otro diálogo imposible?	69
Colombia: ¿pacto reconstituyente o crisis destituyente?	101
Sí hubo masacre policial en el paro nacional	131

TERCERA PARTE

SEGURIDAD DE GUERRA CONTRA LA PROTESTA

Por: Isabhot Cortes y Valeria Quintana	
Estigmatizar la protesta y ocultar la responsabilidad estatal	139
La ley de “seguridad ciudadana” en contra de las garantías ciudadanas	165
Las políticas de seguridad como dispositivo legitimador de las actitudes antidemocráticas de los gobiernos de derecha en América Latina: un estudio de casos de Brasil y Colombia	177

CUARTA PARTE

CALI Y EL SUROCCIDENTE EN EL EPICENTRO DEL PARO

Por: Juan Sebastián Céspedes Mendoza y Ayda Milena Acevedo Jaramillo	
Sobre los repertorios de acción colectiva en el marco del paro nacional del 28 de abril del 2021 en Santiago de Cali	191
Lucha comprensiva con cambios estructurales y sustanciales	211
Otra sociedad posil	217
Anexos	219



Fotografía: Alejandro Calderón

Fotografía: Alejandro Calderón



Presentación

¡90 días que conmovieron todo!

Cada vez que se hace memoria sobre las grandes conmociones sociales en Colombia en el último siglo, se mencionan el ascenso y genocidio del gaitanismo, el levantamiento y paro nacional contra la dictadura de Rojas, las protestas por el robo de las elecciones de abril de 1970, las revoluciones agrarias y étnicas, el paro cívico nacional de 1977, el proceso constituyente de 1996 – 1991, los mandatos y acuerdos por la paz y las grandes movilizaciones democráticas de mujeres y jóvenes. De ahora en adelante, en este siglo XXI, se hablará también de los 90 días de insubordinación nacional que transcurrieron entre el 28 de abril y el 28 de julio de 2021.

Todavía se discute el nombre que se dio y el que merece esa emergencia social que sacudió a Colombia y cuyas ondas siguen empujando procesos. El comité que lo convocó para que se realizara como una o al máximo dos jornadas lo llamó Paro Nacional y así quedó bautizado en los medios de comunicación y en el lenguaje de la calle, aunque ha sido más que un paro y se convirtió en confluencia de autoconvocatorias multiformes.

“Parar para avanzar,, Viva el paro nacional” fue el estribillo en más de 13.000 eventos y en más de 8.000 manifestaciones, 3.000 bloqueos o cierre de vías, 3.500 eventos culturales, miles de plantones y decenas de jornadas de cacerolazos.¹

Se registraron eventos en 862 municipios (80% del total) con participación de más de 20 millones de personas en toda esa protesta, emergencia, insubordinación o, como también la llamaron, explosión y estallido social.

En las encuestas realizadas durante estos meses de movilizaciones, al menos el 85% se expresaban a favor de las demandas y al tiempo rechazaban las acciones violentas que, aunque minoritarias, se volvieron el centro de las noticias y de la campaña de desinformación desde el gobierno y sus más cercanos aliados.

¹ Solo entre el 28 de abril y el 3 de junio la Policía Nacional (PMU) registró 12.288 actividades o actos de protesta de las cuales 6.218 son concentraciones, 2.281 marchas, 3.144 bloqueos, 620 movilizaciones y 25 asambleas en 32 departamentos, en 862 municipios y en Bogotá.

La intención de esta publicación es invitar a analizar el paro de 2021 como un proceso transformador que es expresión de movimientos sociales revolucionados que se han venido configurando en Colombia y que tienen un impulso extraordinario como parte de la transición al post conflicto y a la paz.

El énfasis se quiere poner en los contenidos democráticos de las demandas y de las motivaciones que explican la dimensión inédita de las protestas y de los sujetos sociales articulados en la exigencia de cambios estructurales de sistema.

Se busca dirigir la atención a los alcances de esas demandas que articulan cambios de modelos de acumulación de riqueza y de poder con reivindicaciones para la satisfacción de necesidades inmediatas particulares, de regiones y sectores golpeados por la crisis económica, por la persistencia de la violencia armada, la pandemia y la guerra de rapiña desatada a escala planetaria en el camino a lo que llaman la nueva normalidad o el nuevo orden global.

La pregunta que subyace en estas reflexiones es si esa insubordinación y estallido social es un episodio azaroso o fue muestra de la emergencia de poderosos procesos que están transformando a la sociedad colombiana y acentuando la crisis de un viejo régimen autoritario basado en la violencia, las mafias, la inequidad y la corrupción.

El registro de abusos promovidos desde el gobierno con una respuesta ultra represiva a las movilizaciones y a los bloqueos en vías públicas, tiene importancia para fortalecer el reclamo de respeto a los derechos de expresión, movilización y protesta. También para exigir reformas institucionales y una acción diligente de la justicia contra los responsables del uso desproporcionado de la fuerza policial en contra de la gente en la protesta y en la cotidianidad.

Pero desde otro ángulo se intentan analizar las transformaciones que se vienen impulsando en el régimen político para adecuarse a esta nueva etapa en Colombia de transición a la paz y de revolución de expectativas de cambios democráticos y de equidad social. La respuesta autoritaria a las protestas en 2021, como había sido en los años que siguieron a la firma del acuerdo de paz, no es un simple asunto de comportamiento brutal de la Fuerza Pública pues, en el principio y en el fin, es parte de la defensa del estatus quo desde los centros del poder político y económico. Esa respuesta se basa en teorías de guerra

permanente en respuesta a supuestas amenazas locales y transnacionales a la seguridad del Estado, que son identificadas con acciones y pensamientos contra el modelo neoliberal de hegemonía económica y sus doctrinas neoconservadoras de captura de las instituciones al servicio de una élite oligárquica corporativista.

Durante las movilizaciones del paro nacional de 2021, desde esos sectores neoautoritarios, que es otro nombre para los totalitarismos disfrazados de democracia representativa, se intentó identificar la protesta con infiltración de grupos armados terroristas, y se enfocó la atención a algunos hechos minoritarios de violencia contra estaciones de policía y bienes públicos o privados. Los bloqueos fueron calificados de actos terroristas y desde el régimen construyeron la idea de que los problemas de la crisis económica se habían potenciado y prolongado como efecto de los cierres de vías. Con esta narrativa se ocultó la incapacidad del gobierno para dar respuesta a exigencias que desde tiempo atrás han hecho muchos sectores. El gobierno dilató la respuesta a los bloqueos de mayor impacto económico que fueron los de organizaciones cívicas de Buenaventura y los impulsados por camioneros llevados a la quiebra por medidas del gobierno y por los altos peajes impuestos por los acaparadores de concesiones.

En este libro se hace una compilación de ensayos y documentos que fueron elaborados desde Indepaz al calor de los acontecimientos de abril – julio de 2021 y se incluye el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado por Indepaz y la ONG Temblores que ha tenido un destacado papel de seguimiento y análisis de los abusos cometidos contra la protesta por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional y por otras unidades de esa institución. En la última sección se publica el informe sobre el paro en Cali que es una valiosa contribución a la memoria y análisis de lo que ha significado el levantamiento social en uno de sus epicentros más importantes.

Como puede notarse, aquí se habla de levantamiento y de otras connotaciones del paro nacional de 2021. Los académicos les han dado vueltas a categorías antiguas y unos, recordando a Rosa Luxemburgo, han hablado de “huelga de masas” para destacar su magnitud excepcional, alcance revolucionario de hecho, pluralidad de actores sociales y escenario que trasciende el mundo del trabajo, de la empresa.

Otros más entusiasmados se han atrevido a hablar de “insurrección popular” advirtiendo que ha sido pacífica y que le cabe el nombre por la confrontación abierta a un régimen y un estado de cosas insostenible para la mayoría de la población.

No han faltado los lectores de Negri que descubren en esta gran movilización la mejor expresión en Colombia de la dinámica de la multitud.

Podemos seguir en el inventario de calificaciones y enfoques de análisis que en cada aproximación tienen el mérito de destacar un aspecto de este singular paro nacional, que no es del todo paro ni del todo insubordinación. Así nos ocurre ante fenómenos complejos excepcionales que comenzamos siempre por designarlos con nombres viejos, y con nuevas descripciones, mientras se va entendiendo la singularidad y el pedazo de visión en el movimiento del conjunto.

Camilo González Posso
Presidente de Indepaz

PRIMERA PARTE:

UN AÑO DESPUÉS





La deuda del Gobierno Nacional frente al esclarecimiento de las graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante el Paro Nacional 2021²

Aportes para el balance de las cifras sobre las violencias en el marco del Paro Nacional y los avances en materia de investigación y sanción.

Isaboth Cortés, Juana Cabezas, Valeria Quintana

El 28 de abril del 2022, la sociedad colombiana conmemora un año de la serie de sucesos que, por más de 3 meses, casi diariamente, conmocionaron el orden público en el país “El estallido social del Paro Nacional”. La desacertada decisión del Gobierno Nacional de responder de manera represiva y violenta a la multiplicidad de movilizaciones que se desarrollaron en la gran mayoría de los centros urbanos del país, sumado a un profundo sentimiento social de insatisfacción y rechazo frente a las medidas económicas y tributarias del Gobierno de Iván Duque, la gravedad de la situación de ausencia de garantías sociales para enfrentar la pandemia por COVID-19, así como la crisis generada por la precaria implementación de los Acuerdo de Paz, entre muchas otras causas. Dejaron como consecuencia un lamentable balance en materia de violaciones a los derechos humanos, que puso a Colombia en el ojo de la comunidad internacional e incluso ameritó la visita y pronunciamiento de un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

La visita del grupo de trabajo que tuvo lugar entre el 08 y 10 de junio del 2021, dio como resultado el pronunciamiento de la Comisión mediante un informe de observaciones y recomendaciones, en el cuál manifestó su preocupación por la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la movilización social (Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, 2021) por parte de las Fuerzas Militares. De este documento se extraen 12 recomendaciones que pueden categorizarse en, 2 de contenido general, y 10 que se refieren de manera específica a las violencias que fueron evidenciadas y/o los

2 Artículo publicado en Abril de 2022, Bogotá, D.C.

hechos que constituyen afectaciones a la garantía de los derechos humanos.

La deuda del gobierno de Iván Duque se relaciona entre otras a la falta de voluntad política o por lo menos a la falta de celeridad para acoger las recomendaciones más urgentes efectuadas por las CIDH. Entre estas se consideran fundamentales en materia de esclarecimiento sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas, las siguientes:

1. Recomendación 16: Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil.
2. Recomendación 31: Asegurar que el fuero militar sólo sea utilizado para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
3. Recomendación 32: Asegurar que la justicia ordinaria sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.

¿Cuáles son las cifras de las violencias en el marco del paro nacional 2021?

A la fecha de elaboración del presente balance, ni la Fiscalía General de la Nación, ni el sector defensa, ni la Defensoría del Pueblo ha publicado un informe actualizado que dé cuentas precisas acerca de las cifras de las violencias perpetradas contra la población civil en el marco del Paro Nacional 2021. En atención no sólo a las recomendaciones de la CIDH, sino también a las peticiones de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. La información más reciente publicada por parte de estas entidades estatales, corresponde a datos consolidados hasta el mes de junio del 2021.

A continuación, se presentan los datos extraídos de los informes emitidos por las entidades estatales y los proporcionados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Algunos de los datos que se presentan fueron obtenidos

por las organizaciones mediante peticiones elevadas de manera particular a las entidades estatales competentes.

Tabla 1. Contraste de cifras sobre violencias ocurridas en el marco del paro 2021					
Tipo de Acción	Informe del Balance General del Ministerio de Defensa del 28 abril al 27 de junio de 2021	Informe de Defensoría de abril-junio de 2021	Balance IN-DEPAZ de 28 de abril al 15 de julio de 2021	Balance Temblores ONG del 28 de abril al 15 de julio de 2021	Balance Campaña defender la libertad Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP)
Homicidios en el marco del paro nacional	Reportan 24 casos de personas fallecidas, 2 uniformados fallecidos (Datos referenciados por Fiscalía General de la Nación, el 15 de junio de 2021).	58 casos de los cuales 20 se relacionan directamente con las protestas. (Datos referenciados por la Defensoría del Pueblo a partir de boletín publicado por la Fiscalía General de la Nación el 30 de mayo de 2021)	83 casos, entre los cuales se encuentran 3 miembros de la Fuerza Pública (Observatorio de conflictividades y DDHH de Indepaz).	78 casos (Datos referenciados de la plataforma GRITA).	91 casos (Datos informe Torturar y Castigar-2021)
Homicidios atribuidos a la Fuerza Pública	16 investigaciones a miembros de la policía (Datos referenciados por la Inspección General de la Policía Nacional, el 27 de junio de 2021).	No se señala esta particularidad dentro del informe.	44 casos (Observatorio de conflictividades y DDHH de Indepaz).	44 casos (Datos referenciados de la plataforma GRITA).	36 casos en los que la Policía Nacional y/o el ESMAD figuran como presuntos responsables (Datos informe el sometimiento de la democracia-2021).

Violencia Ocular	No hay datos segregados por violencia ocular; sin embargo, se registraron 41 casos por agresiones físicas y 25 por lesiones personales (Datos referenciados por la Inspección General de la Policía Nacional, el 27 de junio de 2021)	No se registran casos.	98 casos (Observatorio de conflictividades y DDHH de Indepaz)	103 casos (Datos referenciados de la plataforma GRITA).	95 casos (Datos informe Torturar y Castigar-2021).
Violencia Sexual	No desagrega las violencias basadas en género registra 11 casos de “violencias basadas en género” y 3 investigaciones a miembros de la policía por “acoso sexual”, pero no hay datos consolidados de accesos carnales violentos. (Datos referenciados por la Inspección General de la Policía Nacional, el 27 de junio de 2021)	5 casos de la violencia sexual (Acceso carnal violento) y 22 casos tipificados como otros casos de violencia sexual (Tocamientos, etc.).	No se recopiló información para este tipo de afectación.	35 casos (Datos referenciados de la plataforma GRITA).	69 casos de VBG ejercidas contra las mujeres, entre los cuales 17 fueron delitos sexuales contra mujeres y 8 agresiones sexuales ejercidas contra hombres (Datos informe el sometimiento de la democracia-2021).
Detenciones arbitrarias	No registra datos sobre detenciones arbitrarias.	31 casos	No se recopiló información para este tipo de afectación.	2.053 casos (Datos referenciados de la plataforma GRITA).	3.546 detenciones de manifestantes y 35 contra defensoras y defensores de DDHH (Datos informe el sometimiento de la democracia-2021).
Torturas contra manifestantes	No registra datos sobre torturas a manifestantes.	7 acciones de tortura Física y 6 de tortura Psicológica.	No se recopiló información para este tipo de acción.	No se especifica este tipo de acción.	80 casos de tortura durante procesos de detención administrativa (Datos referenciados en el Informe Torturar y Castigar-2021).

Desapariciones forzadas	4 denuncias (Datos referenciados por la Fiscalía General de la Nación, del 15 de junio 15 2021).	465 casos se enviaron a la Fiscalía General de la Nación como solicitud de Activación del Mecanismo de Búsqueda Urgentes, 91 casos continúan activos y 29 en proceso de verificación de la información.	40 casos (Datos registrados por medio de la plataforma Bida) 349 personas dadas por desaparecidas según registros de organizaciones del país centralizadas por Indepaz. (Observatorio de conflictividades y DDHH de Indepaz)	40 casos (Datos registrados de la plataforma Bida).	6 noticias criminales registradas por oficio de la Fiscalía General de la Nación. (Datos informe Torturar y Castigar-2021)
--------------------------------	--	---	---	---	--

La recomendación 16 de la CIDH está encaminada a superar el problema de la falta de confianza y legitimidad en los datos proporcionados por las entidades estatales. Sin embargo, la institucionalidad no ha generado la articulación suficiente que permita la armonización y actualización de sus datos con los proporcionados desde la sociedad civil, ni dispuesto los canales para facilitar el acceso público a dicha información y garantizar así su transparencia. En este sentido, el proceso de sistematización de las cifras ha seguido estando principalmente en cabeza de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pese a que la capacidad del Estado de investigar y caracterizar los hechos violentos es indiscutiblemente más amplia. La labor de las organizaciones de la sociedad civil, se ha dado en el marco de un imperativo seguimiento precisamente para contribuir al esclarecimiento, y como forma de control político dadas las faltas de garantías de parte del Estado Colombiano.

Las violencias ejercidas por parte de las fuerzas públicas en el marco del Paro Nacional demostraron una afectación sistemática a la vida e integridad física y mental de la ciudadanía que ejercía su derecho legítimo a la protesta. Ha sido demostrado ampliamente cómo de manera reiterada los miembros de la fuerza pública han hecho un uso inadecuado de sus armas y material de equipamiento, generando de manera deliberada afectaciones y daños hacia los manifestantes. Varios casos han sido tomados de manera emblemática por la

CIDH para sus informes, por ejemplo, el caso de Javier Ordoñez ocurrido en 2020, alertando sobre la contundencia del material audiovisual que da cuenta de las arbitrariedades y abusos cometidos en el procedimiento que concluyó con la muerte del ciudadano, mientras se encontraba bajo custodia policial en la ciudad de Bogotá (CIDH, 2020). Se encuentra registrado el momento en el que la policía utiliza choques eléctricos contra el civil aun cuando este se encuentra inmovilizado en el piso.

La institucionalidad utiliza un discurso que apela a los derechos humanos, a las garantías para su protección y respeto, mientras en la práctica prevalece la lógica del enemigo interno, el uso de la fuerza letal o en el mejor de los casos de manera desproporcionada, así como el tratamiento confrontativo y violento a la movilización social. Continuando así la deuda frente a un verdadero direccionamiento al desescalamiento de la violencia y las violaciones a los DDHH en contextos de movilización.

Las diferencias sustanciales en las cifras de los hechos de violencias, dejan en evidencia no solo la falta de acatamiento de la recomendación sobre la sistematización, sino también la decisión política del gobierno y de las fuerzas militares de negar la sistematicidad en las acciones y los patrones con los que se cometieron los crímenes. Así, como la ausencia de esfuerzos efectivos para remediar los problemas estructurales que han perpetuado el hecho de que el Estado Colombiano de un tratamiento y respuesta a la protesta social bajo las lógicas del conflicto armado.

Esclarecimiento y sanción ¿Cuáles son los avances en los procesos?

Respecto a las acciones concretas de investigación, judicialización y sanción penal, así como disciplinaria. Ni la Fiscalía General de la Nación, ni el sector defensa, ni la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría han publicado un informe actualizado que dé cuenta sobre los avances en materia de esclarecimiento acerca de los responsables de las violencias perpetradas contra la población civil en el marco del Paro Nacional 2021. La información más reciente publicada por parte de estas entidades estatales, corresponde a datos consolidados hasta el mes de junio del 2021.

A continuación, se presentan los datos extraídos de los informes de las entidades estatales y los proporcionados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Algunos de los datos que se presentan fueron obtenidos por las organizaciones mediante peticiones elevadas de manera particular a las entidades estatales competentes.

Tabla 2. Investigaciones disciplinarias hacia miembros de la fuerza pública			
Inspección General de la Policía³	Procuraduría General de la Nación⁴	Investigaciones en Justicia Penal militar	Investigaciones Justicia Ordinaria
231 procesos de los cuales 111⁵ mantienen vigencia hasta la respuesta del derecho de petición (Datos referenciados del Informe “Torturar y Castigar”-2021)	7 procesos disciplinarios hacia agentes de la policía por presunto uso excesivo de la fuerza, irregularidades en la captura y omisión en la captura de personas armadas. (Datos referenciados del Informe “Torturar y Castigar” -2021)	57 casos de la Justicia Penal Militar (Datos referenciados del Informe “Torturar y Castigar” -2021).	498 casos de civiles heridos en manifestaciones priorizadas en la Fiscalía General de la Nación. Por estos hechos, 429 noticias criminales fueron abiertas por presunto abuso de autoridad y lesiones personales. 970 noticias criminales por lesiones a 1.063 miembros de la Policía Nacional adelantadas por la Fiscalía General de la Nación (Datos referenciados en el Balance Mindefensa 28 de abril a 27 junio 2021)
218 investigaciones disciplinarias de las cuales no se registra vigencia a la fecha (Datos Referenciados del Balance Mindefensa 28 de abril a 27 junio 2021)		34 procesos de la Justicia Penal Militar (Datos Balance Mindefensa 28 de abril a 27 junio 2021)	696 noticias criminales en la Fiscalía General de la Nación por delitos ⁶ cometidos en contexto de la protesta social del 28 de abril al 29 de octubre de 2021. (Datos referenciados del Informe “Torturar y Castigar” -2021)

3 Oficio No. RS20211112040613 del Ministerio de Defensa Nacional del 12 de noviembre de 2021 referenciado presentado en el marco de la investigación del informe “Torturar y Castigar” (2021) por la Campaña Defender la Libertad, asunto de todas y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos -CSPP-, diciembre de 2021.

4 Oficio referenciado por el Derecho de Petición presentado a la Procuraduría General de la Nación en el marco de la investigación del informe “Torturar y Castigar” (2021) por la Campaña Defender la Libertad, asunto de todas y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos -CSPP-, diciembre de 2021.

5 Las conductas investigadas por la Inspección General de la Policía Nacional, incluyen: abuso de autoridad, agresión física, lesiones personales, homicidio, incumplimiento a órdenes, negligencia en el servicio, acceso carnal abusivo o actos sexuales abusivos, acoso sexual, agresión verbal, manipulación imprudente de armas de fuego, pérdida de elementos asignados y otras.

6 Se tienen en cuenta los siguientes delitos: desaparición forzada, Privación ilegal de la libertad,

Del análisis de los datos sobre el estado de los procesos contra los miembros de la fuerza pública, se puede afirmar que la información es insuficiente, y no está pertinentemente actualizada. La ausencia de resultados efectivos en materia de esclarecimiento parece ser una política de Estado que se ha anquilosado en las instituciones de justicia, mancillando los derechos de acceso a la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas y sus familiares, pero también el derecho a la verdad de la sociedad civil en general.

Con respecto a los casos que se encuentran en la Justicia Penal Militar y policial, las víctimas enfrentan barreras para acceder al derecho a la justicia como la falta de garantías de imparcialidad, debido proceso y falta de celeridad generada por los conflictos de competencias entre las jurisdicciones. Pese a que la jurisprudencia nacional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han reiterado que los casos en los que se investigan graves violaciones a los derechos humanos que comprometen a miembros de la fuerza pública deben ser de manera preferente adelantados por la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, en el caso de Dilan Cruz la Corte Constitucional ordenó a través de la sentencia de unificación SU-190 del 17 de junio del 2021⁷, que la actuación penal que se sigue contra el oficial de la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez, fuera trasladada al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria.

Estos conflictos de competencia generan demoras injustificadas en los procesos, como en el caso de Cristian David Castillo, asesinado en el marco del paro nacional 2021, presuntamente por un miembro de la Fuerza Pública:

Un juzgado de Bogotá envió a la Corte Constitucional el expediente de Cristian David Castillo, quien en junio pasado fue impactado por el proyectil de un arma gaseadora, al parecer, utilizada por el patrullero Gonzalo Moreno Gordillo. La defensa del policía pidió la competencia de la Justicia Penal Militar. “Este despacho considera que este asunto es competencia de la jurisdicción ordinaria, no obstante, a efectos de no vulnerar derechos ni garantías fundamentales del aquí indiciado, el señor Moreno Gordillo, este despacho enviará estas diligencias a la honorable Corte Constitucional”, consideró la jueza 28 penal de Garantías de Bogotá. Aceptó la solicitud de la defensa del patrullero, quien aseguró que no toda conducta delictiva que pudo haber cometido un policía es competencia de la justicia ordinaria (El Espectador, 2021).

Homicidio, Tortura, Lesiones personales, Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.

7 Sentencia SU-190 del 17 de junio del 2021. Magistrado ponente Antonio José Lizarazo Ocampo. Ver sentencia en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/SU190-21.htm>

Además, se presentan situaciones de revictimización y estigmatización de las víctimas quienes son valoradas como “vándalos”, “jóvenes rebeldes”, “vagos”, e incluso “terroristas”. Estas barreras podrían mitigarse si la administración de justicia se apegara a los desarrollos y precedentes jurisprudenciales anteriormente referenciados investigando estos casos por la justicia ordinaria. Incluso, aún prevalece un riesgo que los procesos cierren como resultado de vencimientos de términos lo cual podría conllevar a una vulneración del derecho a la justicia y reparación de las víctimas.

De otra parte, al revisar la información disponible en la página web de la Fiscalía General de la nación, los pronunciamientos del Presidente⁸, de los funcionarios de gobierno y de otras entidades estatales, así como de algunos congresistas⁹ y finalmente los reportes de prensa se evidencia cómo durante el Paro y en lo corrido de este tiempo, se ha generado una persecución y estigmatización en contra de las personas que apoyaron políticamente o participaron en las manifestaciones y en algunos casos a través de vías de hecho.

Es así como, por ejemplo, a los miembros de la Primera Línea se les ha tildado de “terroristas” y se les ha señalado además de pertenecer a grupos armados ilegales¹⁰. Sobre las acciones de investigación y procesos judiciales adelantados en contra de estas personas, el Fiscal General Francisco Barbosa afirmó que a Diciembre de 2021, había 130 indiciados activos en 18 casos, de los cuales uno se encontraba en etapa de indagación, 12 en investigación y 5 en juicio. Las capturas por estos hechos se presentaron principalmente en Bogotá y en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda y Cauca¹¹.

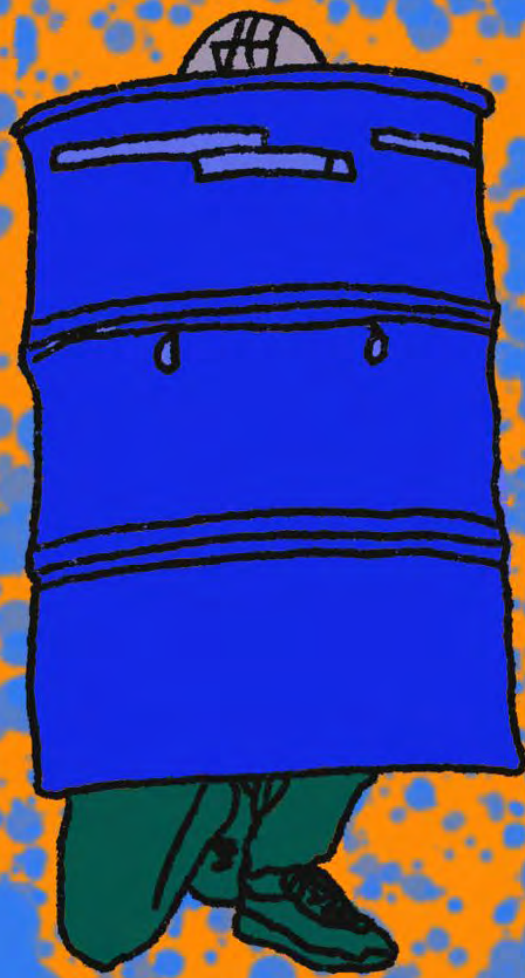
Seguimiento a los casos de homicidios cometidos en el marco del Paro

8 El presidente Iván Duque arremete en contra de la ‘primera línea’. Semana Noticias 25 de junio de 2021. Ver en: <https://www.youtube.com/watch?v=YAhdzmzJZkGg>

9 Pronunciamiento de María Fernanda. Junio 30 de 2021. Ver en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/01/maria-fernanda-cabal-critica-a-la-primera-linea-por-pedir-participacion-politica-esclavos-de-los-ideologos-elenos/>

10 Declaraciones del Fiscal General Francisco Barbosa, julio 5 de 2021. Ver en: <https://www.elespectador.com/judicial/primera-linea-de-defensores-de-la-protesta-a-imputados-por-terrorismo/>

11 Entrevista realizada por El Tiempo en diciembre de 2021. Ver en: <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/entrevista-fiscal-francisco-barbosa-hace-balance-de-2021-y-habla-de-casos-639973>



Nacional 2021 atribuidos a la Fuerza Pública y registrados por Indepaz

Indepaz sistematizó 80 casos de homicidios cometidos en el marco del paro nacional entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021, de los cuales 44 presuntamente fueron cometidos por miembros de la fuerza pública. Sobre estos últimos Indepaz realizó una revisión de la información pública disponible en la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Defensoría, así como medios de comunicación para identificar si existían reportes de avances en materia de esclarecimiento y sanción de los responsables, cual le permitió evidenciar lo siguiente:

Tabla 3. Seguimiento sobre esclarecimiento y sanción en los casos de homicidios atribuidos a la Fuerza Pública, de los 44 casos sistematizados por INDEPAZ		
44 Homicidios con presunta autoría de la Fuerza Pública (Dato referenciado de las bases de datos consolidados por Indepaz, 2021).	En 26 los casos no hay información pública de avance en los procesos judiciales y de esclarecimiento de los hechos	
	18 casos presentan avances mínimos	7 de los casos se encuentran en fase de imputación de cargos por parte de la Fiscalía
		9 están en etapa de investigación.
		1 caso con captura y medida de aseguramiento intramural, pero no se ha llegado un avance de esclarecimiento de los hechos.
		En 1 de los casos se envió el expediente a la corte constitucional para que sea este órgano, quien determine la competencia, situación que genera suspensión del proceso, pese a las pruebas existentes ¹² frente a la responsabilidad del funcionario de la Policía.

12 En libertad enfrenta caso policía imputado por muerte de joven durante Paro Nacional en Cali. Investigación adelantada por el medio Cuestión Pública y publicada el 20 de marzo de 2022. Ver en: <https://cuestionpublica.com/en-libertad-enfrenta-caso-policia-imputado-por-muerte-de-joven-durante-paro-nacional-en-cali/>



En la revisión sobre el avance en los procesos de los 44 homicidios registrados¹³ con presunta autoría de la Fuerza Pública Indepaz encontró que, en 26 de los casos no hay información pública que permita dar cuenta del esclarecimiento de los hechos y avance en los procesos. Lo anterior contrasta con las declaraciones del Fiscal José Reinaldo Cañón de la seccional Cali sobre uno de los casos, quien afirma lo siguiente:

“Los fiscales que llevan procesos no pueden hablar ni dar detalles del proceso que adelantan. Las investigaciones no han terminado. La directriz desde Bogotá es esa... Los fiscales no pueden hablar” (Cuestión Pública, 2021),

Esta situación es entendida por los familiares como un obstáculo en los procesos que adelantan, pues en algunos de los casos se ha determinado que las audiencias son de carácter público y; sin embargo, se prohíbe el ingreso de los medios de comunicación, exponiendo entre otras justificaciones un “riesgo a la seguridad nacional” (Cuestión Pública, 2021). Los familiares de las víctimas afirman que no es más que una artimaña que busca invisibilizar las responsabilidades del Estado.

Volviendo a la revisión, es preciso señalar que, en 18 de los 44 homicidios se encontró lo siguiente: 7 de los casos se encontraban en fase de imputación de cargos por parte de la Fiscalía hasta diciembre de 2021, 9 están en etapa de investigación. Sólo en uno de los casos hay captura y medida de aseguramiento intramural. Este es el caso en que se investiga la responsabilidad del mayor Jorge Mario Molano, señalado como presunto autor del asesinato del joven Santiago Murillo en la ciudad de Ibagué el 01 de mayo de 2021. Sin embargo, la captura de Molano, no ha llevado a un avance de esclarecimiento, por el contrario, familiares de la víctima y la jueza del caso, señalan que se ha dado una dilatación del proceso, pues en múltiples ocasiones ha cambiado de abogado, generando suspensiones y obstaculizando el avance del debido proceso. Situaciones que podrían resultar en el vencimiento de los términos.

13 En libertad enfrenta caso policía imputado por muerte de joven durante Paro Nacional en Cali. Investigación adelantada por el medio Cuestión Pública y publicada el 20 de marzo de 2022. Ver en: <https://cuestionpublica.com/en-libertad-enfrenta-caso-policia-imputado-por-muerte-de-joven-durante-paro-nacional-en-cali/>

Otro de los casos de homicidio con mayor evidencia frente a la participación de agentes de la Fuerza Pública, es el de Marcelo Agredo Inchima el 28 de abril de 2021. Sobre su asesinato circularon múltiples vídeos que pusieron en evidencia, cómo el patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, acciona su arma impactando la cabeza del menor de 17 años y causando su muerte de manera inmediata. Cuestión Pública, ha hecho seguimiento a este caso e indica que Medicina Legal determinó que la muerte de Marcelo, se debió a un trauma craneoencefálico por proyectil de arma de fuego con carga única, concluyendo además que se categoriza el hecho como un homicidio violento¹⁵.

La captura del patrullero Luis Ángel Piedrahita se dio el 13 de mayo de 2021, luego de que en indagatoria la Fiscalía lo señalara como autor del delito de homicidio en menor de edad. Sin embargo, posteriormente fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Así mismo, su defensa ha buscado de mil formas que sea la Justicia Penal Militar la que lleve el caso, por lo que su expediente se envió a la corte constitucional, para que sea este órgano, quien determine la competencia y la pertenencia del proceso (Cuestión Pública, 2022).

El hecho de que la opinión pública no tenga acceso a los avances y audiencias de los procesos, va en contravía del derecho a la información sobre temas de interés público más aún sobre hechos que comprometen la responsabilidad de los agentes del Estado. Pues no es posible establecer si los implicados en tales delitos y quienes dieron las directrices sobre estas acciones, continúan ejerciendo esta función pública a pesar de las graves denuncias y presunto involucramiento en conductas penalmente sancionables.

Para finalizar este artículo, Indepaz hará referencia al avance más significativo en materia de esclarecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, el cual está relacionado con la recomendación 33 de la CIDH sobre las afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en el marco las protestas, insta al Estado a investigar y, en su caso, juzgar y sancionar, con apego a las garantías del debido proceso, a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas.

14 Ver dictamen de Medicina Legal: https://photos.google.com/share/AF1QipPf3JpElv2i5kj-VmFK_ZH8asqn0jivV6_zDcgG13OnA_z1ARZpfl4KBHw75Z_w6pw?pli=1&key=U282Vl-VITC1PX2Jkd0xHdmRmX2NGaEtZT1hjVmhR

En este sentido, al revisar la información disponible en el último balance emitido por Mindefensa sobre afectaciones en el marco del Paro, se evidencia que esta entidad efectúa un énfasis en la identificación de las afectaciones a bienes públicos. El informe señala que “la Fiscalía imputó cargos a 224 -civiles- como presuntos responsables de delitos -contra bienes públicos y privados-, de los cuales 80 recibieron medidas de aseguramiento” (Mindefensa, 2021).

Adicionalmente, al revisar los comunicados publicados por la Fiscalía General de la Nación, es posible afirmar que la labor de la Fiscalía se ha centrado especialmente en mostrar avances sobre la captura y judicialización de personas que presuntamente participaron en hechos de violencia, afectaciones a bienes públicos y bloqueos. Así, como en demostrar la tesis que ha sostenido el gobierno acerca de la infiltración de los grupos armados en las movilizaciones.

Exponiendo solo algunos de los casos, el 14 de julio de 2021 la Fiscalía comunicó haber capturado a “Alias el tigre Bladimir “un presunto cabecilla del ELN que habría estado tras los bloqueos auspiciando con recursos y personal actos violentos y bloqueos durante las movilizaciones en Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca) (Fiscalía General de la Nación, A, 2021).

De igual forma, el Fiscal general Francisco Barbosa emitió el 11 de agosto de 2021 un comunicado en que da cuenta de los avances en investigación sobre las violencias en el marco del Paro Nacional y se refiere especialmente, a la captura de 25 personas que habrían participado en hechos ocurridos en el Valle del Cauca, presuntamente vinculados a dos grupos delincuenciales: El grupo de “Los del Oriente”, a quienes se les señalaba de participado en por lo menos 19 eventos delictivos y se afirmó que infiltraron la protesta social, aprovechando las manifestaciones ocurridas desde abril último, para cometer hurtos en establecimientos comerciales en los sectores Calipso y Paso del Comercio, en el oriente de la ciudad (Fiscalía General de la Nación, 2021). Por otra parte, el grupo de “La Sultana” señalados de atacar con piedras, bombas molotov y armas de fuego el Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio El Cortijo y la Estación de Policía del barrio La Sultana durante las manifestaciones violentas presentadas en el marco del paro nacional. Además, se le acusó de haber hurtado elementos logísticos y de intendencia de los agentes, y facilitado la fuga de 38 personas que

se encontraban detenidas en esos lugares (Fiscalía General de la Nación, B, 2021).

Un caso alarmante frente a la judicialización de personas del movimiento social es el que se presentó el 31 de julio de 2021, cuando Nohora Delfina Vega Márquez, integrante de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), fue capturada y se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, por presuntamente haber promovido en el sector conocido como Caricare y en la vía que conduce al complejo petrolero Caño Limón, entre Arauca y Arauquita (Arauca).

La evidencia técnica da cuenta de que Vega Márquez tendría vínculos con las disidencias del frente décimo de las FARC. Al parecer, estaría involucrada en actividades denominadas como ‘movilización de masas’, con el propósito de obstruir vías en retaliación por la judicialización de 11 personas el 27 de mayo pasado, entre funcionarios y representantes de organizaciones, que harían parte de una red de apoyo al servicio del grupo armado residual (Fiscalía General de la Nación, B, 2021).

El 12 de abril de 2022 la fiscalía dio a conocer a los medios la condena de 4 años impuesta por el Juzgado Primero Especializado de Arauca (Arauca) con funciones de conocimiento por el delito de concierto para delinquir (Fiscalía General de la Nación, C, 2021).

En esta misma línea se puede mencionar también, que el 22 de enero de 2022 el Espectador publicó un artículo sobre los expedientes del Paro Nacional que avanzaron en la justicia durante el 2021. En dicho reporte se prensa, el medio menciona el caso de Juan Fernando Torres presentado por la fiscalía como “Alias el Narrador” en captura realizada el 29 de julio de 2021, acusado de transmitir en vivo “acciones terroristas” contra la fuerza pública y la infraestructura de la ciudad de Medellín, así como de “dar instrucciones a través de insultos para para lograr mayor afectación a los bienes públicos y privados. La defensa de Juan Fernando Torres ha insistido en que este hacía parte de la Primera Línea y que es un profesor reconocido en su ámbito (Castillo, 2021).

Los casos anteriormente expuestos, son muestra de que la constancia con la que la Fiscalía General se ha dispuesto, frente a la tarea de dar a conocer los avance y resultados en esta línea de su investigación sobre los delitos ocurridos en el Paro, está indiscutiblemente muy distante, a la que se evidencia frente a la publicidad de las investigaciones sobre a las violencias perpetradas contra la

población civil, especialmente aquellas que comprometen la responsabilidad de la fuerza pública. Así, el mensaje político que deja este balance es que entre los derechos a la vida, la integridad, y el derecho a la propiedad, este último tiene mayor relevancia para el gobierno y la Fiscalía General. Prevalenciando la concepción de “seguridad centrada en el Estado y los bienes privados” por encima de la concepción de una seguridad humana y garantista.

Referencias Bibliográficas

Castillo, C. (2 de enero de 2021). Los expedientes del paro nacional que avanzaron en la justicia durante 2021. Obtenido de El Espectador. <https://www.elespectador.com/judicial/los-expedientes-del-paro-nacional-que-avanzaron-en-la-justicia-durante-2021/>

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (2021). Observaciones y recomendaciones: visita de trabajo a Colombia. CIDH.

Cuestión Pública. (22 de diciembre de 2021). Cuestión Pública. Obtenido de Mamá, yo estoy bien”: las últimas palabras de Michael Aranda Pérez: <https://cuestionpublica.com/mama-yo-estoy-bien-las-ultimas-palabras-de-michael-aranda-perez/>

Cuestión Pública. (20 de Marzo de 2022). En libertad enfrenta caso policía imputado por muerte de joven durante Paro Nacional en Cali. Obtenido de Cuestión Pública: <https://cuestionpublica.com/en-libertad-enfrenta-caso-policia-imputado-por-muerte-de-joven-durante-paro-nacional-en-cali/>

Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP; Campaña Defender La Libertad. (2021). Torturar y castigar a quien protesta. Bogotá: Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP; Campaña Defender La Libertad.

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (2020). Uso excesivo de la fuerza policial y preocupación por los hechos de violencia en el marco de las manifestaciones públicas en Colombia. Bogotá, D.C: CIDH.

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2021). Informe defensorial visita CIDH: Colombia protesta social abril-junio 2021. Bogotá, D.C: Defensoría del Pueblo de Colombia

Fiscalía General de la Nación. (14 de julio de 2021). Fiscalía capturó a cabecilla del ELN que estaría tras bloqueos en Cauca y Valle. Obtenido de Fiscalía General de la Nación: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/fiscalia-capturo-a-cabecilla-del-eln-que-estaria-tras-bloqueos-en-cauca-y-valle/>

Fiscalía General de la Nación. (11 de agosto de 2021). Judicializados 25 presuntos integrantes de dos estructuras que habrían participado en hechos delictivos durante las manifestaciones violentas en Cali. Obtenido de la Fiscalía General de la Nación: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/judicializados-25-presuntos-integrantes-de-dos-estructuras-que-habrian-participado-en-hechos-delictivos-durante-las-manifestaciones-violentas-en-cali>

Fiscalía General de la Nación. (12 de abril de 2022)). Condenada a cuatro años de prisión integrante de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Obtenido de la Fiscalía General de la Nación: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condena->

da-a-cuatro-anos-de-prision-integrante-de-la-asociacion-de-campesinos-de-arauca-aca/
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-. (2021). OBSERVATORIO
DE DDHH, CONFLICTIVIDADES Y PAZ. Bogotá: INDEPAZ.

El Espectador. (11 de diciembre de 2021). Inicia proceso penal contra patrullero Cristian
David Castillo. El Espectador: [https://www.elespectador.com/judicial/inicia-el-proce-
so-penal-contr-patrullero-por-homicidio-de-cristian-david-castillo/](https://www.elespectador.com/judicial/inicia-el-proceso-penal-contr-patrullero-por-homicidio-de-cristian-david-castillo/).

Ministerio de Defensa. (2021). Balance General - Paro Nacional 2021. Bogotá: Minde-
fensa

Temblores ONG. (2021). Plataforma Grita. Bogotá, D.C: Temblores ONG.

SEGUNDA PARTE:

EL PARO DESPUÉS
DEL PARO





Fotografía: Santiago González



Fotografía: Alejandro Calderón



Colombia 2021 – 2022: el paro después del paro¹⁵

Camilo González Posso

Con tantos acontecimientos turbulentos que vive Colombia en 2021 se puede pensar que se ha entrado a una fase de crisis de los subsistemas a todos los niveles; que es al tiempo fase de desequilibrios extremos, de cambio y posibilidad de rupturas, en el régimen político y en los modelos socio económicos, cuyo desenlace va a marcar toda la década.

Después de 50 días de insubordinación social generalizada están al desnudo procesos, sujetos y fuerzas contradictorias, interactuando y chocando para darle curso a la historia del presente y del inmediato futuro.

El régimen hegemónico intenta recomponerse recurriendo a la fuerza y a pequeñas reformas que le den tiempo para recuperar otra “normalidad”. El gobierno, en medio de su desprestigio, acentúa sus instrumentos de represión y reagrupa a los partidos de la coalición en estrategias de guerra interna que incluyen como objetivo a la protesta social.

En la coyuntura, la represión y el terror han escalado contra el levantamiento urbano, pero no logran imponer el miedo ante el surgimiento de múltiples formas de resistencia y de la revolución de aspiraciones que se expresa en la turbulencia acelerada.

Tras 50 días de Paro Nacional y movilizaciones, el gobierno ha desplegado fuerzas excepcionales ante la insubordinación que ha llegado momentáneamente a un techo y tiende a dar paso a diálogos locales sin negociación nacional. Al mismo tiempo desde cada espectro, el del poder desde arriba y el del poder de la revuelta, se ha mostrado la fuerza y la debilidad. Es en ese juego de procesos en donde se ven las posibilidades de un primer desenlace que puede combinar, reestructuración del régimen y del gobierno y acumulación de procesos para nuevos estallidos. Pero esa trayectoria, en condiciones de alta disipación e inestabilidad, puede incluir mayor crisis de gobierno por su incapacidad de ofrecer soluciones y por las pugnas en la coalición uribista. Una posibilidad es el deterioro de la situación con nuevas

15 Artículo publicado en Junio de 2021, Bogotá, D.C.

formas de militarización contestadas desde protestas fraccionadas: crisis arriba y falta de cohesión abajo para precipitar los cambios en lo inmediato.

En todo caso, un impase en la coyuntura tiende a estar acompañado por movimientos societarios y configuración de poderes populares desde la base que seguirán marcando esta fase crítica tanto en la movilización de protesta, como en la interacción con redefiniciones institucionales y en la campaña para las elecciones de nuevo congreso en marzo de 2022 y de Presidente de la República en mayo – junio del próximo año.

Desde el régimen se pretende una recomposición definiendo la situación como una nueva guerra o prolongación de la anterior: guerra al terrorismo de baja intensidad; guerra a la conspiración internacional de socialismos, al narco terrorismo o a la fantasmagórica revolución molecular.

Desde el bloque uribista las amenazas a la normalidad del régimen son presentadas como amenazas a la seguridad del Estado, al orden constitucional que no respeta, pues gobierna desde la arbitrariedad y el acomodo de la legalidad a su amañó.

El supuesto carácter terrorista de la amenaza, que el uribismo imagina camuflada en medio de las protestas urbanas y rurales, les justifica reforzar el totalitarismo, inventar estados de excepción y recomponer el Estado de Guerra que de hecho han mantenido, con variaciones, en los últimos setenta años.

Una de las preguntas pertinentes es si ese régimen, con sus viejos y nuevos aliados, podrá aplastar el levantamiento iniciado en abril de 2021 como ha hecho en el pasado con las rebeliones pacíficas; tal como ocurrió con el genocidio al gaitanismo, el fraude en la sombra para mantener el Frente Nacional en 1970, la dictadura del Estado de Sitio elevada a esencia de gobierno en el Post-Frente Nacional y ante el paro cívico de 1977. Y la imposición a toda la sociedad de la guerra paramilitar entre 1995 y 2010.

Otra manera de ver el problema es preguntar si este levantamiento que se da, en buena parte, por las condiciones abiertas por los acuerdos de paz y la oportunidad de transición al postconflicto, podrá ser el acelerador de una ruptura, de un salto hacia la democracia de solidaridad, con nuevas fronteras de bienestar y nuevos paradigmas, o será sometida por las hegemonías que han imperado en Colombia. Muchos en el bloque hegemónico hicieron el aprendizaje

en una guerra de setenta años, con 15 millones de víctimas y 500.000 homicidios políticos. Han sido maestros en una lógica implacable de respuestas cívico-militares a las luchas sociales, como si fueran parte de la guerra antisubversiva o contra el narcoterrorismo, pero ahora se encuentran ante procesos sociales y políticos que no se dejan encuadrar en los lenguajes y estrategias de las guerras y que han abierto un periodo histórico de ruptura desde poderes alternativos contruidos en la calle, en la comuna, en la democracia directa.

Los niveles de la insubordinación social en el Paro Cívico Nacional

El 28 de abril de 2021, en uno de los picos más altos de la pandemia del COVID 19 en Colombia, millones de colombianos respondieron al llamado a un Paro Nacional Indefnido, convocado por el comité que llamó a otro paro nacional en noviembre de 2019. Según el informe de la Policía Nacional, en los primeros 44 días, hasta el 10 de junio se habían registrado 13.205 acciones en el 77 % el territorio nacional, incluidas 6.738 concentraciones, 2.399 marchas, 3.369 bloqueos de vías y 666 movilizaciones (MinDefensa, 2021).

Esas estadísticas muestran la amplitud de la explosión social que se lee en toda su dimensión agregando otras expresiones multitudinarias como la participación de millones de familias en los llamados cacerolazos y si se tiene en cuenta la interacción de personas y colectivos, en decenas de millones de mensajes en las redes sociales y la conformación de redes de resistencia y solidaridad en centros urbanos y en comunidades rurales étnicas y campesinas. La sociedad colombiana entera ha estado en acción siguiendo minuto a minuto los acontecimientos, tomando partido, expresándose desde la intimidad, en el vecindario, en comunidad y en la movilización en el espacio público.

En estos momentos de turbulencia general no se puede hablar de la causa y ni siquiera de las causas de la insubordinación, pues hay que entender la matriz de procesos y determinantes implicados y autorregresivos:

- Procesos reivindicativos contra las medidas neoliberales/neoconservadoras de empobrecimiento e inequidad en medio de la pandemia.

- Procesos de resistencia a la recomposición de violencias y del Estado de Guerra con la transición a la paz.
- Procesos regionales contra la sobreexplotación, el despojo y la discriminación de territorios.
- Procesos sectoriales de reivindicación: camioneros, maestros, pescadores, sindicalistas, asalariados del Estado, pensionados, desescolarizados, desterrados, victimizados.
- Procesos de re-emergencia de movimientos sociales revolucionados: de mujeres, género, ambientales, étnicos, artísticos y de juventudes.
- Procesos políticos alternativos de oposición democrática al gobierno autoritario y al régimen totalitario hegemónico.
- Revolución cultural antisistema. Contra el individualismo, el consumismo, la depredación y la alienación; por la emergencia de nuevas espiritualidades, multi e interculturales y de paradigmas de la vida, la ciencia y de lenguajes de la imaginación y la creatividad.

El llamado Pliego Nacional de Emergencia se invocó como detonante del encadenamiento de reivindicaciones que responden a las medidas antisociales del gobierno en la coyuntura de catástrofe y depresión económica en medio de la pandemia¹⁷ (Comité Nacional del Paro, 2021).

Ese pliego sintetiza el repudio a los símbolos de la inequidad y el totalitarismo al reclamar la derogatoria de la reforma tributaria y de la política que pretende justificar medidas impositivas de saqueo a los pobres y a la clase media a favor de los más ricos y poderosos; al incluir la exigencia de implementación de los acuerdos de paz y exigir el freno a la dinámica de asesinato de líderes sociales, de excombatientes reincorporados y la contención de la escalada de masacres; al reclamar garantías efectivas para los derechos a la salud, a la educación, a la participación y consulta, y garantías para la protesta pacífica sometida a la brutalidad policial y al tratamiento de guerra.

17 Conclusiones de la Junta Directiva Nacional Extraordinaria, en <https://fecode.edu.co/index.php/pliego-de-peticiones-comite-nacional-de-paro/20-noticiasprincipales/293-encuentros-departamentales-escuela-territorio-de-paz-y-iii-congreso-pedagogiconacional.html>

El papel que ha desempeñado ese Comité de Paro en las jornadas de 2019, no obstante, sus limitaciones de composición y representatividad, ha permitido que ahora en 2021 sea reconocido su liderazgo y que desde muchos sectores se acoja la convocatoria como oportunidad para expresar el descontento e indignación con la ingobernabilidad, la indolencia y la corrupción del régimen. Es también oportunidad para repudiar la ausencia de respuestas a exigencias locales, regionales y sectoriales; para expresarse contra la indiferencia ante el bloqueo total de oportunidades para la juventud agravada en la recesión y en la pandemia; ante la exacerbación de la discriminación, el machismo y el racismo; y para señalar la incapacidad del gobierno de prevenir y desarticular grupos armados paramilitares y mafiosos que se recomponen en el posacuerdo aprovechando la no implementación integral, acelerada y de buena fe de los acuerdos de paz¹⁸.

Los sujetos colectivos empoderados en estas causas y resistencias se movilizan en el Paro Cívico Nacional concurriendo con sus imaginarios y reivindicaciones, como ondas que se sincronizan en un huracán de ilusiones y de aspiraciones. Se confunden en la insubordinación general y al mismo tiempo mantienen sus identidades como procesos, como subsistemas de un complejo dinámico en desequilibrio.

Se puede hablar de diversidad de procesos y de motivaciones, de niveles anillados que tienen intensidades distintas, aspiraciones y formas particulares de implicarse en la insubordinación general. También horizontes y tiempos distintos en los que se pueden distinguir los que quieren soluciones a la urgente necesidad de supervivencia cotidiana, los que quieren cambio de políticas y los que por pensamiento u obra configuran fuerzas hacia transformaciones estructurales, de régimen y sistema. Los primeros pueden ser los más explosivos; entre los segundos están los inclinados a la negociación sectorial o de grupo, y entre los terceros están los reformistas más radicales y los movimientos revolucionados de largo aliento.

La denominación de Paro Cívico Nacional es la que parece ajustarse mejor a las características de la convocatoria pues los protagonistas son las multitudes plurales, existe en la acción de protesta y no desde la huelga empresarial o el

18 González Posso C, 2021, en <http://www.indepaz.org.co/colombia-en-el-borde-del-caos-puede-evitarotra-guerra/>

paro decidido por asalariados. Lo que fue concebido como unas jornadas de exigencias de emergencia en medio de la crisis económica y la pandemia se convirtió en una explosión social en la que todos y cada sector y comunidad salió a reclamar con su pliego de demandas represadas y al rechazar las políticas del gobierno. La brutalidad de la respuesta de la fuerza pública, con asesinato de jóvenes en las comunas o barriadas de Cali, fue respondida por mayor indignación y a diversa escala la secuencia fue replicándose en todo el país en una escalada de represión brutal contestada con levantamiento popular y acumulación de reclamos contra políticas anti sociales simbolizadas en la reforma tributaria y en la negativa del gobierno a responder a los gravísimos problemas del empobrecimiento, el hambre, el desempleo, las quiebras y una larga lista de calamidades en medio de la pandemia.

Todos estos procesos y demandas están interrelacionados por la emergencia de los ya mencionados movimientos societarios con un papel protagónico central de la juventud, de la Minga étnica, las mujeres, los artistas y la revolución del conocimiento que incluye a estudiantes y al conjunto de la academia.

La juventud y las mujeres están ocupando la primera línea de las resistencias y de una gran revolución de conciencia y cultural que impregna las movilizaciones. Al mismo tiempo se articulan los procesos en resonancia y desequilibrio con la presencia en acción de varias generaciones, que se expresan en colectivos, en formas novedosas de organización y de construcción de democracia directa desde la comuna, el barrio, la vereda, la junta, el cabildo, la asamblea y la explosión de poderes populares desde la base social y de nuevas territorialidades urbanas y rurales.

En el Suroccidente, Tolima, Putumayo, Catatumbo, La Guajira, Caldas, Antioquia, entre otros, ha sido notable el papel de la Minga Indígena con sus expresiones de solidaridad con la protesta urbana y sus proclamas por un cambio de sistemas y paradigmas. En esta ocasión como en las movilizaciones de la última década, la Minga Indígena no se centra en listas de reivindicaciones sino en propuestas de redefinición de estructuras sociales y políticas. Esta Minga representa dentro del Paro Cívico Nacional el cuestionamiento más radical al modelo neoliberal/neoconservador, llamando a un nuevo pacto de la sociedad

humana con la madre tierra, a colocar la vida de todos en el centro de las cosmovisiones, y llamar a la convivencia pacífica pluricultural, con respeto a las autonomías, identidades y territorialidades.

La geografía política heterogénea y desigual en el Paro Cívico Nacional

El levantamiento ha sido nacional, generalizado, pero al mismo tiempo ha tenido diferencia de radicalidad y modalidades de acción y de represión por regiones. En la geografía nacional se pueden distinguir regiones de la insubordinación.

La región con mayor potencia de movilización ha sido el Suroccidente, con epicentro en Cali, que incluye al Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Allí se articula hacia el norte el eje cafetero y hacia el oriente Huila. Bogotá y la Sabana cundiboyacense están en segundo lugar. Les sigue Medellín y todo el Valle de Aburrá; Santanderes en el polígono que conforma Bucaramanga, Magdalena Medio y Catatumbo. En la Orinoquía y el Andén Pacífico, con población más dispersa, la movilización se ha expresado en las capitales, lo mismo que en la Costa Caribe con acciones en muchos municipios, aunque sin la radicalidad de Cali o el Suroccidente.

De conjunto la insubordinación ha sido urbano – rural, con 80 % de las acciones en centros urbanos y 20 % en las vías con presencia de grupos campesinos, étnicos y de camioneros en paro. Más de la mitad de las acciones radicales de protesta se han presentado en el Suroccidente con epicentro en Cali, en donde también se ha concentrado la brutalidad de la represión desatada por el gobierno¹⁹. Junto con Cali, se han desplegado acciones en Buenaventura, Norte del Cauca, Popayán, Pasto y en casi todos los municipios de la región incluidos 11 del Valle del Cauca. Algo similar había ocurrido a finales de 2019 cuando el paro nacional.

Bogotá y la zona central ha sido otro de los polos de la protesta, con permanente movilización urbana, conformación de puntos de resistencia y corte de vías o bloqueos con impacto en casi todos los municipios de Boyacá y Cundinamarca.

¹⁹ La Explosión de Cali es la del Valle, El Pacífico y el Suroccidente, en <http://www.indepaz.org.co/laexplosion-de-cali-es-la-del-valle-el-pacifico-y-el-suroccidente/>

Junto con el Valle del Cauca y la ruta del eje cafetero hasta La Línea, ha sido la región con mayor impacto del paro de los camioneros y volqueteros.

En las otras regiones el Paro Cívico Nacional ha contado con manifestaciones, concentraciones, puntos de resistencia y cortes de vías, al ritmo de las convocatorias nacionales; en algunas ciudades se han presentado confrontaciones ante la brutalidad policial, especialmente en Medellín, Pereira, Armenia, Ibagué, Bucaramanga y Cartagena.

El gobierno informó de 3.369 bloqueos de vías dentro de las ciudades y de tránsito intermunicipal, entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021. La mayoría de esos bloqueos han sido cortes de poca duración en vías de tránsito urbano. Los puntos de resistencia prolongados organizados con las comunidades que rodean la llamada Primera Línea se han dado en Cali (31) y en Bogotá (8). Los camioneros y volqueteros ubicaron más de 150 puntos de bloqueo en vías de la región central y en menor número en otras regiones; se mantuvieron esperando respuesta a exigencias mínimas sobre peajes y chatarrización que el gobierno dilató privilegiando la represión y la amenaza de expropiación de vehículos.

El paro en Buenaventura ha sido de gran impacto por el bloqueo a las operaciones en el principal puerto de Colombia y se prolongó por la ineptitud del gobierno en solucionar elementales exigencias de cumplimiento de los pactos de inversión firmados en 2017.

En muchos sitios se han realizado mini bloqueos espontáneos, organizados por pequeños grupos pacíficos que desde veredas han salido a las vías secundarias y terciarias a acompañar las jornadas de movilización. La Minga Indígena ha realizado intermitentes bloqueos en la vía panamericana entre Cali y Popayán y otras comunidades indígenas y campesinas han salido a plantones con bloqueos cortos en Caldas, Choco, Córdoba, Nariño, Caquetá, Huila, Putumayo, La Guajira y en el entorno de territorios colectivos.

Han sido bloqueos pacíficos, sin gente armada, con corredores humanitarios para la misión médica y bienes de consumo. Se han presentado choques cuando ha intervenido brutalmente el ESMAD.

Esa explosión de bloqueos prolongados ha sido muestra de la radicalidad de la protesta y al mismo tiempo un factor de su desgaste al convertirse en el

mayor foco de confrontación, represión, con serias afectaciones al transporte de alimentos, elementos de salud y bienes para la subsistencia cotidiana. La negativa del gobierno a ofrecer inmediatas soluciones y a negociar entrampó los bloqueos más críticos (Buenaventura, camioneros, puntos de resistencia) y la apertura de los llamados corredores humanitarios y la transformación de bloqueos en puestos de control comunitario no impidió que se debilitara la conexión del movimiento con sectores de la población afectados ya por la crisis.

Los bloqueos permanentes, o de duración traumática para la población, han sido considerados inconvenientes por el Comité Nacional del Paro y por los sectores más organizados que han buscado dar solución dialogada a situaciones críticas que escapan a directrices centrales.

No debe olvidarse que aunque la atención del gobierno y los medios de comunicación se haya concentrado en los bloqueos y confrontaciones violentas, las expresiones multitudinarias se han registrado en más de 10.000 acciones que suman concentraciones, marchas pacíficas, eventos culturales y cacerolazos, realizadas en ciudades y en centros poblados. Esta es la fuerza mayor de la insubordinación social que se conjuga con la construcción de nuevas formas organizativas desde el control comunitario y los puntos de resistencia.

Estas movilizaciones muestran la amplitud de la explosión social que ha tenido expresiones en más de 862 municipios de los 1.122 que tiene Colombia y al mismo tiempo la heterogeneidad de formas de acción, intensidad de las confrontaciones y los niveles diversos de reivindicaciones que confluyen en sentimientos comunes y en un rechazo generalizado al gobierno y al régimen encabezado por el uribismo. Las consignas más frecuentes en las marchas, concentraciones, plantones, bloqueos, puntos de resistencia, eventos culturales, muestran el sentido político suprapartidista contra el régimen: “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un gobierno son los paracos en el poder”; “Uribe paraco, el pueblo está verraco”

La heterogeneidad y diversidad se manifiesta también en la descentralización y autonomía de organizaciones, formas de representación y vocería.

El Comité Nacional de Paro está integrado por los ejecutivos de las centrales sindicales, con presencia de segundo plano de voceros de algunas

organizaciones de tercer nivel de jóvenes, mujeres, indígenas y ONG. Esa representación parcial ha sido suficiente para orientar las convocatorias a jornadas nacionales como las del 28 de abril, 1o, 6, 12, 18 y 28 de mayo y 9 de junio²⁰. En las ciudades, municipios y veredas en donde han seguido las convocatorias especialmente con marchas pacíficas, como en la Costa Caribe y Antioquia, se han conformado comités de coordinación y redes.

En Cali el protagonismo central lo han tenido las Unidades de Resistencia desde las comunas y barrios, los artistas y los estudiantes, que se coordinan en asambleas locales, de ciudad, con la Minga Indígena y la red de organizaciones de comunidades negras de la subregión que cubre hasta el Norte del Cauca y Buenaventura. El Comité de Paro de Buenaventura tiene su origen en los paros de 2017 y se identifica con la defensa de lo pactado desde hace cuatro años, intentado conducir la multiplicidad de expresiones de protesta en ese puerto.

El desgaste de la estrategia de guerra y del modelo violento de reproducción son parte de la crisis del régimen

La persistencia de la insubordinación y la protesta a pesar de la brutalidad de la represión desencadenada en contra del Paro Cívico Nacional es un signo de las dificultades de la transición al postconflicto y al mismo tiempo muestra la crisis del régimen y del gobierno uribista.

El detonante de la explosión o insubordinación social no fue solo el empobrecimiento de la población en choque con las políticas inequitativas, sino el que éstas se han pretendido imponer reforzando el totalitarismo e intentando recomponer un Estado de Guerra desarticulado por los acuerdos de paz y las dinámicas y expectativas de transitar a un postconflicto democrático.

El triunfo electoral del uribismo basado en la coalición de fuerzas del régimen, marcó una etapa en la contra ofensiva para desmontar los acuerdos de paz y reestablecer ese Estado de Guerra que ha sido soporte de un régimen que se basa en la violencia para acumular riqueza y reproducir su poder en todas las esferas.

20 El informe presentado por el Comité Nacional de Paro a la CIDH el 8 de junio de 2021, incluye una relación detallada de las jornadas y de las conversaciones con el gobierno. Ver <https://www.colectivodeabogados.org/informe-de-comite-nacional-de-paro-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/org.co/laexplosion-de-cali-es-la-del-valle-el-pacifico-y-el-sur-occidente/>

Pero a diferencia de lo ocurrido en décadas pasadas, el proyecto totalitario de la ultraderecha ahora choca con la emergencia de fuerzas transformadoras defensoras de una paz construida en pactos y en transformaciones estructurales basadas en la solidaridad, la democracia real, la equidad, el pluralismo, la no violencia, el rechazo al poder mafioso y corrupto y la realización de los derechos humanos con vigencia efectiva del Estado Social de Derecho.

La aprobación de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, y los procesos que ha desencadenado o reforzado en la conciencia colectiva, ha impulsado hacia adelante profundos movimientos sociales que son vistos con razón como amenaza para el régimen corrupto autoritario. Por esto la respuesta de guerra a la protesta es parte de la estrategia general de refundación del Estado, de mantener el dominio mediante el terror y de aplastar a toda oposición o proyecto alternativo acusándolo de ser parte de una conspiración criminal, de un plan de potencias extracontinentales o del narcoterrorismo internacional²¹.

El gobierno ha quedado atrapado en su fanatismo neoconservador y en su propia camisa de fuerza militarista. Se trata de un gobierno de crisis desde el origen, secuestrado por un caudillo experto en la guerra paramilitarizada, que montó un gobierno paralelo desde el 7 de agosto de 2018 y lo destapó como para – gobierno al momento de la crisis mayor de ingobernabilidad, cuando el Paro Nacional y la insubordinación social pacífica desplegó su mayor fuerza sobreponiéndose a la brutalidad policial.

Las órdenes desde el para- gobierno, presentadas como declaraciones del partido Centro Democrático, pero en realidad dictadas por el caudillo, le quitaron capacidad de diálogo o negociación al gobierno. El caudillo se impuso desconociendo acuerdos y preacuerdos en las mesas de conversación con el Comité de Paro, con los voceros cívicos de Buenaventura, con los camioneros o en las mesas locales en Cali, el Cauca, Huila, Putumayo y otras latitudes. Para el jefe del partido que somete al gobierno e impone su mandato en la Fiscalía y órganos

21 Ver Informe de Temblores ONG, Indepaz y Païs a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, en, <http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-indepaz-ypais-a-la-cidh/>

de control, es preferible asumir los costos de aplastar la protesta y militarizar los puntos de resistencia o bloqueo, que concertar medidas socioeconómicas, de garantías de seguridad y políticas públicas con poderes contruidos en la calle.

El gobierno bicéfalo ha logrado reestructurar alianzas para contener la crisis. Intentó disminuir la presión retirando el proyecto de reforma tributaria que fue detonante del paro del 28 de abril, cambió al ministro de hacienda que ha encabezado las políticas antisociales neoliberales,; cambió ministros ampliando cuota a aliados del Cambio Radical y del Partido de la U, anunció un pequeño programa para bajar costos de matrícula en universidades públicas, y desempolvo un paquete económico y social que tenía aprobado desde febrero de 2021 (Gonzalo, 2021)²².

En la última semana ha ampliado los programas de vacunación y ha flexibilizado las medidas de cuarentena en la pandemia. Todos han sido anuncios unilaterales que en la estrategia del uribismo no quieren ser presentados como pactos en mesas de negociación con los voceros del paro o de expresiones de la protesta social.

Al momento de mayor despliegue de la movilización y de formas inéditas de represión, en la semana seis de la insubordinación, no parecen abrirse escenarios de negociación de lo fundamental ni se vislumbran respuestas desde el gobierno a las demandas de cambio. El gobierno y el paragobierno, con sus aliados del régimen, se la juegan a recomponerse en la coyuntura, desarticular con represión, aislar los sitios más radicales de la protesta en el Suroccidente, hacer pequeñas concesiones locales o sectoriales, para así ganar tiempo manejando su propia crisis y apostando a reestructurar su proyecto en el escenario electoral.

La estrategia de guerra y represión no ha pasado a la dictadura abierta con régimen de excepción porque el presidente ha contado con instrumentos institucionales para encubrir la militarización y ha puesto en acción el alineamiento y subordinación de casi todos los poderes del Estado al gobierno y al gobierno paralelo. Tiene también como freno la presión desde la comunidad internacional que le ha apostado a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y a la estabilización hacia el postconflicto. Ante la coyuntura y los abusos contra los derechos humanos, se ha hecho sentir la alerta desde Naciones Unidas y sus

²² Jiménez G, 2021, en <http://www.indepaz.org.co/reforma-tributaria-de-2021-mas-de-lo-mismo-frentaa-la-creciente-protesta-social/>

agencias en Colombia, de la Unión Europea y embajadas, desde gobiernos y congresos en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la administración Biden y las mayorías demócratas en Estados Unidos.

Desde el lado de los procesos de la insubordinación y protestas sociales, los logros son leídos en las concesiones arrancadas, en la preservación de fuerzas, en nuevas formas organizativas y de acción que siguen activas aún en momentos de repliegue como el que se avizora en junio.

La escalada de represión y de militarización tiene al frente un poder social y popular que no logra disolver. La recomposición del gobierno y sus intenciones de reestructurarse para superar la crisis no tienen el camino fácil en una situación en la cual la depresión económica y la pandemia siguen presentes y los tiempos políticos se acortan. El signo mayor de la coyuntura y de toda esta fase que puede ser prolongada es de inestabilidad, desequilibrio, propensión a nuevas crisis y a explosiones sociales ante cada arremetida del régimen y su modelo autoritario neoliberal/neoconservador.

Salidas institucionales, elecciones y el paro después del paro

Esa descripción que hice antes del mapa del paro nacional y de sus niveles de organización, puede ayudar a comprender el alcance y limitaciones de la insubordinación social, su integración como movimiento social que choca con el modelo económico y político excluyente y autoritario y con la conducción del régimen y del gobierno manejado por el uribismo. Como movimiento social, que anuda múltiples procesos, no responde a los partidos políticos independientes y de oposición ni a sus iniciativas electorales. La base social de la protesta es mayor que la de esas corrientes partidistas contando con el respaldo de 75 % de la opinión ciudadana en la mayoría de las encuestas. Esto quiere decir que mucha gente que apoyó a Iván Duque Márquez contra Gustavo Petro Urrego en las elecciones de 2018 ahora se ha involucrado en la protesta, en sus acciones o en el respaldo a las demandas. No existe una relación directa entre ese apoyo al paro y alineamiento partidista o político.

Pero la dinámica electoral tendrá vasos comunicantes con la movilización social al mismo tiempo que autonomías y lógicas internas que estarán en juego en el segundo semestre de 2021 y primeros meses de 2022.

En este escenario de movilización y concesiones sin negociación central, de explosiones subregionales y jornadas nacionales que pueden ser decrecientes y espaciadas en el segundo semestre de 2021, todas las fuerzas estarán en escena trasladando las expectativas a las elecciones presidenciales de mayo de 2022.

Es poco probable que se llegue a pactos políticos de trámite de la crisis en una consulta, referendo o convocatoria a una asamblea constituyente.

Cualquiera de esas opciones requiere la aprobación del Congreso de la República, de conformidad con el ordenamiento constitucional que exige votaciones calificadas y realización de votación en fecha distinta a las elecciones para órganos de representación, mandatarios territoriales o presidente de la república. Ni cuadran los tiempos ni existen condiciones a corto plazo para un pacto político que incluya a las vocerías plurales de la movilización y del paro nacional²³.

Una salida con cambios constitucionales, como ha ocurrido en Chile, ha sido propuesta por varios sectores, pero pasa por un acuerdo con las mayorías del Senado de la República que están alineadas en la coalición de gobierno, tal como mostró el respaldo al ministro de Defensa al negar la moción de censura en medio de la represión que ha producido decenas de homicidios por la acción de la fuerza pública. Es un Congreso que está de salida con la mayoría de los senadores y representantes dedicados a la preparación de sus campañas de reelección buscando porcentajes corruptos en contratos de inversión a costa del presupuesto nacional o de las entidades territoriales.

En la legislatura del segundo semestre de 2021 la iniciativa legislativa la tendrá el gobierno con el trámite de una pequeña reforma tributaria y de algunas medidas para atender la emergencia sanitaria y subsidios para los más pobres y para las empresas al borde de la quiebra y grandes grupos económicos.

23 El artículo 376 de la Constitución política de Colombia establece que “Mediante ley aprobada por la mayoría de sus miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine”. La convocatoria por el congreso o por iniciativa popular tendrá control de la Corte Constitucional y no puede incluir cambio o sustitución de la Carta Política.

Los clanes políticos clientelistas, los partidos de la coalición de gobierno y sectores del partido liberal entraran en la micropolítica para administrar siete millones de subsidios y el uribismo para condicionar su estrategia al objetivo de ganar las elecciones presidenciales armando una alianza de la derecha y la ultraderecha del espectro político. En esa agenda hasta mayo de 2022 no les cuadra pactar con la oposición o con los voceros del paro, ni consulta ni constituyente alguna.

A pesar de las lecturas entusiastas de los sectores más radicales, en esta coyuntura la insubordinación social no ha cobrado la fuerza necesaria para precipitar una ruptura revolucionaria e imponerle al régimen y al gobierno uribista una consulta o constituyente alineada con las demandas de cambio antisistema o de reformismo democrático. En realidad, estamos ante la doble paradoja en la cual los de abajo no aceptan vivir como antes, los de arriba no logran gobernar como antes, pero los primeros no pueden tumbar al gobierno y el régimen no tiene la capacidad para aplastar el levantamiento y sus movimientos revolucionados.

El dilema que está planteado en la dura realidad de la coyuntura no es entre revolución y contrarrevolución, sino entre guerrerismo y paz positiva, entre reforma con cambio del régimen autoritario, corrupto y mafioso o reestructuración sin cambio.

Pero en la Colombia de hoy la reforma con cambio del régimen y derrota del paragobierno, es toda una revolución que estará al orden del día en este presente continuo. Cada uno de los procesos que han configurado la insubordinación de mayo de 2021, seguirá activo e implicado con los otros, incluidos los movimientos sociales que son de largo aliento.

En las elecciones de marzo y mayo del 2022 se conjugarán de alguna manera los procesos sociales y las alternativas políticas en una primera gran prueba de la posibilidad de cambio de régimen y alteración del modelo neoliberal/neoconservador. Cualquiera que sea el resultado, lo que sigue será la profundización de la crisis, pues un gobierno de centro izquierda o de centro que siga por el camino de la paz, de la implementación de los acuerdos con nuevos pactos de solución negociada, que introduzca leves políticas redistributivas y planes desde la equidad y la solidaridad, será enfrentado por la ultraderecha y las mafias con la consigna de hacer el país ingobernable. Otro gobierno del uribismo, aliado con la derecha y

ultraderecha del régimen, intentará imponerse con el Estado de Guerra y adecuarse a las pautas de recuperación económica dictadas desde las potencias multinacionales. Ese continuismo tendrá al frente otra insubordinación social y política.

Las dinámicas de cambio serán distintas en las opciones de gobierno para el periodo 2022 – 2026. La crisis de un gobierno de centro o centro izquierda tiene mayor probabilidad de desenlace en un cambio de régimen con apertura democrática o sintonía con el reformismo radical de los movimientos sociales y con la superación definitiva del largo ciclo de guerras y solución de conflictos con uso de las armas. La crisis de recomposición del régimen autoritario desde un gobierno de la ultraderecha, sería el caldo de cultivo para más violencia desde el poder y para estallidos radicales. La implementación de los acuerdos de paz sería desmantelada completamente y se les daría mayor cabida a nuevas guerras contra el narcoterrorismo y contra el socialismo antisistema imaginado en las protestas, en la oposición y en el pensamiento crítico.

Es muy difícil predecir los ritmos e intensidad de la insubordinación social que seguirá en los próximos meses y años en forma subterránea y con explosiones coyunturales precipitadas por iniciativas represivas y medidas neoliberales antisociales en la pandemia y recuperación postpandemia. Tal vez se puede decir que Colombia seguirá oscilando en medio de una crisis crónica, con equilibrio de fuerzas encontradas y desequilibrio en todos los ámbitos de la política, la economía y la vida social. Los jóvenes de la primera línea de la resistencia hablan del “paro después del paro” para decir que no ven soluciones a corto plazo y que se necesitaran otros levantamientos y mucha imaginación para que se logren los cambios de fondo.

Referencias Bibliográficas

Comité Nacional del Paro. (2021). Conclusiones de la Junta Directiva Nacional Extraordinaria. Bogotá, D.C.: FECODE.

Gonzalo, J. (2021). Reforma tributaria de 2021: Más de lo mismo frente a la creciente protesta social. INDEPAZ.

MinDefensa. (2021). Balance del paro nacional 2021. Bogotá, D.C.: Ministerio de Defensa.





Colombia en el borde del caos puede saltar a la paz²⁴

Camilo González Posso

Se llegó a la segunda semana de protestas multitudinarias en todas las regiones de Colombia y el gobierno no ha respondido a las demandas más urgentes que piden millones de colombianos; en los carteles, gritos y pliegos de reclamos, todos dicen que se sienten acorralados por medidas oficiales que en medio de la pandemia han significado mayor empobrecimiento, odiosa discriminación, subsidios para las grandes fortunas e impulso de estrategias para nuevas guerras.

Durante estos días, bajo el nombre de Paro Nacional Indefinido, se han presentado en promedio 300 acciones diarias de protesta en las cuales se incluyen manifestaciones multisectoriales en 800 municipios de los 1122 que tiene Colombia; protestan desde las casas con cacerolas al estilo de las que se hicieron famosas en Chile contra Pinochet, bloqueos de vías por camioneros, movilizaciones de indígenas, campesinos y grupos de comunidades afrocolombianas. Se estima que en estas protestas urbano – rurales han participado más de 15 millones de personas y según encuestas tienen el respaldo de más de 70% de la población mayor a los 16 años, en todos los sectores sociales y en especial entre los más empobrecidos y en las clases medias.

La respuesta del gobierno ha sido de brutal represión y de estigmatización a la protesta, acusada de ser utilizada en un supuesto plan terrorista dirigido a desprestigiar al gobierno y a crear caos al servicio del narcotráfico y de la subversión. El resultado es trágico. Entre el 28 de abril y el 10 de mayo, en medio de las movilizaciones han sido asesinadas 47 personas, 39 de ellas por violencia policial y 28 corresponden a asesinatos de jóvenes en Cali (Temblores OGN & Indepaz, 2021). La Fiscalía General de la Nación reconoce que hay más de 540 manifestantes desaparecidos y las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la mayoría se encuentra en centros invisibles en poder de la fuerza pública. 28 jóvenes han perdido un ojo por impacto de bala de caucho disparada por las fuerzas policiales y son varios miles los heridos. (Temblores OGN & Indepaz, 2021).

24 Artículo publicado en Mayo 10 de 2021, Bogotá, D.C.

El detonante en esta coyuntura fue el anuncio en marzo de este año de un paquete de medidas promovidas por el gobierno para la reactivación económica y social, atención a la emergencia del COVID 19 y a la crisis de seguridad. Las centrales sindicales llamaron a un Paro Nacional Indefinido desde el 28 de abril, en contra del proyecto de ley de reforma tributaria entregado por el gobierno de Iván Duque al Congreso de la República que pretendía imponer impuestos duros para los asalariados y las clases medias y en cambio entregar oportunidades de grandes ganancias y exenciones tributarias a las grandes empresas.

Convergió los reclamos contra una reforma a la salud que en lugar de responder a la angustia en medio de la pandemia dedica los mayores recursos a fortalecer a las empresas de salud que manejan un sistema oligopólico.

También, concurren los estudiantes y jóvenes que han sido obligados a retirarse de las aulas por falta de recursos y que no encuentran trabajo ni futuro. Centenares de miles de campesinos, de indígenas y afrodescendientes salen a reclamar porque no se cumplen los compromisos de reforma rural, de sustitución de los cultivos de coca y de garantías a la vida; reclaman por más de 1.000 asesinatos de líderes sociales y excombatientes en reincorporación que han puesto al desnudo la negligencia del gobierno en la implementación integral y oportuna de los acuerdos de paz suscritos desde noviembre de 2016 (Indepaz, 2021).

Muchos sectores se sumaron exigiendo medidas de alivio ante la catástrofe social sin precedentes y sin respuesta incluyente en medio de la pandemia. En el año 2020 la pobreza monetaria (ingresos de menos de 3 dólares pc al día) abrumó al 42% de las familias, la mitad de las cuales (con menos de 1,3 dólares pc al día) no tienen hoy recursos para una comida completa al día. La Tasa de desempleo promedio se elevó al 20% y entre la juventud urbana y rural supera el 70%. Más de 500.000 pequeñas y medianas empresas han quebrado y las medidas de apoyo al pago de la nómina las concentró el gobierno en las grandes empresas (DANE, 2021).

A la gente del común le resulta indignante que mientras se les impone sacrificio y se les ofrecen migajas “solidarias”, el gobierno contribuye para que los grupos financieros y grandes empresas anuncien en plena pandemia que han logrado aumentar sus utilidades en el año 2020, y que la ayuda a los grandes

bancos les permitió obtener ganancias por encima de \$55 billones de pesos (US\$15.000 mil) (Superintendencia Financiera, 2021).

El 2 de mayo, el gobierno decidió retirar el proyecto inicial de reforma tributaria y convocar a un diálogo con diversos sectores para buscar salidas a la crisis; fue obligado por la insubordinación social generalizada, por el aislamiento del gobierno en el Congreso de la República y por las preocupaciones del partido del presidente ante el desprestigio, en medio de la campaña electoral para elegir nuevos integrantes del Congreso de la República y nuevo presidente en 2022.

Sin embargo, esas decisiones han sido recibidas con desconfianza porque el gobierno mantiene la orden de “asistencia” de las Fuerzas Militares y de represión policial. Además, en la memoria reciente de la población y de las multitudes movilizadas está el engaño que hizo el gobierno cuando ofreció un gran diálogo para manejar el paro nacional del 21 de noviembre de 2019.

Ese diálogo fue en realidad una opereta en la cual el gobierno escuchó a sus amigos y a algunos ingenuos dialogantes; así logró apaciguar la protesta que había sido golpeada por la brutalidad policial con varios muertos en Bogotá y a renglón seguido, aprovechando la pandemia, impuso la reforma tributaria para ofrecer en exenciones y gabelas \$18 billones de pesos (US\$5.000 mill) a los grandes grupos económicos y un mini plan de alivio que, en la práctica, en 2020 no superó \$3 billones de pesos (US\$830 mill) para 4 millones de personas incluidas en programas como el de ingreso solidario, apoyo a cesantes formales, adulto mayor y un irrisorio aporte adicional a las familias en condiciones de miseria (Kamanovitz S. 2021).

Con ese antecedente de perfidia es difícil para el gobierno manipular la situación frente a la politización y comprensión de lo que está en juego por parte de los jóvenes, mujeres, transportadores y clase media que está en la protesta. El gobierno mantiene la misma política ultra neoliberal como respuesta a la crisis social y económica y piensa que puede simular otro diálogo para reencauchar la política de reactivación que ya formuló para el periodo 2021 – 2026 e incluyó en un documento aprobado en febrero de este año (Conpes 4023/2021), que incluye un plan social frente a la pandemia y la crisis de pobreza que no supera 4 billones de pesos, ni el 1% del presupuesto anual de la nación.

Para poder imponer su programa, el partido de gobierno quiere completar el montaje de la estrategia de seguridad concentrada en una guerra a la supuesta amenaza narcoterrorista, ahora reforzada por teorías neonazis que según el jefe del partido de gobierno se inscriben en una conspiración internacional de lo que llaman la Revolución Molecular Disipada del socialismo y comunismo del siglo XXI.

En una grave situación de violencias y de la presión de la ultraderecha para desatar otra guerra, existen salidas como lo han dicho las asambleas populares que se viene realizando en Cali y en esa región del sur occidente. Desde el epicentro de la protesta y de novedosas formas de poder popular local, se han mostrado rutas para un trámite pacífico de la crisis. Más que diálogos, la gente insubordinada habla de negociar y concertar, lo que exige que sus voceros sean los primeros interlocutores.

Si el gobierno negocia con los camioneros, como debió haberlo hecho desde el año pasado, se podrá tener un repliegue de los bloqueos en grandes autopistas. La movilización puede dar tregua si el gobierno atiende los reclamos de mayor efectividad en la vacunación y en atención a la salud, de implementación de los acuerdos de paz y garantías de seguridad para detener la ola de asesinatos y masacres; si posterga la negociación de la reforma tributaria recurriendo, por ejemplo, a un crédito del Banco de la República y adopta en cambio un gran plan social y de atención a las familias y a la juventud.

En el borde del caos propuestas como el pliego unificado, elaborado desde las comunas de Cali²⁵, ofrecen un camino de conflictos pacíficos en contravía de la guerra que tanto ha entusiasmado a quienes prometieron refundar la patria a sangre y fuego.

25 Ver: www.indepaz.org.co/

Referencias Bibliográficas

Departamento Nacional de Estadística (DANE). (29 de abril de 2021). *Pobreza monetaria en 2020*. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf

Superintendencia de Entidades Financieras. (26 de febrero de 2021). *Utilidades del sector financiero llegaron a los \$55 billones en 2020, cayeron 41%*. Obtenido de El Espectador : <https://www.elespectador.com/economia/utilidades-del-sector-financiero-llegaron-a-los-55-billones-en-2020-cayeron-41-article/>

Kalmanovitz, S. (2 de mayo de 2021). *La negligencia de Duque*. Obtenido de El Espectador : <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-negligencia-de-duque-column/>

CGT Colombia. (3 de mayo de 2021). *Manifestamos la decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional, solicitamos garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta*. Obtenido de Manifestamos la decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional, solicitamos garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta.



Cali es Valle, pacífico y además es loma: Turbulencias y emergencias en el paro²⁶.

Camilo González Posso

Lo que está sucediendo en Cali es un proceso macrorregional de explosión social y la muestra condensada de lo que pasa en Colombia por la emergencia de una generación inconforme y súper informada que no acepta la actual situación; está siendo confrontada por métodos de guerra, pero persiste en la protesta para encontrar salidas del laberinto.

Después de 16 días de acciones, se han registrado movilizaciones multitudinarias, concentraciones, bloqueos y brutal represión ordenada por el gobierno central y ejecutada por la fuerza pública. En medio de esta situación, los determinantes y reivindicaciones de fondo siguen presentes, pero momentáneamente silenciadas por las noticias sobre 33 personas asesinadas en las protestas, 17 de ellas presuntamente a manos de agentes del Estado, 220 jóvenes detenidos, 168 desaparecidos según Causa Pública, centenares de heridos, más de 150 establecimientos saqueados y decenas de civiles armados, encabezados por políticos de ultraderecha y extraquetos que patrullan, disparan y asesinan.

En Cali confluyen movilizaciones de indígenas, afros y campesinos del Norte del Cauca y en conjunto hacen resonancia con explosiones sociales y protestas en Buenaventura y en casi todos los municipios del Valle y del Cauca. Esta interconexión de procesos sociales no es nueva. Durante las últimas décadas las protestas y paros han sido una constante en Buenaventura y también en el Cauca.

Cali es la capital del suroccidente y una ciudad región interdepartamental

Las imágenes en las redes sociales y en la televisión se han centrado en Cali, incluyendo la presencia de la Minga indígena entre el 2 y el 12 de mayo, pero el estado de insubordinación repercute en toda esa macro región que abarca en el primer anillo a 17 municipios del Norte del Cauca y a los 42 del departamento del Valle del Cauca.

Este macrorregión es una realidad económica, social, cultural en la cual los

²⁶ Artículo publicado en Mayo 15 de 2021, Bogotá, D.C.

2,3 millones de habitantes de Cali, con otros 2 millones de vallunos, conviven con 400.000 norte caucanos que son 80% afrocolombianos, indígenas, campesinos y habitantes de centros urbanos como Quilichao y Puerto Tejada. La población caleña creció 120% entre 1980 y 2010 con la migración y el desplazamiento forzado desde el pacífico, el Cauca y el propio valle del Río Cauca. La imbricación es tal que en Cali hoy hay 6 cabildos indígenas y grupos urbanos articulados a los palenques, consejos comunitarios y otras organizaciones de población afrodescendiente de los dos departamentos.

Todo el corredor que comprende el primer anillo hasta el Pacífico es la subregión de Colombia de mayor concentración de población negra cada vez más organizada; hacia la cordillera central, se encuentra el territorio ancestral de pueblos indígenas que le aportan a la gente de Cali una parte significativa de la canasta nutricional. Así como Cali con Buenaventura son el primer puerto de Colombia en el Pacífico, el Valle con el norte del Cauca son un subsistema agroindustrial y un complejo geográfico de interrelación cultural. Todos los días, decenas de miles de norte caucanos viajan a Cali y sus cercanías a trabajar, estudiar, a comprar o vender; además, en el norte del Cauca se instalaron centenares de empresas cuya sede está en Cali, desde donde viajan todos los días los ejecutivos y miles de trabajadores.

Entonces, no es casual que, así como la insubordinación social en Cali ha conformado una red de puntos de encuentro de jóvenes que permanecen en el paro por semanas, en muchos municipios del Valle y en toda la región norte caucana se presente el mismo fenómeno. De modo que no es cierto que Cali sea una ciudad hoy sitiada por bloqueos y protestas de unos pocos, pues es un levamiento popular encabezado por la juventud y por muchos sectores que se concreta en control territorial, control de vías y carreteras en toda la macrorregión.

En esa red unida por hilos invisibles, las demandas son comunes y también los símbolos de la inconformidad. Las movilizaciones transcurren con ritmo de bastones, salsa y chirimía, con son de feria y de festival del Petronio que reúne cada año a centenares de miles a reafirmar su identidad afrodescendiente y su encuentro entre culturas.

La brutalidad represiva y pro - paramilitar no detendrá esta insubordinación social.

La “asistencia militar” y la militarización de la intervención de la policía se ha pretendido justificar como respuesta al llamado “vandalismo” y presencia de grupos armados terroristas en medio de las movilizaciones y en bloqueos. Pero ha sido evidente que el abuso de la fuerza se ha aplicado a la protesta pacífica y al tratamiento violento a los jóvenes de los barrios populares que se mantienen en los puntos de concentración. Desde esos puntos, como Puerto Resistencia, Siloé, La luna, La Loma, Paraíso, Terrón, los jóvenes han rechazado los saqueos, peajes y acciones violentas. (ver Desde la primera línea)

La Guardia Indígena llegó a unirse a las demandas y a colaborar con el autocontrol y la protección de las manifestaciones pacíficas, tal como lo ha hecho desde hace décadas y lo hizo, con gran acogida, cuando el paro de noviembre de 2019. Pero en esta ocasión a su llegada a Cali encontró una resistencia organizada por civiles armados que dispararon a matar y causaron heridas a nueve comuneros. Políticos de ultraderecha encabezaron los ataques y la campaña racista contra la presencia de indígenas en la protesta en Cali. (Hoyos J. 2021)

Sin embargo, la respuesta brutal y paramilitarizada no ha logrado someter a los jóvenes y sectores que siguen activos en el paro en Cali; entre tanto la represión ha sido el factor clave para desatar nuevos escenarios de insubordinación en 11 municipios del Valle, Buga incluido, y en el Cauca desde el norte del departamento hasta el Alto Patía. En Popayán el levantamiento se volvió general cuando se conoció del abuso sexual de policías a dos niñas y el asesinato por el ESMAD de un joven estudiante; la niña se quitó la vida por los abusos a los cuales fue sometida durante su arbitraria retención.

Entre la negociación, los bloqueos y la pandemia

El diálogo y la negociación con el comité nacional de paro se abre camino en la tercera semana de movilizaciones. Pero siguen por resolverse concertaciones directas con las vocerías que han ido decantando en diversos municipios y sectores, entre los cuales están los que se expresan en asambleas de comunas en

Cali. Otros sectores como los camioneros, los ambientalistas, indígenas, afros, cocaleros, campesinos, ex-combatientes y defensores del derecho a la salud, no se sienten representados en el pliego de emergencia del comité nacional.

Los desmanes del ESMAD en Popayán han desatado la protesta y también acciones violentas como el incendio de la URI muestran el peligro de actos destructivos sin control si no se produce un repliegue de la represión y la construcción de un escenario de concertación.

El paro puede encontrar algunas respuestas de emergencia y se enfrenta en lo inmediato, además de la multiplicidad de pliegos, al reto de equilibrar, de un lado la permanencia de la presión para obtener respuestas del gobierno y, de otro, responder a la angustia justificada de muchos sectores por el impacto de los bloqueos en el desabastecimiento, carestía, quiebra de empresas, empobrecimiento y contagio en medio de la pandemia.

El anuncio de una nueva jornada nacional el 19 de mayo y el recrudecimiento de la represión y de la indignación en el suroccidente y en regiones del Huila, Caquetá, Meta, Catatumbo, Risaralda, dejan amplio margen a la incertidumbre en este contexto de turbulencias y de expresión de poderes desde los sectores insubordinados.

Referencias Bibliográficas

- Tubarco News. (13 de mayo de 2021). La Primera Línea de Puerto Resistencia cuenta por qué se retiró de la mesa de diálogo en Cali. Cali.
- Marín, A. (2021 de mayo de 2021). *¿Por qué el paro nacional 28A tiene su centro en Cali?* Obtenido de 070: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/porque-cali-28a/>
- Hoyos, J. (10 de mayo de 2021). *Sobre el ataque a los indígenas en Cali: Lo que viví*. Obtenido de Indepaz: <http://indepaz.org.co/sobre-el-ataque-a-los-indigenas-en-cali-lo-que-vivi/>
- Indepaz, ONG, T., & PAIIS. (17 de mayo de 2021). *Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH*. Obtenido de Indepaz: <http://indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/>
- Akubadaura. (12 de mayo de 2021). *Boletín de Derechos Humanos No. 6 Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro Cauca*. Obtenido de <https://akubadaura.org/wp-content/uploads/2021/05/COMUNICADO.pdf>
- Comité de Paro. (19 de junio de 2021). *Debate 22, crisis en Colombia*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=nNJ9EKk0tjc>



Fotografía: Santiago González



Diálogo Nacional genuino e incluyente: ¿Otro diálogo imposible?²⁷

Camilo González Posso

La primera recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe de visita²⁸ publicado el pasado 7 de julio es desarrollar un proceso de Diálogo Nacional genuino para encontrar soluciones a los problemas que motivaron las protestas en abril, mayo y junio de 2021 (Observaciones y recomendaciones de la CIDH). Sobre esta recomendación central no se han escuchado respuestas y debería ser considerada en forma urgente por el gobierno, el Comité Nacional de Paro y todos los comités, mesas y organismos que han asumido vocería en estas movilizaciones.

No pasa desapercibido que la CIDH le agregue al Diálogo Nacional las expresiones genuinas e incluyentes que, en mi lectura, invita a superar las experiencias de la llamada Conversación Nacional promovida por el gobierno de Iván Duque cuando tuvo lugar el Paro Nacional de noviembre de 2019. En ese momento, la Conversación fue un mecanismo que creó el gobierno como sustituto a unas mesas de negociación sobre las demandas del pliego presentado por el Comité de Paro y completado en asambleas amplias con los lemas de vida, paz, democracia y alternativas al neoliberalismo.

Este ensayo pretende hacer una lectura de las grandes movilizaciones que se han presentado en Colombia, enfocada en las posibilidades de avanzar mediante diálogos hacia soluciones a los problemas planteados. El fracaso del diálogo ha sido con frecuencia la antesala de confrontaciones a mayor escala y en Colombia se ha vivido desde 2019 un espiral de protestas respondidas con autoritarismo, militarización y simulación de diálogos.

En el ensayo se muestra la frustración que generan los intentos de diálogos para concertar soluciones y el uso por parte del gobierno de estrategias de

27 Artículo publicado en Julio de 2021, Bogotá, D.C.

28 CIDH (2021). Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, consultado en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

conversación nacional sólo para cohesionar a los aliados del régimen y reforzar las políticas que han provocado la indignación y la insubordinación. Se llama la atención sobre el contenido de las exigencias de los sectores movilizados en el paro nacional para evaluar las posibilidades de diálogos con negociación, según niveles de dificultad, los cuales dependen del alcance transformador o de ruptura que tienen demandas que van desde reivindicaciones mínimas sectoriales o regionales hasta cambios estructurales en las políticas y en el modelo económico.

En medio de las confrontaciones sin diálogo genuino el gobierno se vio obligado a hacer concesiones que presenta como decisiones unilaterales e intenta integrarlas en sus estrategias de normalización y de posicionamiento hacia las elecciones de 2022. Al final se muestra que la perspectiva es de crisis crónica y de disputas por posiciones en nuevas movilizaciones, en el escenario electoral, en búsqueda de acuerdos en el Congreso de la República, en la disputa por la Presidencia de la República.

Las palabras pacto, dialogo y negociación están a la orden del día al ritmo de la insubordinación social y de las jornadas de movilización intermitente que caracterizan el actual periodo de crisis y búsquedas en Colombia. Son muchas las propuestas y serán múltiples los caminos para los diálogos fáciles, para los difíciles y para hacer posibles los imposibles.

La Conversación Nacional iniciada en noviembre de 2019: ¡Nada de nada!

Puede decirse que ni fue conversación ni fue genuina, pues se limitó a reuniones para escuchar a sectores afines al gobierno y a algunos voceros de organizaciones que hicieron fila para entregar propuestas en un escenario sin capacidad para establecer compromisos; el gobierno se construyó una tribuna para hacerle propaganda a sus programas y para seguir en la línea de demostrar que la protesta carecía de justificación y estaba tomada o infiltrada por vándalos.

El Paro iniciado el 21 de noviembre de 2019 se extendió hasta marzo de 2020 con movilizaciones, cacerolazos, eventos culturales, presencia de la Minga y de las guardias indígena y Cimarrona. Se concentró en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, con participación de muchas otras ciudades y regiones en jornadas

nacionales convocadas por el Comité de Paro. Todos los sectores movilizados aportaron a la lista de exigencias contra las políticas económicas, sociales y en defensa de la vida y la paz.

El 24 de noviembre, tras grandes jornadas de movilización en el país, con participación de más de un millón de personas en acciones diversas, incluidos los cacerolazos en Cali, Bogotá y otras ciudades, el gobierno llamó a la conversación sobre seis temas: crecimiento con equidad; educación; transparencia y lucha contra la corrupción; medio ambiente; paz; y juventud. No aceptó una mesa de negociación con el Comité de Paro y en cambio creó sus propios espacios en 36 reuniones de mesas nacionales temáticas y en 11 mesas regionales, al estilo de las audiencias presidenciales promovidas por la Presidencia de la República como mecanismo semanal de encuentro con ciudadanos. En esas reuniones, que se prolongaron hasta el 6 de marzo de 2020, y en la plataforma digital, el gobierno recogió cerca de 20.000 peticiones sobre cuya suerte no se supo nada.

Las reuniones de Conversación Nacional fueron en realidad una opereta en la cual algunos funcionarios dieron la palabra a otros que hacían un remedo de informes de planes e inversiones, mientras que amigos del gobierno aplaudían y unos cuantos ciudadanos, ajenos a la vocería del paro, en dos minutos agregaban decenas de inquietudes a la lista de problemas insatisfechos.

El pliego de peticiones fue descalificado por maximalista. En esencia las exigencias se resumían en cinco puntos:

1. Retirar el paquete de medidas económicas y sociales ultra neoliberales orientadas a favorecer a los grandes grupos económicos y a los más ricos a costa de impuestos y empobrecimiento de las clases medias y más pobres de la sociedad (reforma tributaria, de salud, de pensiones, de trabajo).
2. Revisar las políticas de seguridad y de garantía a la vida ante la ola de asesinatos y agresiones; se incluyó la reestructuración de la policía y disolución del ESMAD.
3. Implementar integralmente los acuerdos de paz y avanzar a una paz más completa por la vía de las soluciones negociadas.
4. Suprimir las iniciativas de privatización de Ecopetrol y otras empresas públicas

y de entrega del ahorro nacional en beneficio de los grupos financieros.

5. Cumplir los compromisos con los sectores sociales negociados tras paros y movilizaciones, como los de Buenaventura, la Minga, Dignidad Agropecuaria, campesinos cocaleros, estudiantes, ambientalistas.

Entre tanto, en los medios de comunicación, los voceros del régimen²⁹ y del partido de gobierno seguían en la campaña iniciada desde mediados de 2019 sobre la necesidad (para bien de la gente de bien) de conjurar con firmeza y la fuerza del Estado la conspiración supuestamente ordenada por el Foro de San Pablo y el castrochavismo para desestabilizar al gobierno y el orden constitucional. Las grandes movilizaciones en Chile y las crisis políticas en Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia fueron presentadas por la ultraderecha colombiana y el partido-gobierno como advertencia y prueba de la gran conspiración (Gómez, 1995). Con esa perspectiva, el diálogo no pasó de ser una pieza en la estrategia de seguridad para enfrentar al enemigo vandálico y terrorista supuestamente visible en las movilizaciones realizadas en diversos puntos de la geografía, especialmente en Cali y Bogotá.

Con las fiestas de fin del año 2019 y la emergencia de la pandemia en 2020, esa Conversación Nacional pasó a mejor vida. A los problemas que desataron las movilizaciones de noviembre se agregaron los de la crisis sanitaria mundial, nacional y local, la recesión o depresión de la economía, la catástrofe social y el impulso al régimen de excepción de un gobierno cívico-policial-militar reforzado para imponer las cuarentenas y la inmovilidad.

En contravía de las exigencias del paro de 2019, el gobierno y sus aliados en el Congreso aprobaron una reforma tributaria y medidas administrativas destinada
29 La categoría régimen se refiere a la alianza hegemónica del poder económico, político, mediático, cultural que agrupa a la élite del establecimiento integrada por partidos, grandes empresarios, dueños de medios de comunicación masiva, mafias, lavadores de activos, intelectuales orgánicos y burócratas al servicio de corporaciones. Una definición similar tenía Álvaro Gómez Hurtado quien decía que “hay países que, por encima del orden constitucional, crean un régimen. Lo que los anglosajones llaman “establecimiento”. Se trata de un sistema de aprovechamiento de posibilidades de mando y de los gajes del poder que crea una superestructura de connivencias, que maneja la política e influye en todos los vericuetos de la vida civil. Está constituido por entidades privadas, por grupos no regulados, por compromisos económicos y también por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos participan, no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo, sino un conglomerado de complicidades” (Gómez, 1995).

a aumentar las ganancias de las grandes empresas y del sector financiero. Las gabelas para las empresas incluyen exenciones y disminución de impuestos, manejos financieros a favor de los grandes grupos, contratación y simplificación de trámites desconociendo derechos. Al mismo tiempo, en medio de la pandemia se sigue castigando a la clase media y a los más pobres (Galeón, 2019, y U Tadeo, 2019).

No es extraño que una nueva movilización social estuviera anunciada desde el inicio de la pandemia y de la crisis múltiple que se desató. Todos los elementos hacia una gran explosión o levantamiento estaban identificados por la acumulación de crisis y por la demostrada incapacidad del gobierno de leer su contenido social. Los interrogantes se planteaban sobre el momento del levantamiento, sus características, geografía política, reivindicaciones centrales y liderazgos; y por supuesto, también sobre los extremos a los cuales podría llegar el gobierno en sus preparativos militares y de estrategias de respuesta.

La Minga de los de abajo sin interlocutor arriba

En el segundo semestre de 2020 las movilizaciones de la Minga étnica, campesina y popular fueron un ensayo general sobre la disposición de fuerzas y la capacidad del gobierno y del régimen para dialogar o reprimir. En octubre de 2020, la Minga, después de un recorrido desde el sur, se concentró en Bogotá esperando iniciar una gran audiencia con el gobierno sobre los temas urgentes y trascendentales del presente y futuro de Colombia. Ante la negativa del presidente Duque al diálogo, la Minga culminó en una gran asamblea, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en la que se inició un juicio de responsabilidad al primer mandatario por su negativa al diálogo nacional y por el carácter antidemocrático de sus políticas en contra de la paz, la vida, los territorios, la salud y las condiciones sociales de los colombianos.

La proclama del 20 de octubre estableció mandatos que comprometen a los pueblos o indígenas a hacer ejercicios de autoridad en temas trascendentales como los siguientes:

1. Cumplir e implementar del Acuerdo de Paz como política de Estado.
2. Avanzar en los diálogos humanitarios con perspectiva de paz para

- salvaguardar los planes de vida, el territorio y garantizar la integridad de los seres humanos (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
3. Adoptar e implementar una verdadera reforma agraria integral, estructural, desde los pueblos, comunidades, sectores sociales y populares del país, para conservar y proteger la “casa común” o “madre tierra” (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 4. Ordenar la anulación de todo tipo de concesiones y licenciamientos ambientales para proyectos minero-energéticos que atenten contra la vida y el equilibrio natural donde habitan los pueblos, comunidades, sectores sociales y populares (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 5. Adoptar e implementar modelos y planes propios de planificación territorial comunitarios, urbanos y rurales, como fundamento de la cosmovisión y concepción de los pueblos, y alternativas políticas y jurídicas frente al modelo neoliberal extractivista que atenta contra la vida (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 6. Adoptar y operativizar políticas públicas para dar cumplimiento a la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 7. Prohibir la aspersión aérea con glifosato y otras sustancias químicas para evitar el envenenamiento de los territorios de comunidades rurales, y garantizar de manera concertada la política y planes económicos de desarrollo comunitario en el marco de los planes de vida o planes propios desde las distintas comunidades (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 8. Implantar un modelo desarrollo para la transición minero-energética que avance en la superación del modelo extractivista y despojador de territorios, adoptando y reglamentando el Acuerdo de Escazú (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 9. Ordenar, en el marco de la Constitución y la ley, además de la ley de origen, el derecho mayor, la implantación de mecanismos jurídicos y técnicos que garanticen el respeto por el derecho fundamental de la consulta previa libre e informada, de una forma integral y vinculante con los pueblos y comunidades

- étnicas. Así mismo, generar las garantías para el reconocimiento y adopción de las consultas populares como derecho legítimo y legal de las comunidades a decidir sobre sus territorios (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
10. En el marco de la Constitución y la ley, el derecho mayor y la ley de origen, readecuar la institucionalidad para que garantice la soberanía del constituyente primario, en busca de su bienestar y del buen vivir (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 11. Ordenar el establecimiento de garantías y respeto a los mecanismos de participación políticos y jurídicos desde el constituyente primario reconocidos en la Carta política.
 12. Adoptar las orientaciones y mandatos que dinamizan la vida económica, social, cultural, espiritual y ambiental para el buen vivir de las comunidades, que permitan hacer frente a las economías ilícitas (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).
 13. Ordenar el impulso de una iniciativa legislativa con el objeto de realizar una reforma político-electoral integral y asegurar la transparencia en los mecanismos de nombramientos a los cargos de elección popular (Consejo Nacional de Indígenas del Cauca, 2020).

Para el presidente Iván Duque, estos mandatos de las autoridades indígenas no tienen cabida en una conversación o debate sobre asuntos cardinales del presente y el futuro de Colombia. Por eso no abrió el diálogo en la asamblea de la Minga de Suroccidente, realizada en Monterilla-Caldono (Cauca), en abril de 2019, y no aceptó la convocatoria que se le hizo ese 20 de octubre de 2020 en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En cualquier ejercicio de diálogo que se haga en Colombia será necesario asumir que, desde los pueblos indígenas y negros, más que debatir sobre reivindicaciones mínimas de alivio, siempre presentes, corresponde abordar una agenda de país, de alternativas al modelo de desarrollo desde otros paradigmas y de compromiso con la paz, la vida, la democracia y los derechos territoriales.

La movilización de la Minga reforzó la convocatoria del Comité Nacional de Paro a exigir al gobierno una respuesta al Pliego de Emergencia presentado

desde el 19 de junio de 2020. El mensaje enviado al presidente Iván Duque fue suscrito por las organizaciones integrantes del Comité: CUT, CGT, CTC, Fecode, CPC, CDP, USO, COS, Cumbre Agraria, Dignidad Agropecuaria, Acrees, Unees, ONIC, CRIC, Afrodescendiente, Plataforma de DD-HH. Cinco, Salud en paro, Con las pensiones NO, Arte y cultura, Periodismo alternativo, Movimiento de mujeres, Confederación Nacional de Pescadores, Recicladores, movimiento ambientalista, comité de defensa del páramo, LGBT, Sector transporte, Sector minero-*fracking* (Agencia de Información Laboral, 2020).

El pliego incluye las propuestas que siguen:

1. Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia [...] (Agencia de Información Laboral, 2020).
2. Renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente, por seis meses, para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet, gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos (Agencia de Información Laboral, 2020).
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. Qué no se desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MiPymes (Agencia de Información Laboral, 2020).
4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello (Agencia de Información Laboral, 2020).
5. Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para

garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social (Agencia de Información Laboral, 2020).

6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.
7. El pliego de emergencia ofrece al gobierno alternativas económicas para que estas peticiones se hagan realidad: emitir moneda a través del Banco de la República, usar las reservas internacionales, realizar moratoria temporal y renegociar la deuda externa y suspender las exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero (Agencia de Información Laboral, 2020).

El 20 de octubre de 2020 se realizó la Jornada Nacional de movilización en las principales ciudades de Colombia, pero el gobierno no abrió escenarios para dialogar sobre las peticiones de emergencia en momentos en los cuales la catástrofe social y económica azotaba a la población, en particular a la clase media y a los sectores más empobrecidos (Agencia de Información Laboral, 2020).

Yo con Yo: el diálogo interno del régimen para evitar la concertación nacional

El 5 mayo de 2021 el gobierno volvió a llamar al Diálogo, cuando la insubordinación social desatada desde el 28 de abril se extendía por la geografía nacional y la brutal represión ya arrojaba decenas de manifestantes asesinados, centenares de lesionados y miles de detenidos arbitrariamente (Indepaz y Temblores, 2021). No obstante, ese Diálogo se orientaba a fortalecer el respaldo al gobierno por parte de los gremios empresariales, grandes grupos económicos, medios de comunicación masiva, partidos de la coalición de gobierno, las cortes y los organismos de control.

La indignación había llegado a su máximo nivel por el impacto de las políticas antisociales y autoritarias impuestas por el gobierno en medio de la pandemia y la crisis generalizada en 2020. La gestión de la pandemia había mostrado la

incapacidad gubernamental de ofrecer medidas de salud, seguridad alimentaria y alivio a la calamidad de las familias empobrecidas y sin posibilidades de ingresos, trabajo en medio del confinamiento; y el Ejecutivo se había concentrado en medidas de auxilio a las empresas, sobre todo en beneficio del sector financiero; al tiempo, había reforzado estrategias de seguridad de guerra y dispositivos policiales para contener la protesta latente (Indepaz y Temblores, 2021).

El detonante de la explosión e insubordinación social iniciada el 28 de abril había sido el anuncio, en marzo de 2021, de otra reforma tributaria y de nuevas medidas a favor de los más ricos y las grandes empresas y de inequidad para la mayoría. Ante la generalización de la protesta y las fracturas en la coalición del gobierno en los temas críticos de la reforma tributaria, el gobierno había decidido retirar el proyecto presentado al Congreso de la República, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se había visto obligado renunciar, el gobierno había vuelto a anunciar el programa de subsidio a las matrículas en universidades públicas y había balbuceado sobre sus intenciones de tomar medidas de alivio social y de atención a la pandemia. En el Congreso de la República se había hundido el proyecto de reforma al sistema de salud rechazado por el paro (Indepaz y Temblores, 2021).

No obstante, la explosión social ya abarcaba más de 800 municipios de los 1.122 del país, y la protesta merecía el respaldo del 80% de la población que no solo reclamaba el retiro del proyecto de reforma, sino que se diera solución a los graves problemas y se desmontara la respuesta tiránica y de guerra en las ciudades. Habían salido a la plaza pública todas las demandas represadas; las que habían quedado suspendidas en el paro de noviembre 2019 a febrero 2020, y las acumuladas en un año de pandemia, colapso social, cuarentenas, toques de queda y evidente saqueo de lo público en beneficio de los corruptos, del sector financiero, de los macro proyectos minero-energéticos y de las 500 grandes empresas (Leal Acosta, 2020).

El nuevo diálogo regulado por el gobierno, en mayo de 2021, comenzó por unificar los soportes del régimen con una respuesta a lo que definieron como una amenaza –desde la protesta violenta o desde los violentos en la protesta– a la seguridad del Estado, la institucionalidad y las políticas del gobierno ante

la crisis económica y la pandemia (Indepaz y Temblores, 2021). En el mismo mes, mientras escalaba la represión policial y la militarización en respuesta a las protestas, el gobierno realizó su diálogo intrauterino para superar las fisuras en su propio partido y recomponer la coalición en el Congreso de la República, en el gabinete de ministros y en el reparto burocrático y de grandes y medianos contratos a cargo del erario (Indepaz y Temblores, 2021).

Los resultados del diálogo intrauterino incluyeron la impropia declaración conjunta de los presidentes de las cortes y de la JEP en respaldo a los planes del gobierno ante la crisis³⁰ (Carrión, 2021), la recomposición de la coalición de gobierno con mayor participación de Cambio Radical, el Partido de la U y el Conservador, el alineamiento del sector liberal más corrupto, el respaldo en el Congreso de la República al Ministro de Defensa y a la actuación de la Policía Nacional, del ESMAD, y la militarización de las ciudades bajo la figura de asistencia milita (Decreto 575 de 2021) r³¹.

El Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, considerado inconstitucional por los expertos, orienta la militarización de los departamentos y municipios que registraron mayor intensidad de movilizaciones durante el paro nacional: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

Los gremios empresariales y los dueños de los medios de comunicación masiva se sumaron al frente común de apoyo al gobierno y de condena a los bloqueos, el vandalismo y la cercanía de los voceros del paro con la oposición política.

30 Las Altas Cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país el 6 de mayo de 2021. Condenan el vandalismo y guardan silencio cómplice ante los abusos de la fuerza pública responsable de decenas de asesinatos de manifestantes (Carrión, 2021).

31 Decreto 575 de 2021, por medio del cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público.

La ANDI y otros gremios ofrecieron apoyar cambios a la reforma tributaria que en 2019 aprobó beneficios tributarios a las empresas por más de 23 billones de pesos: se mostraron dispuestos a renunciar a la mitad de las exenciones a cambio de otras medidas como la venta de empresas del Estado. Esa propuesta la habían presentado desde el 21 de abril cuando se debatía el proyecto gubernamental de reforma tributaria (La Asociación Nacional de Empresarios, 2021).

El llamado diálogo incluyó, en segunda línea y en distintos escenarios, al Comité de Paro, a los camioneros, los voceros de Buenaventura, los comités en algunas regiones (Huila, Putumayo, Caldas, Cauca, Nariño). Para ganar tiempo, el gobierno abrió mesas de diálogo e incluso prolongó conversaciones combinadas con represión a los camioneros que hacían bloqueos en 170 puntos del país, con el Comité de Paro de Buenaventura y con el Comité Nacional (Portafolio 2021).

De acuerdo con el estilo de la Conversación Nacional de 2019, el gobierno hizo reuniones para escuchar a algunos sectores que respaldaban la protesta pacífica y presentaron propuestas ante la crisis social y económica. Desfilaron en estas audiencias protocolarias el Partido Liberal, la Coalición de la Esperanza, rectores de universidades, alcaldes de capitales y grupos de jóvenes seleccionados por el gobierno. Otros, como el Polo Democrático y Colombia Humana, no aceptaron la invitación a dichas reuniones, argumentando que lo urgente era la negociación con el Comité de Paro y con los voceros de pliegos en diversos sectores y regiones.

Durante la segunda quincena de mayo, el gobierno hizo diálogos sin presentar soluciones y el Comité de Paro se metió en el callejón sin salida de quedarse esperando un acuerdo de garantías a la protesta, sin dar la debida importancia en la Mesa de Diálogo a la concertación de soluciones para los problemas económicos, sociales y de impactos de la pandemia en la población insubordinada. El gobierno logró que las conversaciones con el Comité de Paro y el debate nacional se concentraran en el tema de los bloqueos, en la condena al vandalismo y en los registros de la brutalidad policial.

Después de semanas de ires y venires, el 21 de mayo, el gobierno decidió desconocer el preacuerdo que había consensuado con el Comité de Paro, sobre algunas garantías a la protesta pacífica, y acogió todas las órdenes impartidas por el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez: no negociar, si no

se daba primero un levantamiento total de los bloqueos de vías; no negociar políticas ni medidas de gobierno con organizaciones promotoras de situaciones de hecho, incluidas las primeras líneas, los comités regionales, organizaciones de La Minga, o el mismo Comité de Paro; fortalecer la militarización en respuesta a las protestas, con la Policía y las fuerzas armadas; dar prioridad a la protección a los empresarios y “gente de bien” y a sus mecanismos de autodefensa; identificar el estallido de protesta en todas sus manifestaciones como parte de una conspiración internacional con agentes nacionales, y darle una respuesta contundente anticriminal.

Parte clave de la estrategia ha sido tratar la protesta y todas sus manifestaciones como expresiones terroristas de baja intensidad y justificar la represión calificando a las víctimas de la brutalidad policial como vándalos criminales afectados por grupos armados ilegales infiltrados o como resultado de hechos aislados de abuso de fuerza ocasionados por individuos.

El 28 de mayo de 2021 se puso a prueba la estrategia ordenada por el jefe del partido de gobierno, se dejó atrás el diálogo y se descartó la negociación. Al tiempo se multiplicó la escalada de brutal represión, con la orden de disolver sin advertencia ni diálogo las movilizaciones, los cortes de vías y bloqueos con barricadas.

La reducción inicial de las exigencias del Pliego Nacional de Emergencia a las garantías a la protesta y a la discusión sobre la relación entre bloqueos, derecho a la protesta pacífica y derechos de terceros, paradójicamente sirvió para colocar en segundo plano la movilización de millones de colombianos quienes, además de repudiar la represión, estaban demandando soluciones estructurales a los problemas y respuestas de urgencia a las manifestaciones extremas de la crisis socioeconómica, el hambre, la pobreza, la inequidad y los impactos de la pandemia a todo nivel.

El impacto del paro de los camioneros tuvo alcance nacional y los bloqueos en las vías afectaron sobre todo las zonas central y suroccidental del país. El gobierno prolongó las conversaciones hasta junio, negándose a dar respuesta a un pliego de 29 puntos presentado por los camioneros desde 2017 (Semana, 2021). El 5 de junio, ante la imposibilidad de desalojar a los camioneros que se habían unido con los pobladores vecinos a los puntos de bloqueo, el gobierno llegó a un acuerdo sobre casi todas las exigencias de ese sector.

Las negociaciones en Buenaventura fueron más difíciles y el acuerdo logrado en mayo comprometió a un sector del Comité Cívico del paro de 2017, pero dejó por fuera las demandas de los más pobres. Todo quedó en el aire cuando el jefe del partido de gobierno descalificó el preacuerdo que los delegados del presidente Duque habían firmado en el puerto. Así, el 27 de junio de 2021, el ministro del Interior, atendiendo instrucciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quejas de Germán Vargas Lleras, desautorizó el acuerdo firmado por los delegados del presidente de la República, el Alto Consejero de Paz y el Viceministro de Convivencia. —“No estamos de acuerdo con que se entienda que existe una capacidad del Comité del Paro de inspeccionar carga en el puerto”— dijo el ministro (Díaz, 2021).

En los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo, las mesas de diálogo quedaron en suspenso cuando el gobierno desautorizó a los gobernantes regionales. En Cauca y en Cali se pusieron en marcha mesas de diálogo que facilitaron desbloques y corredores humanitarios, pero también fueron desautorizadas por el gobierno que consideró contrario a la estabilidad institucional que se permitiera un control de movilidad impuesto por situaciones de hecho. Muchos sectores presentaron pliegos que siguen a la espera de soluciones.

Las asambleas populares en Cali —con presencia de las llamadas primeras líneas, de organizaciones sociales y la Minga— unificaron reivindicaciones en la “Declaración política” adoptada el 5 de mayo³²; los campesinos cocaleros del Suroccidente, los pescadores del bajo Cauca, los ambientalistas, las mujeres, la ONIC y las organizaciones afrocolombianas, negras y raizales, las mujeres, los estudiantes, las primeras líneas, los artistas, intelectuales, los trabajadores de la salud, de la rama judicial, los educadores, de otras entidades del Estado y muchos más aprobaron en asambleas sus pliegos y los llevaron a las movilizaciones (Indepaz, B, 2021).

32 Firmado por delegaciones de los puntos de concentración de Calipso, Puerto Resistencia, Meléndez, Guapí, Siloé, Sameco, la Luna, Paso del Comercio, Loma de la Cruz, Univalle, Sindicatos, Portada del mar, CRIC, Minga Indígena, UP, Univalle Unida, Cabildo indígena universitario de la universidad del valle, ACONC (asociación de consejos comunitarios del norte del Cauca), Partido Comunista Colombiano, Ciudad en Movimiento, Sintraunicol, Plataforma Municipal de Juventudes, Central Unitaria de Trabajadores CUT Valle, Comando Departamental de Paro Valle del Cauca y otras organizaciones (Indepaz, B, 2021).

La “Declaración política” de las organizaciones sociales y los puntos de resistencia de Cali y Cauca llamó a unificar un pliego de exigencias y a rechazar el fraccionamiento de las protestas en una multitud de mesas de diálogo propuestas por el gobierno. Desde el 6 de mayo, todas las organizaciones del Suroccidente y los puntos de resistencia ordenaron garantizar corredores humanitarios de movilidad para la salud, alimentación y protección a la población. Como punto de partida del pliego de exigencias, la declaración de las resistencias presentó siete grandes temas, y 27 propuestas como parte de tales temas, para ser abordadas en un diálogo directo en Cali, con el presidente de la República. Es un documento de obligada referencia pues sintetiza las reivindicaciones de los sectores más dinámicos en las movilizaciones del par (Indepaz, B, 2021)..

El gobierno logró, en junio de este año, que el paro fuera identificado mediáticamente con los más radicales y, con la intervención del ESMAD, buscó neutralizar los puntos de resistencia en algunas ciudades (26 en Cali, 8 en Bogotá y algunos en Popayán, Pasto, Pereira, Bucaramanga y decena de municipios). Las demandas sustantivas se tornaron invisibles y, al terminar junio, los temas nacionales de la economía, la democracia y los planes de urgencia ante la crisis y la pandemia quedaron opacados. La declaración del Comité de Paro, el 6 de junio de 2021, retirándose de la bloqueada mesa de conversaciones, estuvo acompañada del llamamiento a cambiar de interlocutor y dirigir las demandas al Congreso de la República en proyectos de ley sobre los temas del Pliego Nacional de Emergencia y otros destacados en la movilización.

Para algunos analistas, la proliferación de exigencias es una muestra de dispersión, fraccionamiento, desorganización y caos en la gran insubordinación social. Sin embargo, contra las opiniones de los aturdidos por una movilización prolongada, ese conjunto de demandas se resume en un rechazo al modelo neoconservador y neoliberal dominante, un antagonismo con un régimen autoritario y mafioso y un enfrentamiento a los gobiernos de la ultraderecha uribista. Los mandatos de La Minga y de los movimientos *sociales* revolucionados³³.

Son parte sustantiva de la reivindicación de otro desarrollo, de otro paradigma la vida. Los ejemplos más notables del último siglo son los movimientos de la mujer y de género; desde finales del siglo XX toman fuerza los movimientos sociales de ambientalistas, de pueblos étnicos y de resistencias al desarrollo basado en el individualismo, el consumismo y la energía fósil. .

de sociedad que se anuncia en negación de un sistema y en construcción de programas para la emergencia de otros. En la radicalidad de las contradicciones y antagonismos reside parte de la dificultad de adelantar diálogos para concertar sobre lo fundamental.

La diversidad de sectores movilizados y de reivindicaciones también indica niveles de dificultad y la necesidad de distinguir los antagonismos existentes en los grandes temas de la democracia, la economía y las políticas sociales, y las agendas que corresponden a medidas de urgencia y a reformas parciales en los marcos del modelo hegemónico.

La mayoría de los 27 puntos del pliego de exigencias del Suroccidente y los puntos del pliego de emergencia podrían ser atendidos con los recursos presupuestales disponibles y con los procedentes de la derogatoria de las gabelas entregadas a las grandes empresas con la reforma tributaria de 2019.

Sin embargo, también están los temas del diálogo difícil y por ahora imposible que supone transformaciones estructurales y definiciones políticas de fondo, como las siguientes: la implementación integral de los acuerdos de paz e impulso de soluciones negociadas para una paz más completa³⁴; el desmonte del modelo extractivista y neoliberal basado en garantía de ganancias exorbitantes al sector financiero y a las grandes empresas; la reforma agraria y de seguridad alimentaria; la respuesta urgente a la emergencia ambiental y de impacto del cambio climático; la no privatización de lo público y adopción de medidas de estado de bienestar en salud, educación, vivienda, agua, empleo y seguridad social; el apoyo prioritario a la pequeña y mediana empresa; la garantía de los derechos étnicos, incluida la objeción de conciencia y el respeto al consentimiento previo libre e informado.

A estos temas del diálogo difícil se agregan las exigencias de reestructuración de la policía y disolución del ESMAD, el cambio en la doctrina militar hacia una

34 Incluyen la Reforma Rural Integral con entrega de 3 millones de hectáreas de nuevas tierras a los campesinos y comunidades étnicas, aprobación de 35 Zonas de Reserva Campesina; ampliación de la democracia con garantías a la protesta y de no corrupción; garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo; política de drogas y de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, derechos de las víctimas y sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; mecanismos de verificación. Además, medidas efectivas contra el asesinato de líderes sociales, continuidad en la solución negociada y nuevas transformaciones de construcción de paz.

doctrina para la paz y la revocatoria de la política de seguridad para la guerra y de tratamiento a la protesta y los bloqueos con estrategias antiterroristas de guerra urbana. Además, están las exigencias de garantías a la vida de líderes y lideresas sociales, de los excombatientes en proceso de reincorporación, el desmonte del paramilitarismo, el desmantelamiento de grupos armados que atentan contra las comunidades y los acuerdos de paz, la ampliación de la democracia con reformas políticas, el cambio radical del sistema electoral corrupto y de combate a la alianza con mafias que atraviesa muchas instituciones, partidos y empresas.

Y entonces ¿Cómo hacer el Diálogo Nacional Genuino e Incluyente?

La experiencia de las movilizaciones y demandas de los últimos años muestra que han predominado las dinámicas de confrontación y no las de convergencia o concertación. Lo nuevo, frente a periodos anteriores al acuerdo de paz entre el Estado y las FARC EP, es la mayor dificultad del régimen para encuadrar los conflictos sociales y políticos como parte de dinámicas de guerra.

La pretensión del gobierno y del partido-gobierno ha sido mantener el discurso de la amenaza terrorista y de los enemigos trasnacionales, pero le ha quedado difícil descalificar la protesta, como en épocas anteriores cuando toda manifestación opositora o crítica era identificada como parte de la subversión. Ahora ha tenido que aceptar que, de las 15.000 acciones de protesta del Paro Nacional, el 90% han sido pacíficas y la calificación de vandálicas de la fracción restante es tema en el cual cabe discusión para distinguir los bloqueos sin armas de los atentados incendiarios que han ocurrido.

También es cierto que el uribismo logró unificar a sus seguidores más fanáticos en torno de la idea de que lo que ha estado en juego es una conspiración criminal contra el gobierno y la institucionalidad.

Antes de considerar escenarios y mecanismos de un eventual diálogo nacional entre los sujetos colectivos que se han expresado en la insubordinación nacional, por un lado, y el gobierno, sus aliados y los poderes del régimen, por otro, es pertinente preguntarse sobre el contenido de dicho diálogo. Todo parece indicar que, en los temas de fondo que exigen cambios estructurales, estamos ante un

diálogo difícil o imposible en el cual desde el régimen no están dispuestos a ceder lo que consideran los pilares de su modelo de sociedad y desarrollo, y desde la insubordinación no se está aún en capacidad de precipitar una ruptura del sistema y ni siquiera una reforma radical.

Diálogos y negociaciones sobre asuntos parciales o menores, que no rompen el modelo neoliberal ni a la hegemonía neoconservadora, han sido parte del trámite de los conflictos y seguramente seguirán ocurriendo; pero incluso en estos temas parciales la estrategia del gobierno no es el diálogo con los sectores movilizados. Aquel ha privilegiado la ya conocida fórmula de conversación nacional con sectores afines y grupos seleccionados como plataforma para anunciar medidas de urgencia como la ampliación del ingreso seguro, la matrícula cero por un semestre o un año, el subsidio a las empresas que incluyan empleos de jóvenes, los créditos para empresas. Muchas de tales medidas se implementaron en pequeña escala en 2020 y se incluyeron en el Conpes 4023 aprobado en febrero de 2021 (Indepaz, C, 2021). Los gremios empresariales las han apoyado a cambio de mantener las líneas ortodoxas neoliberales de manejo macroeconómico y fiscal, las grandes contrataciones de obras previstas con presupuesto de 135 billones de pesos para este periodo 2021-2026, la privatización de activos públicos y la reformas a las pensiones a favor de los fondos privados.

¿Un nuevo diálogo global o las luchas por otro reparto de poderes?

El conjunto de la situación de Colombia, que debe ser entendida en sus particularidades y en las interrelaciones con el panorama mundial y continental de crisis, puede entenderse como de crisis de sistemas a todos los niveles. La característica central es el desequilibrio, el debilitamiento del régimen autoritario y la incapacidad para afrontar la depresión económica y el colapso social con las tradicionales recetas neoliberales y las estrategias de guerra, militarización y estados de excepción de hecho o formalizados.

No se trata de una crisis coyuntural de corto plazo pues corresponde a cambios históricos en las relaciones de fuerza en la vida social y política del país y a las fluctuaciones que seguirán impactando a la sociedad colombiana en el marco

de la crisis mundial. Todos los análisis, incluidos los del FMI, Banco Mundial y de los centros de pensamiento de las grandes potencias, coinciden en advertir la incertidumbre de la recuperación y del plazo para la llamada “nueva normalidad”.

Los más optimistas dicen que se necesita al menos una década para llegar a los indicadores de bienestar o de superación del empobrecimiento agudizado en tiempos de pandemia. Bajo el supuesto de control de la pandemia, con las vacunas y planes preventivos, se estima que en 2026 se tendrían los niveles de PIB, empleo y comercio de antes de la depresión y colapso iniciado en 2020.

No obstante, la crisis global y las crisis regionales y locales son también los escenarios de grandes confrontaciones sobre las alternativas de solución y sobre las características de la “nueva normalidad”. Lo que se ha desatado es una lucha mundial y local por un nuevo reparto y no está ocurriendo como en los libros, haciendo ejercicios sobre el juego de isocuantas gobernadas por leyes invisibles de la economía y la política, sino como una confrontación radical de intereses y guerras silenciosas o proclamadas por mantener hegemonías, por modificarlas o reemplazarlas.

La corrupción, el autoritarismo y la tiranía son las manos invisibles de las maniobras de los grandes capitales y poderes en medio de la recesión y de la rapiña por riqueza. Las leyes del mercado y el poder son el nacionalismo de las potencias, la defensa de privilegios y tasa de ganancias para las multinacionales y grandes corporaciones, la concentración de capitales, los oligopolios, el monopolio de recursos y reservas naturales, la disputa de los más poderosos por la mayor cuota de los presupuestos estatales, por el menor pago de impuestos, lo mismo que la discriminación, la explotación y el segregacionismo en contra de los más empobrecidos.

El manejo de las vacunas contra el Covid 19 es un ejemplo notable de la rapiña en medio de la crisis mundial. Grandes farmacéuticas y los estados que las respaldan están imponiendo precios, prioridades y rentas exorbitantes amparadas en normas sobre propiedad intelectual. Se han negado a la liberación de patentes y a facilitar el rápido ascenso a las vacunas y a la producción local en países empobrecidos y subordinados a la multinacionalización. La concentración de vacunas en los países más ricos se combina con el estímulo a la corrupción y a sobre costos que castigan a los más empobrecidos del mundo.

El asunto de fondo consiste en que en los centros mundiales del poder y en los países subordinados se está imponiendo la estrategia de enfrentar la pandemia en términos de statu quo, limitándose a vacunar a todo el mundo, usar mascarillas, mantener la distancia, cuidar a los más vulnerables para que no lleguen a las unidades de cuidados intensivos. El mismo sistema de salud y el mismo modelo neoliberal con retoques asistencialistas es el ADN de la “nueva normalidad”. Por otra parte, en el campo de las resistencias y alternativas a ese desarrollo, o al desarrollo, se plantea enfrentar la pandemia en términos de cambio democrático en una agenda global que puede existir pero que no ha sido apropiada globalmente: y supone la revisión de todo aquello que dio pie a esta pandemia y que puede llegar a poner en jaque la supervivencia de la especie. A nivel colombiano, la ausencia total de protagonismo de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el nombramiento de un ministro plaguario, la no discusión política sobre quiénes están más golpeados por la pandemia muestra que a nivel político solo existe preocupación por administrar la pandemia.

En Colombia, como en todos los países subordinados, el darwinismo social y político es la ideología que ilumina la lucha de intereses en el reordenamiento de respuestas a la depresión económica. ¡Sálvese el más fuerte es la consigna!

El capital financiero y los grandes grupos empresariales aplican todas sus herramientas para mitigar el impacto de la crisis y la disminución de la tasa de ganancias. Las quiebras masivas dominan el ámbito de las pequeñas y medianas empresas e incluso el de algunas de las grandes del sector industrial, del turismo y el transporte.

La captura y cooptación de las instituciones estatales y del manejo de los presupuestos y bienes públicos se fortalece como estrategia de los grandes grupos económicos. La tributación y la contratación pública se tornan en botín urgente en el nuevo reparto. La corrupción y el lavado de activos se vuelven rubros cada vez más importantes en los balances de los aliados del régimen en donde concurren corporaciones, terratenientes, mafiosos, políticos mercenarios, tecnócratas y toda la gama de acólitos.

En medio de las crisis, desde el otro lado del régimen, se incrementa la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo técnico y profesional, la

quiebra o inminencia de cierre de la pequeña producción, la desesperanza de la juventud y de la población en edad productiva arrojada a la obsolescencia prematura y al desempleo.

Toda esta catástrofe, sin antecedentes para las generaciones presentes, acumula indignación ante la inequidad, rechazo a las políticas pro grandes ricos del gobierno y se transforma en resistencias, movilizaciones, reemergencia de movimientos *sociales* revolucionados, rabia, levantamientos, explosiones, insubordinación. Se conjugan movimientos sociales y movimientos políticos, cada cual, catalizado en su terreno, pero convergentes en las resistencias y en la defensa de alternativas para afrontar la depresión, la pandemia y el reordenamiento hacia la nueva normalidad.

La rapiña desde arriba se acompaña de la radicalización de discursos fanáticos y de justificación de estrategias de guerra. Se inventan conspiraciones, seudo-guerras frías con potencias extracontinentales, guerras contra el terrorismo y el narcotráfico y toda suerte de enemigos de la propiedad, la familia y el Estado. Pero no se trata solo de ideologías fanáticas y discursos del odio, pues sobre esa base se fortalecen gobiernos autoritarios y tiránicos y la alianza entre los pilares del régimen y cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Policía. No necesitan teorías como la neofascista que llama a derrotar en la cuna el peligro de las fuerzas adictas a la revolución molecular disipada. Toda protesta, toda resistencia, toda alternativa al sistema es vista como la manifestación de la conspiración y la amenaza de los peores enemigos. Se trata de una nueva doctrina del enemigo interno para una nueva forma de dictadura civil, de la cleptocracia revestida de formalidades de democracia representativa.

En un escenario como este, la tendencia de la coyuntura es hacia más confrontaciones y pruebas de fuerza entre las alternativas: tiranía desde el gobierno y sus aliados legales e ilegales para imponer su nuevo reparto y, por otro lado, resistencia, movilización e insubordinación desde los sectores empobrecidos y democratizantes que creen posible un tránsito pacífico, democrático, equitativo y redistributivo a la “nueva normalidad”.

Los diálogos y la política en la movilización social

El movimiento social que ha emergido en este periodo de paros nacionales en Colombia es esencialmente político pues es la conjunción de movimientos y fuerzas interesadas en cambiar políticas públicas, medidas de gobierno, modelos económicos y normativos e incluso cambiar el régimen autoritario, tiránico y cleptocrático.

En ese movimiento social/político confluyen episódicamente movilizaciones reivindicativas de sectores, comunidades y regiones, cuyos objetivos son ajustes o paliativos sin cambios de sistema o modelo, que tienen resonancia en momentos de grandes movilizaciones, y al mismo tiempo ciclos más cortos de resolución en el diálogo, la concertación o por disolución impuesta por maniobras y represión. Cuando las movilizaciones sectoriales o regionales confluyen en la resistencia y con los movimientos sociales y *societales*, adquieren nuevas dinámicas y potencias, e incluso aumentan su capacidad de negociación y de alcance en sus reivindicaciones puntuales.

Así ocurrió en el paro nacional con los camioneros, con el paro en Buenaventura y con protestas locales en muchos municipios. Estos diálogos y negociaciones son parte constitutiva de todo el movimiento y en su particularidad pueden tener soluciones parciales que a su vez alimentan al conjunto, mostrando la posibilidad de logros; y al tiempo, cuando terminan o se repliegan, inciden en disminuir la presión para obligar al gobierno y sus aliados a hacer concesiones en los temas difíciles o antagónicos de las resistencias y la insubordinación.

Otro nivel de las resistencias y movimientos *societales*, como el que ha caracterizado los paros nacionales desde 2019 a 2021, incorpora programas y estrategias transformadoras que alteran la dinámica de los sistemas hegemónicos y que pueden desencadenar fluctuaciones y cambios estructurales. La posibilidad de diálogos genuinos y negociaciones en este nivel está abierta por la crisis crónica e inestabilidad del régimen y del gobierno. Pero el momento límite del cambio depende de la profundidad de la crisis y la pérdida de capacidad de respuestas de fondo y de maniobra de renormalización. Semejante momento crítico sólo puede ser resultado de la ampliación de la insubordinación social y de

los movimientos políticos alternativos en las disputas del poder político.

En la historia reciente de Colombia se han dado diálogos y negociaciones estructurales, en coyunturas en las cuales la crisis ha sido generalizada y el régimen ha estado al borde del colapso. Así ocurrió con el proceso constituyente de finales de los años ochenta y que llevó a un nuevo pacto en la Asamblea Constituyente de 1991. El régimen entró en crisis con el fracaso de los intentos de paz del gobierno de Belisario Betancur, y se escaló el conflicto armado, creciendo la insurgencia, la contrainsurgencia, el paramilitarismo, la guerra terrorista de los carteles contra la extradición, la captura de instituciones, del Congreso y de los partidos Liberal y Conservador por el narcotráfico. Ante la violencia generalizada y el poder de las mafias se levantó un movimiento democrático multiforme, se desató un proceso de negociación para la paz, parcial, pero de gran impacto, y en esas condiciones se abrió la oportunidad de un nuevo pacto constituyente materializado en la Constitución Política de 1991. Ese pacto estableció un Estado Social de Derecho como transacción entre socialdemocracia y neoliberalismo, en reemplazo del viejo estado oligárquico heredado del gamolato terrateniente y el bipartidismo. Como dijo Álvaro Gómez Hurtado, cambió el Estado, pero no el régimen.

La pregunta difícil es si estamos en una dinámica de crisis de sistema y de régimen con posibilidad de obligar, desde las resistencias y movilizaciones sociales, a un nuevo pacto social con transformaciones estructurales democratizantes y de cambio del modelo neoconservador/neoliberal. Es también posible imaginar una fase de crisis lejos del equilibrio, incierta y al mismo tiempo aún lejos del umbral de ruptura hacia reformas y cambios radicales. Como ocurre con las turbulencias y procesos físicos de caos, también en las crisis sociales y políticas actúan fuerzas antientropía que accionan por la reorganización y la nueva normalidad sin cambios de sistemas.

Un proceso de diálogo y negociación es imaginable en las dos situaciones descritas. En el primer escenario se trata de establecer un nuevo pacto social con cambios importantes marcados por una correlación favorable a las resistencias y movimientos revolucionados; en el segundo escenario, en un equilibrio inestable de fuerzas, se negociarían reformas sin cambio de sistema y sin cierre de la crisis.

Se pueden imaginar otros escenarios con opciones de diálogo y negociación parcial, con reformas importantes, sin cambio de modelo socioeconómico ni de régimen. Puede ser una fase en un proceso hacia crisis mayores o hacia el restablecimiento de equilibrios o de un reordenamiento sin cambio de hegemonías.

En cualquiera de los supuestos, siempre queda la necesidad de caracterizar la dinámica de la crisis, de la insubordinación y de las estrategias desde todos los intereses en juego.

Los partidos políticos y la coyuntura electoral

Desde las resistencias no sólo tienen importancia estratégica la construcción organizativa y de poderes desde la base, sino también las apuestas políticas para las elecciones que se realizarán en marzo y mayo de 2022.

Otra paradoja de la crisis del régimen en Colombia reside en que el desprestigio de los partidos y de las instituciones controladas por el régimen hegemónico no se refleja de manera proporcional en la pérdida de capacidad de reproducción de sus posiciones de poder. Las maquinarias clientelistas sustentadas en la alianza de mafias, grandes empresarios legales e ilegales, terratenientes y lavadores de activos, mantienen su capacidad de controlar las elecciones y de copar posiciones en gobiernos y en corporaciones de elección popular. Al tiempo, lo novedoso de la fase actual es la irrupción de movimientos y partidos políticos que se identifican como de izquierda o de centro y están retando a los partidos y agrupaciones políticas del régimen poniendo en cuestión la continuidad de gobiernos de derecha y extrema derecha.

Esas calificaciones de izquierda, centro o derechas son relativas e históricamente delimitadas. En Colombia, todo el espectro programático de los partidos y movimientos políticos reconocidos comienza en un extremo en discursos y propuestas de la socialdemocracia liberal y termina en el otro en el neoconservatismo y neocorporativismo totalitario. Toda la gama se define en el marco del capitalismo y la democracia representativa, desde el capitalismo democrático al capitalismo oligopólico y mafioso.

En teoría, cualquier gobierno de esa izquierda podría lograr pactos de convivencia con las derechas y los grupos económicos, los poderes mundiales y los partidos del régimen. Pero en la práctica un gobierno de izquierda o centroizquierda con pretensiones serias de ampliación de la democracia y del aún no descifrado capitalismo democrático basado en la equidad, sería objeto de la oposición violenta desde el régimen y sus fuerzas legales e ilegales. Si se presenta un debilitamiento notable de la ultraderecha, esta hipótesis de un nuevo pacto sería una posibilidad en el borde del caos cuando la alternativa sea pacto o colapso.

En las elecciones presidenciales de 2018, la suma de los votos por los candidatos de izquierda y centro fue superior a los de la derecha, y en la segunda vuelta un candidato de izquierda perdió por estrecho margen las elecciones a pesar de toda la campaña de señalamiento como enemigo *Castro chavista*, comunista, de la propiedad privada. Hacia las elecciones presidenciales de mayo de 2022 se mantiene la tendencia ascendente de las alternativas de izquierda y del llamado “centro anticorrupción”.

Es probable que la insubordinación social, el descontento antisistema y la débil respuesta del gobierno actual a las demandas urgentes de subsistencia y defensa de la vida le pase la cuenta de cobro a los candidatos del régimen en las elecciones del año 2022; pero esa probabilidad depende también de la capacidad de maniobra del gobierno y sus aliados en la estrategia que ha definido de no negociar las políticas de seguridad ni las medidas sociales y económicas de respuesta a la crisis. Incluso las concesiones que se ha visto obligado a hacer, para desmotivar las protestas y el descontento de las clases medias, las ha presentado como iniciativas unilaterales.

No está descartado que la coalición de las derechas logre recuperar respaldo electoral, mantener posiciones en el Congreso y disputar la Presidencia en segunda vuelta con el candidato de izquierda del Pacto Histórico. Si se profundiza el descontento y la ingobernabilidad, el panorama sería dominado por la izquierda y el llamado centro liderado por la Coalición de la Esperanza.

En todo caso, la prueba de fuerzas en las elecciones del 2022 está en la ruta crítica del desenlace de la insubordinación social y definirá el escenario para hacer posibles los diálogos hoy imposibles y vislumbrar las condiciones para un

nuevo pacto social en Colombia.

Muchas de las iniciativas que se han puesto en discusión, en el segundo semestre de 2021, para buscar salidas a la crisis, podrán evaluarse mejor con los resultados de las elecciones de marzo y mayo de 2022.

Los diálogos fáciles son también difíciles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó, en julio de 2021, 40 recomendaciones para garantizar los derechos humanos y el derecho a la protesta que podrían ser parte de la agenda de un diálogo genuino e incluyente. El gobierno rechazó algunas de las recomendaciones sobre reorganización de la Policía Nacional y su adscripción al Ministerio del Interior, sobre la investigación urgente de la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en graves violaciones a los derechos humanos, la reparación a las personas victimizadas por uso desproporcionado de la fuerza policial, la garantía del derecho a la protesta y el manejo dialogado de corte de rutas y bloqueos, el acatamiento a la jurisprudencia que prohíbe a la Procuraduría hacer de juez y sancionar a funcionarios de elección popular, el cumplimiento de los mandatos y principios constitucionales sobre separación de poderes e independencia de los organismos de control, de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación de cualquier subordinación al Ejecutivo o al jefe del partido de gobierno, la revisión del fuero militar y de las competencias de la justicia penal militar en asuntos de policía y ajenos a las funciones de las fuerzas armadas.

Desde las organizaciones y sectores movilizados en el Paro Nacional se ha manifestado el apoyo a las recomendaciones de la CIDH y la disposición a realizar diálogos en diversas instancias y con la comunidad internacional para promover su acatamiento por parte del Estado colombiano.

El Comité Nacional de Paro, por su parte, ha promovido varios proyectos de ley que pueden sumarse a esa agenda de diálogos posibles. Su escenario es el Congreso de la República y cuentan con el apoyo de senadores y representantes alternativos, de oposición, y algunos de Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U. Son diálogos respaldados por jornadas de movilización y debates

académicos y en las organizaciones de soporte del paro nacional que también tendrán vigencia en el nuevo Congreso, en 2022. En el comunicado del 15 de junio, que declara implícitamente cerrada la etapa de paro continuado, las organizaciones sociales que forman parte del Comité Nacional de Paro llaman a fortalecer los diálogos regionales con autoridades territoriales y las mesas locales o sectoriales con el gobierno para temas especiales (Comité Nacional del Paro, mayo 2021):

- Reforzar diálogos y negociaciones regionales (con alcaldes, gobernadores y delegados del gobierno nacional), con los Comités Departamentales de Paro y otros sectores movilizados, así como adelantar las negociaciones de los pliegos de estatales y sectoriales. Con autonomía de regiones, sectores y procesos, lo que incluye definiciones de no negociar si se considera que no hay garantías de movilización y DD.HH.
- Presentar iniciativas al Congreso, con base en los preacuerdos de las garantías a la protesta y del pliego de emergencia y de las iniciativas que salgan de las diversas actividades que realice el Comité Nacional de Paro.

Por otro lado, el CRIC y sectores de la Minga han acogido el llamado de las universidades a construir un pacto social a partir de convergencias en torno de los siguientes temas: pacto fiscal por el desarrollo económico y social; derechos fundamental a la salud y sistema de salud; fortalecimiento de la democracia; implementación plena de la Constitución; implementación plena de los acuerdos de paz; Estado social de derecho; protesta social y fuerza pública; derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento, juventud y ciudadanía. La propuesta del CRIC y otros sectores, en el segundo semestre de 2021, ha sido la construcción en un diálogo social de un Pacto por la vida para ser refrendado en una consulta popular cuyo proceso de convocatoria y fecha de realización dependen de los resultados electorales de 2022. Incluso la idea de una re-Constituyente está en discusión como posibilidad para el siguiente cuatrienio.

Las palabras pacto, diálogo y negociación están a la orden del día al ritmo de la insubordinación social y de las jornadas de movilización intermitente que caracterizan el actual periodo de crisis y búsquedas en Colombia. Son muchas las propuestas y serán múltiples los caminos para los diálogos fáciles, para los difíciles y para hacer posibles los imposibles.

Referencias Bibliográficas

- La Asociación Nacional de Empresarios. (4 de abril de 2021). *La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI)*. Obtenido de La Asociación Nacional de Empresarios –ANDI- propone una fórmula solidaria por parte del sector empresarial para realizar una reforma tributaria que garantice la sostenibilidad fiscal y los programas sociales : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.andi.com.co%2Fuploads%2FDocumento%2520ANDI%2520-%2520Propuesta%2520Reforma%2520Tributaria%252014%2520abril%25202021.pdf&cflen=97455&chunk=true>
- Galeano, N. (17 de noviembre de 2021). *Nueva reforma tributaria: \$9 billones para las empresas y un par para los ciudadanos de a pie*. Obtenido de Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana: <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/nueva-reforma-tributaria-9-billones-para-las-empresas-y-un-par-para-los-ciudadanos-de-a-pie/>
- Utadeo. (2 de diciembre de 2019). *Las demandas sociales y la tributación*. Obtenido de Utadeo: <https://www.utadeo.edu.co/es/nuestra-produccion/salomon-kalmanovitz/111891/las-demandas-sociales-y-la-tributacion>
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (20 de octubre de 2020). *Sentencia en contra del Presidente de la República de Colombia IVAN DUQUE MARQUEZ, por el incumplimiento a las garantías de protección en la defensa de la vida, la paz, el territorio y la democracia*. Obtenido de Consejo Regional Indígena del Cauca: <https://www.cric-colombia.org/portal/sentencia-en-contra-del-presidente-de-la-republica-de-colombia-ivan-duque-marquez-por-el-incumplimiento-a-las-garantias-de-proteccion-en-la-defensa-de-la-vida-la-paz-el-territorio-y-la-democracia/>
- Agencia de Información Laboral. (20 de julio de 2020). *Estos son los 6 puntos del pliego de emergencia*. Obtenido de Escuela Nacional Sindical: <https://ail.ens.org.co/noticias/estos-son-los-6-puntos-del-pliego-de-emergencia/>
- Carrión, C. (6 de mayo de 2021). *Altas Cortes respaldan diálogo nacional, condenan hechos de violencia y reconocen programas sociales del Gobierno*. Obtenido de Presidencia de la República: <https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Altas-Cortes-respaldan-dialogo-nacional-condenan-hechos-de-violencia-y-reco-210506.aspx>
- Díaz, J. (28 de mayo de 2021). *Gobierno desautoriza acuerdo firmado en Buenaventura*. Obtenido de El tiempo: <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-desautoriza-acuerdo-firmado-en-buenaventura-591908>
- Semana. (25 de mayo de 2021). *El paro de transportadores estaría a punto de ser levantado*. Obtenido de Semana: <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/el-paro-de-transportadores-estaria-a-punto-de-ser-levantado/202140/>
- SOCIAL, R. T. (9 de junio de 2021). Obtenido de Indepaz: <http://indepaz.org.co/reforma-tributaria-de-2021-mas-de-lo-mismo-frenta-a-la-creciente-protesta->

social/

Portafolio. (28 de mayo de 2021). *Desautorizan punto de acuerdo con el Comité del Paro en Buenaventura*. Obtenido de Portafolio: <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/comite-del-paro-en-buenaventura-desautorizan-punto-de-acuerdo-552398>

COMOSOC. (15 de junio de 2021). *Declaración política de organizaciones y procesos sociales del Comité Nacional de Paro CNP*. Obtenido de COMOSOC: <https://comosoc.org/declaracion-politica-de-organizaciones-y-procesos-sociales-del-comite-nacional-de-paro-cnp/>

Indepaz y Temblores. (17 de mayo de 2021). *INFORME DE TEMBLORES ONG E INDEPAZ A LA CIDH*. Obtenido de Indepaz: <https://indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/>



NICO VIVE!!!



DILAN
ESTAMOS
CONFIGO!

SI
OLVIDAMOS,
LOS ASESINOS
GANAN

Fotografía: Santiago González

Colombia: Pacto Reconstituyente o crisis destituyente³⁵

Camilo González Posso

Vivimos en el mundo un periodo de crisis multiforme y de redefiniciones de poder que probablemente van a marcar toda esta década que muchos llaman de tránsito a una nueva normalidad post pandemia. Es en ese contexto global que se han desatado las protestas e insubordinación social en Colombia como en muchos países.

La pandemia agravó viejas crisis y desencadenó otras en una coyuntura de grandes fracturas acentuadas en Colombia por la confrontación propia de la situación post acuerdo de paz. En la búsqueda de respuestas se ha mostrado urgente considerar todas las dimensiones de esta fase en la que lo más visible es la emergencia sanitaria frente al COVID 19, la depresión económica, la catástrofe social con impacto mayor en los más pobres y vulnerados, el fracaso de las recetas neoliberales, la polarización entre la insubordinación y la imposición de tiranías y regímenes de excepción autoritarios para reprimir el descontento y manejar el miedo ante la pandemia.

La pandemia del COVID 19 llevó a los centros de poder, incluida la Organización Mundial de la Salud, a definir el cierre total o parcial de fronteras y a medidas de bioseguridad que incluyeron desde febrero de 2020 cuarentenas en todos los países con parálisis de la mayoría de las actividades sociales y económicas. No obstante, algunas resistencias a seguir el modelo de enclaustramiento, se fue imponiendo la idea de disminuir la velocidad de contagio con medidas de distanciamiento social que incluyeron cierre de centros educativos, trabajo en casa sobre todo en el sector público, confinamiento de familias y zonas poblacionales con indicadores altos de contagio, dotación de hospitales de insumos y unidades de cuidados intensivos y demás medidas de autocuidado.

El impacto de esta parálisis socio económica fue mayor en Colombia que en otros países de similar configuración pues ocurrió en proporción a las bajas

³⁵ Artículo publicado en Septiembre 18 de 2021, Bogotá, D.C.

capacidades y reservas del Estado, al peso dominante del trabajo independiente precario y de la informalidad, a las características mercantiles del sistema sanitario y a la depredadora capacidad de disputa de rentas y de posiciones institucionales por parte de los más poderosos de la economía y la política.

En Colombia, como en otros países, la aplicación del modelo neoliberal ha llegado a un estadio de inestabilidad y de crisis recurrentes, con sobre endeudamiento del Estado, déficit creciente en la balanza de pagos y en la balanza comercial, dependencia en el 85% de las exportaciones primarias – minero energéticas y de cuatro productos agrícolas con bajo valor agregado –.

La captura del Estado por las grandes corporaciones locales y sus aliados multinacionales se ha convertido en variable decisiva de la acumulación, concentración de la riqueza y transformación de Colombia en uno de los países más inequitativos del mundo y el segundo en el continente.

Las políticas macroeconómicas, la tributación y la contratación pública se han puesto al servicio del sector financiero y de los oligopolios, llegando a la privatización y tercerización de lo público y a la precarización del trabajo a todos los niveles, incluido el técnico y profesional.

La economía campesina y la industria manufacturera siguen siendo asfixiadas por los tratados asimétricos llamados de libre comercio; mientras que la propiedad colectiva y ambiental siguen sometidas a la disputa violenta de territorios para entregarlos a megaproyectos.

La pandemia fue abordada por el gobierno reforzando el modelo clásico de respuesta pasiva a la enfermedad o al riesgo de contagio. Durante el 2020 la gestión sanitaria frente al COVID 19 fue rutinaria, lenta y mediada por agentes tramitadores de insumos y atención de urgencias. La respuesta del Estado quedó prisionera del sistema dominado por las EPS y la reacción de Unidades de Cuidados Intensivos. No se mostró capacidad alguna para replantear la política pública de modo que se le diera importancia a la prevención atendiendo la emergencia en seguridad alimentaria y con estrategias territoriales de salud comunitaria, familiar y ambiental. Y para completar, a finales de 2020 e inicio del 2021, el gobierno fue negligente en la programación de compra de vacunas y permitió que se generaran sobre costos y demoras para lograr niveles

adecuados de vacunación a los diversos grupos poblacionales y a las regiones con situaciones críticas.

Son conocidos los indicadores de la depresión económica y el colapso social (Indepaz y Temblores, 2021; y Comité Nacional del Paro, junio 2021). También son conocidos los indicadores de aumento de la desigualdad y del apoyo gubernamental para el logro de utilidades exorbitantes del sector financiero y de las grandes empresas durante la pandemia. Se ha documentado ampliamente el abuso de la fuerza policial y de la persistencia de violencias permitidas por omisión de acciones desde el gobierno y aplicación de políticas de guerra en lugar de la implementación de los acuerdos y de nuevas políticas de construcción de paz. Incluso se han llenado las redes de información sobre la interrelación del origen de esta pandemia, como de epidemias que le antecedieron, con el choque de la actual civilización y la vida en el planeta, el choque de la expansión acelerada de los sistemas humanos a costa de los ecosistemas y los sistemas de otros seres vivos que son desterrados y sometidos a la extinción (Comité Nacional del Paro, junio 2021).

A pesar de tanta información son frecuentes los análisis parciales que tienden a reducir las características de la crisis, la explosión e insubordinación social a unos pocos elementos sin ver el conjunto, ni la multiplicidad de componentes, ni el contexto global.

Ejemplo de esa simplificación es la definición de la situación como crisis social reducida al hambre y a las condiciones de empobrecimiento. Quienes se quedan en ese enunciado buscan respuestas o soluciones en planes de alivio inmediato. Otros dicen que se trata de una explosión de la juventud encabezada por lo que peyorativamente llaman los NINI - NI, ni trabajo ni empleo, ni futuro. Sobrevaloran protagonismos importantes como el de la Primera Línea y oscurecen el sentido antisistema de la movilización social y política de millones de jóvenes en las jornadas del Paro Nacional. Desde esta visión minimalista, a veces muy conveniente para la cooptación, la alternativa la buscan en mini planes de empleo y educación para los jóvenes. También están los enfoques que se reducen a la indignación ciudadana por los abusos de la policía y graves violaciones a los derechos humanos.

A ninguna de estas aproximaciones les faltan argumentos en la defensa de

su parcela, pero se quedan a mitad de camino si no la entienden como parte de una totalidad en la cual la reivindicación particular tiene significado, existencia y posibilidad de solución (González, 2021)³⁶.

Por otra parte, el reduccionismo lleva a una lectura rutinaria y cuantitativa de las protestas sin comprender el significado de la ruptura histórica que se ha producido por la revolución de conciencia para toda una generación que encontró nuevos caminos para rechazar no sólo las manifestaciones lesivas del sistema local y global sino para darse la oportunidad de pasar, desde y con las resistencias, a la utopía posible, a la visión de otra forma de vivir en sociedad.

Muchas de las simplificaciones, e incluso la unión de simplificaciones, tienden a buscar programas y consensos mínimos sectoriales y llaman al pragmatismo para presentar reivindicaciones y propuestas supuestamente viables que dejan para después los asuntos políticos y económicos que conllevan antagonismos, fuertes oposiciones o que suponen ruptura de sistemas.

Propuestas de pacto social

En medio del paro nacional se han presentado propuestas de construcción de un nuevo pacto nacional y también de pactos parciales para promover algunas reformas. Unos ponen el énfasis en los contenidos del pacto y otros incluyen además los procedimientos para alcanzarlo.

Considerando primero los procedimientos del pacto la lista de propuestas ha incluido la realización de una consulta popular en noviembre de 2021 o en fecha distinta a las elecciones en el año 2022, la inclusión de papeleta en las elecciones a consejos de juventud, de papeleta de mandato en las elecciones de marzo de 2022, convocatoria a un proceso Reconstituyente, con o sin asamblea constitucional.

Al mismo tiempo se han propuesto leyes que buscan responder a las exigencias del Pliego Nacional de Emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro. Y en otro terreno se promueven pactos populares democráticos sustentados en asambleas locales y regionales por fuera de mecanismos electorales.

36 En el artículo “El paro después del paro” intento mostrar la matriz de procesos que podría ayudar a una comprensión integrada de la insubordinación social en Colombia en 2021.

La opción legislativa, la primera prueba post paro

El Comité Nacional de Paro decidió en junio de 2021 cambiar la estrategia del paro indefinido por las convocatorias escalonadas a jornadas de movilización para exigir respuestas del gobierno en mesas sectoriales o regionales de diálogo y para respaldar un paquete de leyes a ser tramitadas en el Congreso de la República en las últimas legislaturas del cuatrienio o a partir de agosto de 2022.

Ese paquete de leyes fue anunciado el 20 de julio y su trámite depende de acuerdos con los congresistas independientes, de oposición con el concurso de senadores y representantes de los otros partidos que se diferencian en algunos temas de sus propias bancadas. El primer grupo de iniciativas legislativas incluye 10 proyectos,

1. Renta básica de emergencia. Crea una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7, 5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza y que han sido especialmente afectados por la crisis económica que vive el país. Dicha Renta Básica de emergencia cuenta con enfoque de género y con medidas de veeduría y participación ciudadana.
2. Matrícula cero en educación superior. Garantiza la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado en todas sus modalidades y propone que se disponga nuevos recursos del presupuesto general de la nación para su financiación.
3. Fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia. Establece medidas para resolver de manera inmediata la problemática de desfinanciación de la red pública de salud, la formalización laboral y atención a la salud mental de trabajadores del sector.
4. Apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo. Amplía los apoyos en subsidios y créditos para las micro y pequeñas empresas, así como mejorar y crear diversas medidas para la generación y sostenimiento de empleos y así contribuir en la reducción del desempleo que ha dejado el COVID.

5. Apoyos para la reactivación del sector agropecuario. Mejora las medidas de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, alivios financieros adicionales para deudores del sector agropecuario, créditos de emergencia para la reactivación del sector, y establecimiento de un fondo para la estabilización de los precios de los productos agropecuarios.
6. Derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social. Deroga el decreto 1174 de 2020 que reglamenta el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, con el propósito de establecer un marco normativo del piso de protección social conforme a los convenios de la OIT.
7. Acciones promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género. Fortalece e integra las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atención, un protocolo de atención a las violencias basadas en el género, entre otros temas relacionados.
8. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Regula, por ley estatutaria, los principios, garantías, obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica a la luz de los estándares internacionales que regulan la materia y que hacen parte del bloque constitucionalidad. El proyecto da cumplimiento a lo establecido en el punto 2.2 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, a las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 7641 de 2020 y a las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.
9. Reforma al estatuto de juventud (Ley 1622 de 2013), para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud. Hace más efectiva e incentiva la participación política de la juventud mediante la modificación de la ley 1622 de 2013 que creó el Estatuto de Juventud. Se robustece la figura de los Consejos de Juventud otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud, otorga incentivos a la participación política de

la juventud y fomenta espacios de diálogo que permitirán la construcción de políticas más cercanas a la juventud y la ciudadanía.

10. Reforma a la policía. En varias iniciativas, congresistas han recogido las exigencias de reformas a la Policía, que van desde el desmonte del ESMAD, la renovación y cambio de la doctrina basada en la garantía de los derechos humanos el traslado de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, la reforma al sistema de ascensos, el juzgamiento por la justicia ordinaria de los delitos cometidos por la Policía. Reformas todas dirigidas a fortalecer el carácter civil de la policía nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza en las protestas, parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma.

Además, en la misma línea se han presentado proyectos de reforma tributaria que se discuten al tiempo con la propuesta entregada por el gobierno el pasado 20 de julio. Y, aunque en el Comité de Paro no le dieron prioridad, otros sectores apoyan el trámite de proyectos en temas estrechamente vinculados con la implementación de los acuerdos de paz en materia rural, electoral y de asignación de partidas en el presupuesto 2022; están también los proyectos ambientales *antifracking*, sobre derechos étnicos, en defensa de la consulta previa y de la regulación relativa a la coca y al cannabis de uso adulto.

La suerte del pliego nacional del Comité de Paro quedó en 2021 en manos de un Congreso de mayoría oficialista, dedicado a cuidar intereses particulares y a la campaña electoral.

La estrategia del Comité Nacional de Paro de trasladar el centro de atención sobre las demandas sociales al debate parlamentario, condujo a corroborar el bloqueo impuesto por el régimen y los partidos de la coalición de gobierno a toda exigencia que altere el modelo neoliberal de reparto de beneficios y poderes. Después de muchos debates en el Senado y Cámara, de plantones y audiencias en las cuales tienen voz los voceros del paro y hasta de la protesta radical, la controversia se desplaza a las urnas y a las calles.

Respuestas del gobierno

Preocupado por el desprestigio de su gobierno y por los altos costos para los partidos que lo sostienen, el presidente Duque presentó varias iniciativas, entre las cuales sobresalió la reforma tributaria 4. No es una reforma estructural como la que recomendó la misión tributaria nombrada por Duque en 2019, ni otro paquete al estilo del que detonó el levantamiento en marzo de 2021 que incluía aumento del IVA para bienes de consumo familiar, exenciones a las empresas, ampliación de la base tributaria y de impuestos de renta a ingresos de los asalariados e independientes, entre otras.

Se proyectó en el segundo semestre de 2021 una pequeña reforma para recaudar 15,2 billones de pesos procedentes de detener el regalo de 5% del impuesto a la renta de empresas que estaba previsto en la reforma de 2019 de modo que esa tasa será del 35%; las grandes empresas ya habían logrado una rebaja desde 40% en 2017 a 37% en 2018. Se mantiene el retorno a los empresarios del 50% del ICA postergando el retorno total y se mantiene la sobretasa del 3% (algunos proponen 4%) a las grandes entidades financieras que tanto han acumulado en medio de la pandemia. En cambio, se les promete mantener las demás gangas otorgadas en las reformas de 2018 y 2019 y se atiende a la propuesta de la ANDI de vender ISA Intercolombia al sector privado, abriendo la puerta a la privatización de otros activos del Estado. Las pequeñas y medianas empresas serán gravadas al mismo nivel que las más grandes (Cuestión Pública, 2021).

En 2020 el Ingreso Solidario transfirió 4,3 billones de pesos a 3,1 millones de hogares, lo que, sin descontar gastos de trámite y costos bancarios, significa aproximadamente \$80.000 mensuales por familia. Además, se hicieron 5 giros adicionales a Familias en Acción, nueve adicionales a los vinculados al programa adulto mayor y devolución del IVA a 300.000 familias en pobreza extrema. (Minhacienda, 2021)

Con la nueva reforma tributaria el gobierno se propuso ampliar a 4.1 millones los hogares que reciben el Ingreso Seguro hasta junio de 2022. Se mantienen las transferencias o subsidios a cerca de 3 millones de beneficiarios de los viejos

programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y hasta 2023 la matrícula cero en universidades públicas. Este paquete de transferencias supone un aumento en 2022 de 30% de los recursos presupuestales que tenían en 2020.

El otro componente importante de la asignación de los nuevos recursos se destina a la reactivación económica de las empresas más vulneradas en la crisis de 2020 y al estímulo del empleo, incluido lo relativo al empleo joven que viene desde 2018.

Esa reforma tributaria 2021 ha sido contrastada con la que impulsó el gobierno en 2019 cuando pretendió profundizar el modelo de concentración de capital, beneficios y subsidios públicos a las grandes corporaciones y grupos financieros como el motor de la economía y de la respuesta a la depresión económica y social. Es una reforma pírrica que no supera el 5% del total del presupuesto nacional en 2022, que significa una pausa de un año en las políticas ortodoxas y contraccionistas, pero deja en firme exenciones y menores impuestos a la renta de las empresas, menor IVA a importaciones de bienes de capital y otros beneficios diseñados desde 2018 y en la reforma que tumbó el paro nacional.

Se trata de una respuesta insuficiente ante la magnitud de la crisis que en el mejor de los casos contrarrestará en 2022 la caída en la pobreza al 10% de los empobrecidos durante la pandemia, si proyectamos los cálculos de impacto mencionados en la exposición de motivos entregada por el gobierno el 20 de julio de 2021. (Minhacienda, 2021)

En materia de empleo e ingresos la respuesta de la gente ha sido retomar progresivamente las actividades económicas, asumir los riesgos de la pandemia y volver al trabajo informal, del rebusque y de micro-negocios. En lo que se refiere a las 500.000 pequeñas empresas quebradas en la crisis 2020 – 2021 la recuperación ha sido lenta y para centenares de miles inalcanzable. Y lo mismo ocurre en la pequeña producción rural, campesina y étnica, que se ha replegado a la subsistencia mínima con gran dificultad para llevar excedentes a los mercados locales o de exportación.

Ante esta situación, la continuidad de los programas de apoyo a las empresas, tal como lo ha planteado el gobierno, sigue siendo marginal para la mayoría

que queda excluida de los apoyos para pago de nómina. La vinculación de nuevos trabajadores, incluidos los jóvenes, es una posibilidad subordinada a la recuperación de la demanda y por lo mismo su efecto inmediato en 2021 y 2022 es mínimo.

En otros temas críticos la respuesta del gobierno ha comenzado por reafirmar sus estrategias de seguridad enfocadas en lo que define como una nueva guerra y algunos de sus aliados llaman a que en el próximo cuatrienio se ganen las guerras que faltan, como dijo el precandidato conservador Juan Carlos Echeverri (Villamizar, 2021). Con ese enfoque los sectores uribistas promueven reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz, políticas antidroga en contravía de los acuerdos de paz, reformas para permitir que la procuraduría haga de fiscal y juez y pueda destituir a funcionarios de elección popular. Se le da vía libre a la contratación clientelista desde la Registraduría y a la injerencia corrupta de la Comisión Nacional Electoral en los resultados electorales. (Novoa, 2021)

La reforma a la Policía y las iniciativas de regulación de la protesta son otras muestras del continuismo. En esa línea está la creación de un Viceministerio en el Ministerio de Defensa. El gobierno no atiende las demandas desde el Paro de disolver el EDMAD y prohibir el uso de armas en las actividades policiales de seguridad ciudadana, de sancionar a los responsables de connivencia con civiles armados, de detenciones arbitrarias y secretas con eventos de desaparición forzada y todo abuso en el uso de la fuerza. Tampoco atiende las recomendaciones de la CIDH sobre separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, ni la adopción de nuevas medidas para la garantía al derecho a la protesta y la no criminalización y represión de bloqueos y cortes de vías que pueden ser controlados mediante el diálogo con los manifestantes (CIDH, 2021). El fortalecimiento de la capacitación en derechos humanos y la introducción de controles y seguimiento que plantea la reforma presentada por el gobierno el 20 de julio de 2021, van en una buena dirección, pero requieren un revolcón a fondo anticorrupción y en las acciones de control interno y competencia de la justicia ordinaria. (Duque, 2021)

La agenda de garantías de seguridad definida en los acuerdos de paz no figura entre las prioridades del gobierno, ni la adopción de políticas y planes de acción

para afrontar la violencia persistente contra comunidades y líderes sociales, con asesinatos y agresiones que atentan contra la paz y la vigencia de los derechos humanos.

Con la ayuda de un Congreso de la República asediado por el narco político y las mafias, presidido en su última legislatura de 2021 por alfiles de grupos respaldados por negocios ilícitos, el gobierno y su partido les cierran el paso a las pretensiones desde la ciudadanía de reformas democráticas y de respuestas estructurales a la crisis social y política.

Pacto social y Consulta Popular

Desde la Minga étnica y popular se ha planteado un pacto por la vida, democracia, paz y territorio que ha tenido varias formulaciones en los últimos años. Desde 2020 se conoció el llamamiento al pacto por la vida y la paz desde el Pacífico y el Sur Occidente. En medio del Paro Nacional importantes organizaciones han promovido la construcción de un “pacto por un mejor país” y han tomado como base la convocatoria realizada por varias universidades a una Convergencia por Colombia para construir un pacto social. A esta idea se han sumado los ambientalistas que impulsan la Agenda 2021 – 2030. (Pacto por la Vida, 2021)

Lo novedoso como posibilidad de nuevas dimensiones de la movilización social ha sido la articulación de esa propuesta de pacto con la iniciativa de una Consulta Popular para someter a votación ciudadana 10 mandatos clave que resuman las demandas. Esa iniciativa ha sido considerada por el ex procurador Fernando Carrillo Flórez y también por el Consejo Regional Indígena del Cauca y otras organizaciones de la Minga Nacional Social y Comunitaria, tal como lo expresa el llamamiento divulgado el 20 de julio de 2021.

Los temas planteados desde el pacto, son los siguientes:

1. Un pacto fiscal que garantice un desarrollo económico y social incluyente.
2. Derecho a la salud y sistema de salud, que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual como derecho (más allá de los mecanismos de mercado).

3. Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática, garantizando efectivamente la separación de poderes y la autonomía de los órganos de control.
4. Implementación plena de los Acuerdos de Paz como avance necesario de convivencia, garantizando el derecho a la paz y la protección de la vida de líderes y lideresas sociales y reincorporados.
5. Garantías para la protesta social y reestructuración a la fuerza pública, implementando mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás derechos humanos, la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos, privados y colectivos.
6. Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento que garantice una educación diferenciada universal, intercultural y de calidad, para todos.
7. Garantías para el empoderamiento de los jóvenes para una transformación en el ejercicio de poder y desarrollos de iniciativas de redes de acción intergeneracional. “Relevo Generacional”
8. Derechos Humanos del Campesinado y las garantías para la participación directa en el diseño de las políticas agrarias y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
9. Creación de la comisión mixta permanente, mediante decreto, como la ruta y metodología de participación directa del campesinado, en el proceso de diseño y construcción de la política (Art 253 de la ley de 1955 del 2019-PND).
10. Participación social y comunitaria, para que dentro de los acuerdos nacionales se garanticen las condiciones y escenarios de participación de las organizaciones movilizadas en el tratamiento de las problemáticas del pliego del paro que más nos competen.

Concluye la declaración señalando que,

En el encuentro con personas del sector académico y algunos ex constituyentes, hemos encontrado que el mecanismo constitucional de la “consulta popular”, es el adecuado para garantizar una participación de todos los colombianos y colombianas en la definición del “Pacto hacia la construcción de un mejor país”, de manera que genere mandatos en torno al mismo y una dinámica social, institucional y sectorial que lo convierta en un hecho histórico en el país (Minga, 2021).

Como señalaron los promotores, es clave traducir los temas identificados en las preguntas muy concretas que requiere la Consulta. Ese ejercicio de síntesis requiere el consenso de las organizaciones y personas que integran y respaldan el comité promotor y tiene el reto de mantener el contenido transformador señalado por una insubordinación social que ha puesto en cuestión pilares centrales de la política económica y social, del régimen autoritario y sus estrategias represivas y de guerra.

En estos procesos participativos, como lo experimentamos en la elaboración de la Séptima Papeleta en 1990, en el Mandato Ciudadano por la Paz en 1997 y en la iniciativa de Referendo por el derecho fundamental al agua (2009), el reto es lograr la más amplia alianza sin minimizar el contenido de los mandatos.

La ruta de una Consulta Popular está definida en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, con sus 11 pasos que pueden durar hasta 13 meses desde la inscripción en la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta el día de votación, que no puede coincidir con un día de elecciones. Sin contar el tiempo de recolección de cerca de 2 millones de firmas, el lapso mínimo es de siete meses que incluye tiempos de entrega de formularios (15 días), verificación de firmas (45 días), concepto del Senado (30 días), revisión constitucional (45 días), plazo después de concepto del senado para la fecha de votación (90 días) (Congreso de la República, 2015).

Según la mencionada ley 1757 de 2015, para que se considere aprobada la Consulta popular se requiere que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral. Según el registro electoral a finales de 2021, deben votar en la consulta más de 13 millones de ciudadanos y la pregunta para ser aprobada requiere la mitad más uno de esos votantes, es decir más de 6,5 millones.

Además, se entiende que las preguntas que pasen el umbral y estén formuladas como reforma legal deben ser implementadas por vía administrativa. Si son formuladas en términos generales obligan al trámite de una ley.

Las experiencias de iniciativa ciudadana de Consulta Popular han mostrado la posibilidad para movilizar y organizar a sectores de la población e incidir en las esferas de los partidos políticos y el Congreso de la República.

La consulta contra la corrupción realizada en 2018 dejó en este plano lecciones notables comenzando por el impacto de la campaña en la conciencia colectiva. Por otro lado, exigió 18 meses de campaña y vueltas para pasar los filtros y umbrales que imponen las maquinarias políticas, los contradictores en el régimen y la propia regulación legal. A la postre no pasó el umbral a pesar de la extraordinaria votación y el balance es pobre en transformaciones institucionales anticorrupción y rico en proyección política de los promotores y en propaganda a las exigencias.

Una Consulta reducida a paliativos de corto plazo, además de incierta, es un desgaste de fuerzas para los sectores movilizados y un camino de cooptación por el régimen. Para que tenga sentido realmente transformador o al menos como un paso adelante en la construcción del poder social Reconstituyente y contra el régimen autoritario, corrupto y de inequidad, debe incorporar las exigencias centrales de la movilización.

Otra papeleta en las urnas

Durante el Paro Nacional y en los meses de repliegue después del 28 de junio, se han escuchado otras propuestas para darle proyección a la movilización en procesos electorales.

Algunos de los grupos de la Primera Línea han propuesto meter en las urnas una papeleta que exija la disolución del ESMAD y la reparación a todas las víctimas de abusos policiales durante el Paro Nacional.

El gobierno nacional por su lado lanzó desde mayo la convocatoria a lo que llamó el Pacto Joven y promovió eventos de diálogo sobre demandas en empleo y educación. Como parte de ese pacto el gobierno también propuso fortalecer los Consejos de Juventud como instrumentos para canalizar propuestas de la juventud en los municipios. En la misma línea la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, propuso impulsar una papeleta para ser introducida en las elecciones de Consejos de Juventud convocadas para noviembre de 2021. Sería una papeleta indicativa de exigencias mínimas con posibilidad de convertirse en referente para la toma de decisiones en políticas públicas y planes de inversión.

El no haber surgido desde abajo, desde la movilización y de las expresiones disruptivas de la inconformidad, les restan convocatoria a estas propuestas de Pacto Joven y de papeleta simbólica.

Estas iniciativas buscan canalizar la inconformidad juvenil en acciones pacíficas, pero ofrecen un mecanismo solo simbólico, no vinculante. Además, el objetivo de normalización sin cambios esenciales tiene el supuesto de que los grandes problemas de la economía, la política, la paz, el ambiente, el patriarcado, la diversidad, la cultura y la garantía de derechos políticos no están en el centro de la agenda de los jóvenes en Colombia.

En toda esta búsqueda de alternativas o de acciones complementarias, se ha considerado también promover en las elecciones de marzo de 2022, una papeleta al estilo de la Séptima Papeleta que sin permiso se metió en las urnas en 1990 y fue decisiva para el proceso constituyente, aunque la Registraduría no la contabilizó. Fue un hecho político antisistema en medio de un levantamiento democrático contra la violencia, las mafias narcotraficantes y por la paz.

En 2022 sería la Tercera Papeleta por un nuevo país, que se invitaría a meter en las urnas junto con el voto por listas de Senado de la República y Cámara de Representantes. Con la Tercera Papeleta se respaldaría el pacto por un mejor país, los pliegos del paro y las reformas incluidas en la consulta y en las iniciativas del Comité Nacional de Paro. Simultáneamente se pueden promover pactos en las regiones y a nivel nacional para que los candidatos al Congreso de la República y a la presidencia incluyan en sus programas los mandatos de la Tercera Papeleta.

Esta papeleta podría tener mayor alcance si se logra un acuerdo político y social que obligue al presidente a promulgar un decreto asignando a la Registraduría los recursos para contabilizarla tal como se hizo con el Mandato por la paz, la vida y la libertad, en las elecciones de octubre de 1997. Este procedimiento de “Mandato Ciudadano” no tiene el carácter vinculante de las formas de participación constitucionalmente establecidas, pero como lo señaló la sentencia de la Corte Constitucional sobre el mandato de 1997, adquiere un significado político mayor que obliga a todas las autoridades y funcionarios a considerarlo para la definición de normas y políticas públicas.

El Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, es una exhortación del pueblo a los órganos del poder y a los ciudadanos para que conformen su acción y su conducta a los principios políticos consignados en el Preámbulo y muy específicamente a la directriz contenida en el artículo 22, que prescribe: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” Tal deseo, respaldado por una votación tan significativa, tiene un indudable valor político y un fuerte contenido moral, y debe obrar a modo de pauta orientadora de la actividad legislativa, gubernativa y judicial, lo mismo que de propósitos y metas de los ciudadanos, pero no es posible, constitucionalmente, erigirlo en parámetros obligados para confrontar con ellos el contenido de las leyes, mucho menos si éstas son anteriores a él y han sido ya objeto de análisis y de pronunciamiento de constitucionalidad por parte de la Corte. Considera la Corporación que no le asiste razón a la demandante, pues el Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, por las razones que se dejan expuestas, no es una norma jurídica y, mucho menos, puede considerarse como un acto reformativo de la Constitución. (Sentencia C-339/98).

En 2010, una amplia alianza social y política intentó realizar un Mandato exigiendo acuerdos humanitarios y negociaciones de paz, pero el Consejo Nacional Electoral se opuso ante el veto de algunos de los partidos oficialistas allí representados. De modo que esa ruta de pedagogía e incidencia política requiere altos niveles de movilización y pactos políticos amplios. Una iniciativa como la Tercera Papeleta sólo tiene posibilidad de ser instrumento de protesta y presión por el cambio si es sustentada por la Minga étnica, campesina y popular, el Comité de Paro, las primeras líneas, las mesas locales y regionales formadas desde el 28 de abril, los promotores de pliegos y pactos en medio de la protesta, entre otros.

En la situación post paro en Colombia siguen activas las dinámicas de la movilización social pero los mecanismos institucionales de participación están bloqueados para acciones que cambien los pilares del régimen, incluido el poder corrupto, clientelista, el modelo de inequidad, las mafias incrustadas en las instituciones, los para y narcos políticos y las múltiples alianzas contra la paz. Tal vez la propuesta de tercera papeleta con las exigencias disruptivas del paro pueda servir de conector entre la inconformidad y la política, entre la democracia de la calle y las campañas electorales alternativas al régimen.

Esta reseña de iniciativas post paro, agenda legislativa, consulta y papeleta joven, muestran la dificultad de encauzar la protesta e insubordinación social en mecanismos participativos hoy altamente controlados por el Congreso de la República y la coalición de gobierno. El esfuerzo de reducir al mínimo los contenidos de las exigencias contenidas en por lo menos 7 pliegos de exigencias presentados en el Paro Nacional, puede terminar siendo inútil y contraproducente. Cuando se convierte el pacto en objetivo y las demandas transformadoras se disuelven, o se colocan en segundo plano, se debilitan los movimientos de protesta y de cambio político. Por el contrario, el objetivo, que puede sintetizarse en fórmulas básicas, es el que ordena posibles pactos, alianzas, estrategias y procedimientos.

Tal vez la mirada estratégica de la situación debe partir de que ya se configuró un pacto por la vida entre los sectores que se expresaron en las movilizaciones en ascenso desde la firma del acuerdo de paz, en las jornadas de 2019, 2020 y en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021. El alcance transformador de lo que sigue, y de nuevos pactos, depende de consolidar las alianzas que de hecho se constituyeron y de fortalecer las expresiones organizativas y de poder democrático tejidas en la protesta y en las resistencias.

Esa democracia directa y participativa de las asambleas comunitarias, de la Minga étnica, campesina y popular, de los artistas e intelectuales, de los movimientos *societales* ambientalistas, de mujeres, de LGTBI, de los movimientos políticos alternativos al régimen, y todas las primeras líneas, son los sujetos transformadores que pueden sustentar las alternativas políticas en este periodo.

Los debates sobre un proceso Reconstituyente para un nuevo pacto en esta década

Ni el gobierno ni los voceros de los agrupamientos más visibles del Paro Nacional 28 A-M-J han presentado como salida a la actual crisis la convocatoria a una Asamblea Constituyente al estilo de lo ocurrido en Chile cuando el levantamiento de 2019. Por el contrario, al cumplirse el 5 de julio los 30 años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en la Constituyente de 1991, son muchas las voces que llaman a oponerse a la idea de Constituyente y

a buscar en cambio su reconocimiento como gran contrato de sociedad y norte para nuevos pactos de convivencia.

Pero al mismo tiempo desde varias esquinas se muestra que el marco institucional vigente necesita lo que voceros de la Minga han llamado un proceso Reconstituyente, con mayúscula, que complete la tarea de la Asamblea de 1991 y le salga al paso a la imposición de un régimen autoritario que se superpone al Estado Social de Derecho y avanza en el camino de la contra-reforma, la negación de la paz y la imposición de gobiernos basados en estados de excepción de hecho o legalizados. Desde el Centro Democrático se ha hablado en algunos momentos de una constituyente para reformar la justicia, pero esa idea no ha entrado en consideración en medio de la insubordinación de 2021 y de las respuestas desde la coalición de gobierno.

En Chile las movilizaciones sociales que se desencadenaron a partir de demandas mínimas como las tarifas del metro de Santiago condujeron al enfrentamiento a las políticas del gobierno y de allí al choque con las herencias aún vigentes de la dictadura de Pinochet. Se dio un transcrecimiento de reivindicaciones y el encadenamiento de exigencias de mejora en las condiciones económicas para adquirir en la cúspide de las confrontaciones y de la crisis de ingobernabilidad un contenido político de redefinición de la organización del Estado y de las garantías para la efectiva realización de los derechos. La movilización social se integró con la oposición política pacífica y radical al gobierno neoliberal y al pinochetismo sobreviviente.

El proceso que llevó en Chile a la Convención Constituyente elegida en mayo de 2021, se agigantó con el levantamiento ciudadano de octubre de 2019 después de tres décadas de debates sobre la necesidad de reemplazar la constitución de 1980 que promovió Pinochet y se impuso como base para la transición a la post dictadura. La iniciativa de nueva constitución estaba en la agenda del Congreso chileno y de los partidos no pinochetistas cuando estalló la protesta encabezada por los jóvenes y respaldada por partidos políticos. Fueron esos partidos los que firmaron el pacto en diciembre de 2020 con la ruta para convocar a la convención constituyente.

En Colombia las iniciativas de convocatoria a otra constituyente han sido debatidas en la última década en circunstancias extremas. En las conversaciones

iniciadas en La Habana entre el gobierno y las FARC EP en 2012, se debatió la idea de llevar a una Constituyente los acuerdos de paz para su refrendación y para la construcción de la institucionalidad básica de su implementación. Esa opción fue descartada y el gobierno impuso la realización de un referendo que resultó fallido. También se ha considerado la hipótesis de convocatoria a una Constituyente para una segunda ronda de acuerdos de paz que cierren definitivamente las confrontaciones armadas con el ELN, con otros reductos insurgentes y, de otro lado, con los sectores del régimen que persisten en iniciativas de guerra y de paramilitarismo.

Las propuestas de Constituyente hechas desde el Centro Democrático han sido reacciones ante el avance de procesos judiciales por parapolítica o investigaciones por complicidad con el paramilitarismo. Así ocurrió en 2020 cuando, por unos días, fue privado de la libertad el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento el CD propuso en declaración oficial una Constituyente para reformar el sistema de justicia, y en particular a las cortes, con la idea de crear una sola corte y licuar de paso procesos penales incómodos. En palabras de la senadora Paloma Valencia,

Se necesita una constituyente para crear una corte única que permita unificación, claridad y anule el sentimiento de trampa que muchos colombianos piensan. Una sola corte con magistrados íntegros donde no haya ninguna puerta giratoria con la política y que renuncien a cualquier vínculo electoral (El País, 2020).

Al momento del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 y de las protestas en la mayoría de las ciudades de Colombia, el alcalde electo de Medellín habló de la posibilidad de una constituyente como alternativa a la crisis. En la carta dirigida al presidente Iván Duque, Daniel Quintero señaló que la Conversación Nacional entonces convocada debería considerar la convocatoria a una constituyente,

El andamiaje institucional actual no permite llevar a cabo las reformas que requiere el país. La gente está en la calle porque siente que merece un

futuro diferente. Las regiones están atrapadas en un modelo centralista; el Congreso ha fallado en reformarse; la justicia está estancada y los escándalos de corrupción no paran. El campo lleva décadas esperando reformas que le permitan desarrollarse; el desempleo aumenta y los empresarios encuentran todo tipo de barreras para crecer (Semana, 2019).

A diferencia de la situación en Chile, en Colombia la Constitución Política de 1991 es defendida por los partidos de oposición, independientes e incluso por casi todos los de la coalición de gobierno como pacto marco de la sociedad. Los sectores democratizantes que quieren fortalecer el Estado Social de Derecho temen que una constituyente, así sea pensada para un temario parcial, una vez en funcionamiento cobre mayor autonomía y se pongan en peligro logros democráticos que siguen vivos en la Constitución del 91.

Ronda el fantasma del referendo de 2016 cuando por estrecho margen ganó el No al pacto de paz firmado en La Habana y Cartagena en julio de ese año y algunos sectores que fueron decisivos en la asamblea constituyente temen volver a barajar las cartas en un escenario incierto.

Antonio Navarro Wolf (2021), quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente, expresa recurrentemente esos temores y en esta ocasión volvió a advertir que “La idea de que una asamblea constituyente ‘siempre’ produce reconciliación es equivocada. Fue cierta en 1991, pero hoy puede ser más polarizadora, con consecuencias en la Constitución, no es una buena idea”.

Detrás de afirmaciones se concluye con razón que no corresponde a este periodo histórico matar la Constitución Política de 1991, pero esa buena tesis no puede obviar la necesidad de hacer una valoración de la crisis institucional y de ingobernabilidad que se ha mostrado en medio de la pandemia y la catástrofe social, ni tampoco de las dimensiones de la insubordinación social y sus potencialidades transformadoras. Con frecuencia prima la percepción pesimista de la continuidad de un panorama de equilibrio de fuerzas o de predominio político de los partidarios de la contrarreforma. Asalta el temor de que se facilite el plan de la ultraderecha en Colombia que ha sido explícita en el propósito de refundar la patria cambiando la misma constitución, desmontando las cortes,

estableciendo un congreso clientelista unicameral, fortaleciendo la privatización de lo público y el corporativismo, imponiendo los principios ultra conservadores sobre la familia, los temas sexuales, el prohibicionismo, la eutanasia, el laicismo, las restricciones a la libertad, los avances en democracia participativa y derechos étnicos, las soluciones negociadas para la solución de conflictos armados y construcción de paz, la justicia transicional, etc...

Todos esos temores no logran negar que en Colombia se está gestando un proceso Reconstituyente, aunque una constituyente no tiene cabida en la coyuntura actual. En medio de la crisis actual se ha mostrado la vigencia y fortaleza de la Constitución Política y también la necesidad de una nueva ola de reformas de fondo que cierren las grietas abiertas por el régimen autoritario y los sectores neoconservadores/neoliberales. Se está gestando lo que llaman los académicos un “momento constituyente” con potencialidades en lo que resta de esta década y cuyo desenlace dependerá de la dimensión de la movilización social, de los resultados electorales y de las respuestas a la recesión y catástrofe social y económica en medio de la pandemia y en la post-pandemia (Botero, 2016).

Ese proceso Reconstituyente puede ser impulsado en el próximo cuatrienio por una gran alianza que parta de reconocer los avances de la Constitución de 1991 y la necesidad de darle mayor fuerza al Estado Social de Derecho y a la democracia participativa de solidaridad.

Como ha señalado Armando Novoa García, exmagistrado y expresidente de la Comisión Legislativa de 1991, “a pesar de que tenemos 55 reformas, salvo la de la reelección inmediata ninguna ha logrado quebrarle la columna vertebral a la Constitución. Le han quebrado unas vértebras, pero no la columna vertebral en su conjunto”. Novoa no desconoce la posibilidad de procesos constituyentes o de una “nueva ola constitucional” en la próxima década:

Siguiendo la idea de Bruce Ackerman, he dicho que no todo momento constituyente desemboca en una nueva constitución. Un momento constituyente- como el caso colombiano- puede desembocar en un reclamo para que se aplique la Constitución vigente y por eso la particularidad nuestra de que hay que hablar de gobiernos “constituyentes”.

Aplicar la Constitución vigente es un punto de partida, pero el otro parte de reconocer que la Constitución ha caído en manos del régimen y su presencia en la vida de la sociedad ha quedado en asuntos clave al arbitrio de gobiernos de turno. Siguiendo la metáfora de Novoa, a la columna vertebral de la constitución le han quebrado varias vértebras y al cuerpo entero le han disminuido funciones por lo que requiere una rehabilitación y piezas nuevas para que se complete la tarea iniciada en 1991 de edificar en el Estado Social de Derecho y la democracia participativa y de solidaridad capaz de superar el régimen que dejó incólume la constituyente de 1991, como advirtieron en su momento los constituyentes Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Lleras de la Fuente. Durante 30 años hemos repetido la advertencia que ellos hicieron cuando dijeron qué: “hemos cambiado la constitución, pero no el régimen”, ahora “le entregamos el niño a Herodes”.

Entre paréntesis. La categoría régimen se refiere a la alianza hegemónica del poder económico, político, mediático, cultural que agrupa a la élite del establecimiento integrada por partidos, grandes empresarios, dueños de medios de comunicación masiva, mafias, lavadores de activos, intelectuales orgánicos y burócratas al servicio de corporaciones. Una definición similar tenía Álvaro Gómez Hurtado quien decía que “hay países que, por encima del orden constitucional, crean un régimen. Lo que los anglosajones llaman “establecimiento”. Se trata de un sistema de aprovechamiento de posibilidades de mando y de los gajes del poder que crea una superestructura de connivencias, que maneja la política e influye en todos los vericuetos de la vida civil. Está constituido por entidades privadas, por grupos no regulados, por compromisos económicos y también por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos participan, no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo, sino un conglomerado de complicidades” (Gómez A, 1995, El gobierno está “preso” del régimen) (González, 2012).

No hay que olvidar que la Constitución Política de Colombia resultó como un pacto entre diversos entre los cuales pusieron su sello los socialdemócrata-liberales, los sociales conservadores, los neoliberales y el clientelismo bipartidista. En medio de la crisis, la constituyente aprobó una nueva carta política modernizante, democratizante y de vanguardia en el continente, que

enterró la que estuvo vigente y fue remendada desde 1886. Sobre sus virtudes se ha escrito mucho y ha sido referente en los procesos constituyentes en varios países de Latinoamérica.

También se ha escrito sobre sus limitaciones tal como lo reseñamos en el libro *Memorias de la Democracia*, a los 20 años de la Asamblea Constituyente (González, 2012). Sin embargo, se ha escrito menos sobre la neutralización de muchos de los principios y normas socialdemócratas- liberales en 30 años de gobiernos y Congresos con hegemonía del régimen clientelista, corporativista, neoconservador/neoliberal. Las conquistas sociales y democráticas plasmadas en la Constitución de 1991 son muchas y han sido defendidas por movimientos, partidos y por los controles de la Corte Constitucional y de otras cortes. Pero por los intersticios neoliberales y de captura corporativa se han multiplicado reformas constitucionales y leyes que han sido la realidad dominante de los gobiernos.

La ola contra-reformista que dominó hasta 2016 ha sido contrarrestada por el constitucionalismo de paz y el andamiaje legal que definió el acuerdo de paz de 2016. Podría decir que el proceso Reconstituyente tiene en su ruta crítica los ajustes constitucionales y legales que se diseñaron en ese pacto de paz para ampliar la democracia, el reformismo social y garantizar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. A esa ruta le faltan señales importantes para la transición a una paz más completa, estable y duradera. La agenda de cambios institucionales para la paz sigue pendiente en muchos aspectos y se ha convertido en otro campo de antagonismo entre las fuerzas progresistas democratizantes y las promotoras de la contrarreforma.

En la crisis actual se han mostrado las consecuencias de un ejercicio del poder en contravía del Estado Social de Derecho que se definió como columna vertebral del ordenamiento institucional en Colombia. Lo que está primando es el desequilibrio de poderes y la reproducción de gobiernos sustentados en la imposición del poder ejecutivo y de los partidos del régimen.

Las normas sobre la elección de magistrados, funcionamiento de los órganos de control, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y la fiscalía general de Nación se han mostrado tolerantes con la subordinación al ejecutivo, al clientelismo y a la jerarquía de los partidos de gobierno.

El autoritarismo se ha entronizado convirtiendo en norma políticas de seguridad para la guerra a viejos y nuevos enemigos internos y externos.

La fuerza pública de conjunto se ha militarizado y se ha hecho evidente la insuficiencia de la definición constitucional sobre competencias, justicia y controles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La justicia continúa en crisis crónica sin lograr superar la ineficiencia, desequilibrios del sistema y los altos índices de impunidad. La crisis de la justicia no se podrá superar sin una reforma democrática de la rama.

La impunidad es la regla para los aforados que llegan a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para los civiles poderosos responsables de crímenes de estado, de guerra y lesa humanidad.

La garantía de los derechos humanos ha quedado al arbitrio de las reglas fiscales manejadas por el ejecutivo y está condicionada por el andamiaje legal neoliberal declarado exequible.

El ordenamiento territorial y la efectiva descentralización han sido postergados. Con maniobras legales y hasta con decretos se impone el centralismo y se atenta contra la territorialidad étnica.

La obligación de la paz y de la implementación de los acuerdos firmados, es sustituida por los programas de partido y la reiteración de estrategias de guerra.

El sistema electoral es controlado por los partidos de gobierno y dominado por el clientelismo, las mafias y la corrupción.

La corrupción, el poder de las mafias y del paramilitarismo, que forman parte del régimen, siguen en el ADN del ejercicio del poder del Estado sin ser contrarrestados con instrumentos constitucionales y legales suficientes.

El Estado corporativo y la captura de las instituciones por los poderes económicos se ha impuesto por encima de la democracia representativa y son insuficientes los mandatos constitucionales y legales de equidad, de la democracia en los medios de comunicación, de progresividad de la tributación y de la no corrupción en los grandes contratos del Estado.

No puede dejarse de lado el que la crisis múltiple que se ha expresado en las movilizaciones de los últimos años y en el Paro Nacional de 2021, incluye el choque del andamiaje institucional y del régimen con la necesidad de responder

a los problemas de la salud y la vida frente a las pandemias y catástrofes que precipitan esta civilización depredadora. El conservadurismo niega la urgencia de responder con nuevos instrumentos institucionales a los problemas del cambio climático, a la contradicción exacerbada entre el modelo de globalización multinacional neoliberal y la Madre Tierra, o si se quiere la biosfera y la vida en el planeta.

En Colombia, como en muchos países, las instituciones, regímenes y gobiernos que han mantenido la hegemonía están en crisis ante la emergencia de movimientos *sociales* transformadores como los de la mujer y la diversidad sexual, los ambientalistas, los defensores de los derechos étnicos, la revolución anti hegemónica de la inteligencia y el conocimiento.

Todo este panorama muestra la urgencia en Colombia de nuevos pactos sociales respaldados por cambios constitucionales y legales.

En esta coyuntura no puede olvidarse tampoco la existencia de fuertes tensiones por los intereses en juego desde el contra reformismo de ultraderecha que pretende lograr las mayorías suficientes para cambiar pilares de la carta política, controlando no solo el Congreso de la República sino también la Corte Constitucional mediante reemplazos con magistrados más afines a sus proyectos de “refundación de la patria”.

El contra reformismo tiene en la mira los acuerdos de paz suscritos en 2016, el desmonte del sistema de justicia transicional incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, las garantías políticas para los reincorporados, las reformas de apertura democrática, de reforma rural integral, la propiedad colectiva, el capítulo étnico y políticas sobre el problema de las drogas.

El proceso constituyente se pondrá al orden del día en el próximo cuatrienio, como contrarreforma si en las elecciones se da un triunfo de la alianza entre la derecha y la ultraderecha, o como Reconstituyente si la balanza se inclina a la izquierda y centro izquierda tanto en las presidenciales como en las elecciones de congresistas. La mejor opción es un nuevo reformismo en los marcos de la actual constitución. El mecanismo puede ser por trámite ordinario de leyes reconstituyentes de contenido socialdemócrata – liberal, de actos legislativos democratizantes como los definidos en el Acuerdo de Paz y otros en la línea de

profundizar la democracia. También cabe pensar, en un escenario de alternancia o pacto democrático y de paz, en la convocatoria a una asamblea constituyente parcial según los términos que define hoy la Constitución Política de Colombia.

Cabe recordar que el artículo 376 de la Constitución Política establece que, Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

Se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. (...).

Esto significa que toda iniciativa de Asamblea Constituyente requiere un pacto político que permita la aprobación de la ley de convocatoria por mayorías calificadas de ambas cámaras y que indica el temario y alcance de las reformas debe pasar por el control de la Corte Constitucional de modo que sea declarada ajustada a los mandatos de la constitución vigente.

Se entiende que en Colombia no existe un procedimiento constitucional para derogar la constitución de 1991 ni para introducir artículos que impliquen su sustitución. No hay que olvidar que la Corte Constitucional declaró inexecutable la ley de convocatoria a un referendo, aprobada por el Congreso de la República para instituir la reelección presidencial por segunda vez.

En la sentencia C- 141/10 la Corte indicó que esa institucionalización de la segunda reelección significaría una “sustitución constitucional” y el desequilibrio completo de los poderes públicos.

De modo que en Colombia sólo es posible un cambio de Constitución, para aprobar una nueva, mediante un golpe de Estado o un acto revolucionario extra institucional. Esas opciones extremas no están al orden del día. Pero desde la ultraderecha algunos piensan que pueden llegar a una nueva constitución debilitando el control de la Corte Constitucional de modo que deje pasar reformas sucesivas que vayan desnaturalizando la vigente.

Todos los caminos conducen a la misma conclusión: se abre paso en Colombia

un proceso Reconstituyente que puede llevar a la adopción de las reformas legales y constitucionales, necesarias para superar la crisis crónica y múltiple que vive Colombia. Y ese proceso depende en primer lugar de la continuidad de la movilización social y de movimientos *sociales* que se concreten en nuevas acciones multitudinarias y en la multiplicación de poderes desde la base de la sociedad. En segundo lugar, el proceso Reconstituyente requiere pactos políticos que se logren en sintonía con la movilización social y al unísono de la crisis del régimen y del debilitamiento de las fuerzas de la ultraderecha. Si en las elecciones de 2022 no se expresa un cambio sustancial en la relación de fuerzas, antes de llegar a un momento constituyente democratizante se pasará por una fase de desequilibrios y fluctuaciones caóticas y por tentativas de contrarreforma y recomposición del régimen con exacerbación de violencias.

Referencias Bibliográficas

- Comité Nacional de Paro. (9 de junio de 2021). *INFORME PRESENTADO POR EL COMITÉ NACIONAL DE PARO A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*. Obtenido de Comité Nacional de Paro: <chrome-extension://efaidnbmnmnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffail.ens.org.co%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2021%2F06%2F9-06-21-Informe-presentado-por-el-Comite-Nacional-de-Paro-a-la-CIDH-9-de-junio-de-2021.pdf&chunk=true>
- González, C. (21 de mayo de 2021). *COLOMBIA EN EL BORDE DEL CAOS PUEDE EVITAR OTRA GUERRA*. Obtenido de Indepaz: <http://indepaz.org.co/colombia-en-el-borde-del-caos-puede-evitar-otra-guerra/>
- Cuestión Pública. (23 de julio de 2021). *EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSION SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*. Obtenido de Cuestión Pública: <https://cuestionpublica.com/descarga-el-texto-del-proyecto-de-ley-de-la-nueva-reforma-tributaria-de-ivan-duque/>
- Noticias Caracol. (20 de enero de 2020). *Juan Carlos Echeverry: los detalles de su corta campaña a la Presidencia de Colombia*. Obtenido de Noticias Caracol: <https://noticias.caracol.tv.com/politica/elecciones-colombia/juan-carlos-echeverry-los-detalles-de-su-corta-campana-a-la-presidencia-de-colombia>
- Novoa, A. (4 de julio de 2021). *30 AÑOS DESPUÉS: A PESAR DE 55 REFORMAS LA CONSTITUCIÓN DEL 91 MANTIENE SU IDENTIDAD*. Obtenido de Indepaz: <http://indepaz.org.co/30-anos-despues-a-pesar-de-55-reformas-la-constitucion-del-91-mantiene-su-identidad/>
- El País. (4 de agosto de 2020). *Centro Democrático propone Asamblea Constituyente para reformar la justic*. Obtenido de El País: <https://www.elpais.com.co/politica/centro-democratico-propone-asamblea-constituyente-para-reformar-la-justicia.html>
- Semana. (14 de noviembre de 2019). *Daniel Quintero le propone a Duque una Asamblea Nacional Constituyente*. Obtenido de Semana: <https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/daniel-quintero-propone-una-asamblea-nacional-constituyente/641925/>
- Botero, C. (6 de octubre de 2016). *En el plebiscito a todos nos faltó humildad*. Obtenido de Semana: <https://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-para-la-paz-catalina-botero-habla-de-marchas-estudiantiles/498010/>
- González, C. (abril de 2012). *Colombia, Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Bogotá, Colombia*. Obtenido de Banco de la República: <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll4/id/2/>



Fotografía: Santiago González



Sí hubo masacre policial en el paro nacional: el gobierno ataca a Naciones Unidas por su informe sobre matanzas en medio de las protestas pacíficas³⁷

Camilo González Posso

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, publicado en la primera semana de diciembre de 2021, señala con suficientes argumentos que se cometieron graves agresiones contra las movilizaciones realizadas durante el Paro Nacional que comenzó en abril de 2021 y se prolongó por casi tres meses en más de 850 municipios de Colombia. Otro informe independiente que cuenta con el visto bueno de la OACNUDH hace la relación de abusos en ocasión del paro de septiembre de 2020 indicando que en Bogotá se perpetró una masacre por parte de fuerzas de la Policía Nacional.

Voceros del gobierno de Iván Duque Márquez se han precipitado al acusar a la representante en Colombia Juliette de Rivero, de hacer manipulaciones políticas y de favorecer campañas de desprestigio de la fuerza pública, e incluso de transgredir las funciones o misionalidad que le corresponde a la OACNUDH en Colombia. (Duque I, 14/12/2020)

Contrasta esta reacción del gobierno con editoriales de medios de comunicación masiva que valoran la seriedad del informe en cuestión y del llamado a hacer los correctivos de fondo para que estas prácticas de uso desmedido de la fuerza estatal no se repitan en Colombia. (El tiempo, 15/12/2021)

Las afirmaciones están sustentadas en 1501 reuniones con funcionarios, testigos y víctimas, en la cuidadosa revisión de registros de medicina legal y de 2414 vídeos de registro en vivo y en directo de los acontecimientos violentos en ocasión de las protestas. De modo que no son afirmaciones a la ligera sino constataciones de hechos que ya son de dominio público y que ahora están analizados por una instancia independiente respaldada por la comunidad internacional.

³⁷ Artículo publicado en Diciembre 15 de 2021, Bogotá, D.C.

Lo primero que debería hacer el gobierno es tomar en serio estos informes. La Oficina de Naciones Unidas ha verificado:

1. 48 casos de homicidio de civiles en medio de las protestas, la mayoría responsabilidad de la Policía Nacional. Dos casos más corresponden a policías asesinados y otros 13 siguen en estudio;

2. Además, se han documentado 62 hechos de violencia sexual y decenas de casos de racismo;

3. Centenares de acciones de agresión desproporcionada para dispersar manifestaciones causando más de 1600 heridos;

4. Decenas de intervenciones injustificadas contra bloqueos transitorios de vías sin mediar el debido diálogo;

5. A eso se suman, según datos de Temblores ONG, 88 lesiones oculares de las cuales el 79% por acción de los agentes de la fuerza pública. La Fiscalía ha documentado 72 casos de esas lesiones oculares.

6. 531 personas fueron detenidas en medio de las protestas y llevadas en secreto de reclusión sin seguir los procedimientos legales, lo que ha sido calificado como una forma de secuestro por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

7. 384 agresiones de periodistas durante el cubrimiento de las protestas sociales, dentro de las que se encuentran agresiones físicas, amenazas, detenciones ilegales,

8. La criminalización de la protesta incluye 744 casos de judicialización a manifestantes y la acción continuada de persecución a activistas de lo que se conoció como Primera Línea.

9. Este informe incluye hechos de violencia contra 1721 integrantes de la Policía, el daño a más de 2492 bienes públicos, a 2049 bienes privados, la violencia sexual contra una agente de la Policía y el asesinato de dos miembros de la fuerza pública.

El Ministro de Defensa y el propio presidente de la República han reaccionado bruscamente contra el informe y contra el que se refiere a los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 cuando a juicio de Naciones Unidas la acción policial causó 11 muertes de manifestantes en lo que calificó de masacre en Bogotá. Hechos similares de asesinato colectivo de manifestantes ocurrieron en Cali el

30 de abril y primeros días de mayo cuando se masacró a jóvenes y pobladores en Siloé.

En los registros de INDEPAZ se encuentran la masacre de Cali (2021) y la de Bogotá (2021). El general Jorge Luis Vargas Valencia ha dicho que la Policía Nacional no ha dado orden de matar y tampoco de cometer masacres. Pero la cuestión en debate es si el entrenamiento del ESMAD y de otras fuerzas policiales destinadas a reprimir manifestaciones ha sido permisivo con procedimientos que conllevan el riesgo de daño a manifestantes.

Centenares de heridos y muchas decenas de muertos por la brutalidad policial no pueden considerarse hechos aislados de responsabilidad individual ni ajenos a la responsabilidad de los mandos que están al frente de las operaciones, de los mandos superiores y de las autoridades civiles que tienen responsabilidad constitucional y legal de dirigir a la fuerza pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha señalado la conexión entre el abuso de la fuerza contra la protesta social y las políticas y orientaciones que ubican a los manifestantes y realizadores de paros y bloqueos como terroristas que deben ser tratados con tácticas de guerra e incluso como cómplices de grupos armados organizados como el ELN y los residuales post Farc.

La Canciller y Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez ha preferido pronunciarse criticando a Naciones Unidas que avala el informe independiente sobre los hechos de septiembre de 2020, indicando que “se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato”. (MLR,14/12/2021).

En otro comunicado la Canciller pone el énfasis en las medidas de reorganización de la Policía Nacional para evitar que se presenten en el futuro abusos en el uso de la fuerza pública. Para ella son suficientes los correctivos que se han introducido en protocolos y que se pretenden con la ley de reforma a la Policía Nacional. No reconoce sin embargo la responsabilidad institucional por los homicidios, heridos y víctimas de la brutalidad policial.

En esta postura del gobierno no caben las recomendaciones de la CIDH sobre desmilitarización de la Policía ni las propuestas de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de disolver el ESMAD, adscribir la policía al ministerio del Interior y desterrar toda política y discurso que lleva a tratar la protesta como ataque a las instituciones, a la seguridad nacional o como riesgo de infiltración de criminales.



TERCERA PARTE:

ESTADO DE GUERRA
CON LA PROTESTA

POLICIA



Fotografía: Santiago González



Fotografía: Santiago González

Estigmatizar la protesta y ocultar la responsabilidad estatal³⁸

Documento de análisis de las cifras oficiales sobre el Balance del Paro Nacional

Isaboth Cortés

Texto elaborado con los aportes del Observatorio de DDHH y Conflictividades de Indepaz e informes realizados con Temblores ONG y PAIIS Uniandes. De acuerdo con el Balance General del Paro Nacional 2021, emitido por el Ministerio de Defensa y consolidado a partir de las cifras proporcionadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Desde el 28 de abril hasta el 4 de junio, se han registrado de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional 12.478 actividades de manifestación pública distribuidas entre 862 municipios de 32 departamentos y la ciudad de Bogotá. (Ministerio de Defensa, 2021) Estas actividades están categorizadas de la siguiente manera:

- A. 6.328 concentraciones (aglomeraciones de más de 5 personas)
- B. 2.300 marchas (desplazamiento de personas a pie)
- C. 3.190 bloqueos (afectación a ejes viales)
- D. 632 movilizaciones (desplazamiento de personas en vehículos)
- E. 28 asambleas (menos de cinco personas aglomeradas en un lugar)

La violencia homicida en el marco del Paro.

El balance presentado por la Fiscalía General categoriza las siguientes afectaciones a la población civil: fallecimiento de civiles, civiles lesionados, y violencias de género. Hay que señalar que las cifras consolidadas presentadas por esta institución con fecha de corte hasta el 31 de mayo no incluyen información sobre presuntos responsables y se presenta de esta manera:

Civiles fallecidos:

- A. 18 personas relacionadas con las protestas

³⁸ Artículo publicado en Junio 10 de 2021, Bogotá, D.C.

- B. 9 personas que aún están en proceso de verificación
- C. 19 personas que no guardan nexo con las protestas

En contraste, diversas organizaciones, plataformas defensoras de derechos humanos como INDEPAZ, la ONG Temblores, PAIIS Uniandes y la campaña Defender la Libertad entre otras, han efectuado un consolidado que muestra una muy pronunciada diferencia no solo porcentual, sino también categórica con respecto a las cifras oficiales. Es así, como en el informe elaborado en conjunto por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, la ONG Temblores y el Programa de Acción Integral por la Igualdad y la Inclusión Social- PAIIS de la Universidad de los Andes sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la Fuerza Pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y al 31 de mayo de 2021 se reportan 75 personas víctimas de violencia homicida en el Paro Nacional, de las cuales 47 serían con presunta autoría de la Fuerza Pública.

En el informe presentado por Temblores ONG, PAIIS Uniandes e INDEPAZ a la CIDH el 8 de junio, se indica que, de los 75 homicidios en el marco del Paro Nacional, en 31 casos están suficientemente documentada la responsabilidad de agentes de la Policía Nacional, en otros 10 hay claros indicios de responsabilidad de agentes del ESMAD o de otros cuerpos de la Fuerza Pública y en 34 casos la autoría directa no está identificada. Se cuenta además con 6 casos de homicidios de personas aún no identificadas³⁹.



39 Ver lista completa en: www.indepaz.org.co

40 Cuadro resumen general cifras consolidadas del 28 de abril al 04 de junio de 2021 por Temblores ONG, PAIIS Uniandes e INDEPAZ.

Por su parte, la Campaña defender la libertad integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, en su Boletín informativo número 17 sobre el Paro Nacional habla de 77 personas víctimas de homicidio, presuntamente asesinadas por agentes de la Fuerza Pública y por civiles sin identificar⁴¹, estas cifras con fecha de corte al 04 de junio⁴².

El gobierno esconde los homicidios diciendo que muchos son en realidad por fuera de Paro

Es imperante evidenciar que, el uso de expresiones tales como “fallecidos civiles” para referirse al asesinato de personas en el marco de las jornadas de protestas, connota una intención de matizar discursivamente la gravedad de los hechos e incluso negar lo ocurrido, tal y como lo vienen haciendo el Presidente de la República y altos funcionarios del gobierno nacional. Sólo para citar un evento, vale recordar que el pasado 29 de mayo, el ministro de justicia Wilson Ruíz Orejuela afirmó en entrevista para el medio internacional Vice News que:

Decir que los muertos que ha habido son exactamente como consecuencia del paro nacional es totalmente falso” (...) “muchos muertos no han sido por consecuencia del paro que ha habido. Son hechos aislados que se presentan por riñas callejeras, por intento de hurto, de robo, etcétera, y también hay muertos por otros diferentes sectores (Ruíz, 2021).

Contra la anterior afirmación están los registros hechos por varias organizaciones, entre estas INDEPAZ y Temblores ONG en los cuales se detalla la responsabilidad de agentes de la Fuerza Pública, en especial de miembros de la Policía Nacional. El gobierno y la Fiscalía quieren limitar los casos de homicidio a los que han tenido registros incontrovertibles en medio de las movilizaciones,

41 Indepaz y Temblores ONG han recopilado material en video enviado por distintas organizaciones y ciudadanos que dan cuenta de civiles armados con armas de fuego e incluso armas largas principalmente en el sur occidente colombiano, atacando a los manifestantes y disparando indiscriminadamente en aquiescencia con la fuerza pública.

42 Cifra consolidada por la campaña Defender la Libertad en su boletín informativo # 17, en este se aclara que 34 se le atribuyen a la fuerza pública y los restantes se atribuyen a civiles sin identificar. <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-17-paronacional/>

pero desconocer aquellos que se han realizado en zonas aledañas por acciones represivas de la Fuerza Pública, en la ocupación de barrios, asedio a jóvenes cerca de los puntos de concentración o en las operaciones nocturnas en las comunas o barrios; también quiere ocultar la responsabilidad por omisión y complicidad ante la presencia homicida de particulares armados que actúan como supuesto refuerzo a las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, en la lista entregada a la CIDH el pasado 08 de junio de 2021 se destacan los casos de jóvenes asesinados y se presenta la lista completa indicando los nombres, lugar, fecha, presunta responsabilidad⁴³.

Estigmatización con la llamada infiltración de criminales en la protesta

De otra parte, el presidente de la república ha dicho públicamente que las acciones violentas que se han desatado en el paro obedecen a una intervención e infiltración de grupos armados organizados al margen de la ley, que impulsan acciones con el fin de desestabilizar al gobierno. En distintas declaraciones el presidente Iván Duque Márquez ha hablado de terrorismo urbano de baja intensidad, de hechos vandálicos de carácter sistemático y organizados por infiltrados de los grupos armados e incluso ha afirmado que fuentes de inteligencia han informado sobre financiamiento de las disidencias de las FARC a dichos actos terroristas (Revista semana , 2021).

Así lo afirmó este jueves el Presidente Iván Duque Márquez durante una entrevista con La W Radio, en la que valoró las expresiones pacíficas, pero condenó de manera contundente los actos de violencia y de vandalismo que ocurrieron en la jornada del paro nacional del miércoles.

De hecho, el Jefe de Estado dijo que “estos son actos de violencia que están orquestados y que estaban, además, orientados a generar una afectación a sectores específicos y a generar zozobra”.

“Yo creo que estamos ante fenómenos claros de terrorismo de baja intensidad, como se le llama en algunos lugares de Europa y, como tal, tenemos que seguir avanzando

43 Ibidem.

para dismantelar esas estructuras y que haya sanciones ejemplarizantes”, enfatizó el Mandatario (Presidencia de la República, 2021).

El presidente Iván Duque ha acuñado la calificación de terrorismo de baja intensidad para cubrir bajo una misma calificación la supuesta infiltración de la protesta por parte de grupos armados, el llamado vandalismo y los bloqueos.

“Hemos visto en Cali, en los últimos dos días, hechos vandálicos sistemáticos, eso es vandalismo criminal dirigido a afectar ciertas estructuras y a generar desorden con bloqueo de vías”, aseguró el mandatario en entrevista con Luis Carlos Vélez en La FM. (Semana, 2021)

En el mismo sentido el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, informó públicamente el pasado 25 de mayo, sobre la captura de 13 presuntos integrantes de estructuras criminales organizadas que promueven actos de vandalismo y otras acciones violentas en el marco del paro, específicamente en el suroccidente del país. Entre estas personas presuntamente se habrían capturado integrantes de la red urbana de la segunda Marquetalia, de las disidencias “Carlos Patiño” y la “Dagoberto Ramos” que serían las responsables de los bloqueos y los ataques contra la Fuerza Pública. En el comunicado de la Fiscalía se lee:

La Fiscalía General de la Nación sigue poniendo en evidencia a las estructuras de crimen organizado que sabotean la protesta social y auspician hechos de violencia. En cuatro procedimientos distintos fueron capturadas 13 personas señaladas de participar en diferentes actividades ilícitas ocurridas durante el último mes en el suroccidente del país. (Fiscalía General de la Nación, 2021)

El ente de investigación y el gobierno han pretendido presentar el decomiso de armas a particulares en las semanas de mayo como si fueran parte de la presencia de grupos disidentes o subversivos en las movilizaciones y puntos de resistencia. Así se evidencia nuevamente en las declaraciones del ministro de Defensa refiriéndose al operativo conjunto entre la Dirección de Investigación

Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional - Dijín y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos – ICE, por sus siglas en inglés, que de acuerdo con la Fiscalía General permitió desarticular una red de tráfico de armas denominada Diamante, con la captura de 25 de sus presuntos integrantes. Así lo registró la revista Semana:

El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que las capturas se llevaron a cabo, luego de 29 diligencias de allanamiento en Bogotá, Medellín, Cali y Buga. “Seguiremos desarticulando la delincuencia común, a los grupos armados organizados, y a todos que alteran el orden público en el país. Como resultado del trabajo investigativo y mediante controles técnicos se logró, en articulación entre la Policía y la Fiscalía, la captura de 25 de los patrocinadores de hechos de violencia en los últimos días”, explicó.

Además, dijo que se trata de “delincuencia común organizada que tiene influencia criminal en Cali” y afirmó que “a modo de outsourcing abastecían con armas de fuego, artefactos explosivos, a los protagonistas de los últimos desmanes contra ciudadanos, manifestantes, bienes públicos, y las Infraestructuras en la ciudad, lo mismo que ataques a la fuerza pública”. (Semana, 2021)

Sin embargo, en el mismo boletín 39246 emitido por Fiscalía General el 21 de mayo, se encuentra que la estructura criminal venía delinquiriendo desde abril de 2019, trayendo armamento de Estados Unidos y posteriormente lo distribuía a grupos armados ilegales u oficinas de cobro, en diferentes ciudades del país. (Fiscalía General de la Nación, 2021)

El más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de INDEPAZ sobre PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA, aporta elementos suficientes para sustentar que los resultados operacionales de la Fiscalía han sido calificados de manera descontextualizada, para intentar sostener la tesis de la infiltración de grupos disidentes o subversivos en las movilizaciones. Aserciones que han sido descalificadas en repetidas oportunidades por Camilo González Posso, comisionado civil para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y director de INDEPAZ.

En esa misma línea estigmatizante refiriéndose a los hechos ocurridos en Popayán, el ministro de defensa Diego Molano Aponte señaló como responsables del incendio de una Unidad de Respuesta Inmediata -URI, así como de un supuesto hurto de 51 fusiles a cuatro personas que identificó a través de sus “alias”. Dichas declaraciones fueron rechazadas y desmentidas casi de manera inmediata por distintas organizaciones como INDEPAZ, e incluso las mismas autoridades administrativas regionales, el gobernador del Cauca Elías Larrahondo Carabalí y el alcalde de Popayán cuando de manera pública y contundente descalificaron las acusaciones ya que los “alias” señalados por el ministro en realidad correspondían a los seudónimos de líderes sociales y defensores de derechos humanos descastados en la región. (Indobae, 2021)

Es evidente que en todos estos casos se ha intentado un montaje para estigmatizar la protesta. Pues no hay ninguna prueba ni indicio de conexión entre las detenciones de integrantes de redes del ELN o disidencias con las acciones de protesta; no hay prueba alguna que muestre a los sujetos detenidos usando armas en medio de las movilizaciones o en los actos de violencia que se han producido con ataque a bienes públicos y privados.

Además, el gobierno no puede desconocer que los bloqueos de vías en casi todos los departamentos del país han sido realizados por personas sin armas, que no se ha tenido registro de grupos armados disparando desde los puntos de resistencia, concentración en contra de la Fuerza Pública ni de persona alguna.

Este montaje para descalificar la protesta y los puntos de resistencia también queda desvirtuado con las mismas cifras institucionales que evidencian que las acciones violentas contra de la Fuerza Pública, no corresponden con acciones armadas típicas de las estructuras de crimen organizado. Es así como por ejemplo del balance del Ministerio de Defensa se extrae:

Afectaciones a la Policía Nacional,

- A. 2 uniformados fallecidos;
- B. 1.253 uniformados lesionados;
- C. 11 secuestrados (secuestro simple art 168 CPC) y/o retenidos en el Valle del Cauca .

Entre los dos casos de los uniformados fallecidos se encuentran el capitán Jesús

Alberto Solano Beltrán de 34 años asesinado con arma blanca el día 28 de abril en el municipio de Soacha. El uniformado iba vestido de civil e infiltrado en las manifestaciones (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2021), en medio de estos hechos una turba de personas lo persigue por 10 cuadras y se produce el asesinato (El Tiempo, 2021). Como resultado de las investigaciones realizadas por la fiscalía, 3 jóvenes resultan judicializados. Sin embargo, los abogados defensores han denunciado serias irregularidades en el proceso como la falta de independencia judicial y garantías, así como pruebas incriminatorias e insuficientes para determinar la responsabilidad de estas personas, todo ello lleva al CAJAR a concluir que se afronta un montaje judicial. También se tiene registro del asesinato del policía Juan Sebastián Bríñez de 21 años, quien hacía parte del Escuadrón móvil de carabineros de la Policía y fue atacado con arma de fuego recibiendo un disparo en el Tórax en hechos ocurridos el 22 de mayo en el sector de Calipso en Cali acontecimiento que se desarrolló en medio de saqueos a uno de los almacenes de la zona. (CNN en Español, 2021)

Aunque las cifras oficiales no hacen mención al respecto, es necesario destacar que un tercer agente del Estado fue asesinado, en un linchamiento criminal que se desató después de que este disparara a quema ropa y asesinara a dos jóvenes que estaban en un punto de control en Cali, en Puerto Resistencia.

Según el Fiscal General:

Fredy Bermúdez Ortiz, hoy muerto en estos mismos hechos, era un funcionario adscrito al CTI, quien de acuerdo con la información recopilada hasta este momento disparó hacia varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles. Debe indicarse que este funcionario ingresó en el año 2012 a la institución y que en el momento de los hechos no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función, porque estaba de descanso” (El Espectador, 2021)

Ni esta trágica y dolorosa situación, ni las de los dos policías asesinados anteriormente indicados se pueden presentar como casos de infiltración de grupos armados ilegales, ni como muestra de grupos armados en los bloqueos o mucho menos como patrón sistemático de vandalismo armado en medio de la protesta.

Del total de lesionados reportados en el informe de la policía hasta el 4 de junio, no hay una clasificación por tipo de lesiones, ni información sobre los dictámenes efectuados por Medicina Legal o los centros hospitalarios que atendieron a los uniformados; solo se señala que para dicha fecha 3 policías continuaban hospitalizados.

Otras graves violaciones contra los derechos humanos de la población civil manifestante.

No se puede negar la gravedad de distintas agresiones que se han conocido, realizadas con bombas incendiarias, entre otras modalidades. En esta categoría se encuentran los incendios de Centro de Atención Inmediata de la Policía y de la URI en Popayán. Las organizaciones y puntos de resistencia han rechazado estas acciones violentas que se han dado en el marco de confrontaciones con el ESMAD, en reacciones de ira, rabia y odio de algunos manifestantes por los asesinatos y atentados a la vida que ha caracterizado la represión policial. Los incendios de la Alcaldía de Jamundí, el parqueadero de motos en Popayán y el Palacio de Justicia de Tuluá, según la primera hipótesis de testigos en terreno, han sido situaciones criminales cometidas por personas que aprovecharon la situación de protesta y de enfrentamientos para realizar planes particulares delictivos ajenos al movimiento social.

La lectura en conjunto de los datos, proporcionados por el Ministerio de Defensa evidencia que la información suministrada no es transparente y se encuentra orientada a justificar la respuesta desproporcionada, así como el uso excesivo de la fuerza en las acciones de intervención a las protestas sociales. Buscando, además disminuir la gravedad de las afectaciones mostrando a las víctimas civiles como resultado de la respuesta defensiva por parte de los miembros de la Fuerza Pública ante los ataques de los manifestantes.

Según información de la Policía Nacional con corte a 4 de junio: 1.106 personas han resultado lesionadas en el marco del paro nacional, distribuidas en las ciudades de Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Pereira, Tuluá, Cartago y Yumbo y otros municipios del Valle del Cauca. No

se hace referencia al tipo de afectaciones en específico, es decir mutilaciones, heridas oculares, entre otras, tampoco del número de personas afectadas por ciudad.

En contraposición, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil como INDEPAZ, la ONG Temblores y PAIIS Uniandes se han referido a otras graves violaciones a los derechos humanos. Conforme a estas organizaciones entre el 28 de abril al 31 de mayo de 2021 se han presentado:

- A. 1.248 víctimas de violencia física;
- B. 1.649 detenciones arbitrarias;
- C. 705 intervenciones violentas de la Fuerza Pública;
- D. 65 víctimas de heridas oculares;

Por su parte, la Campaña Defender la Libertad reporta al 4 de junio:

- A. 1.246 personas heridas;
- B. 74 por lesiones oculares;
- C. 87 por armas de fuego;
- D. aproximadamente 158 casos de agresiones a defensores de derechos humanos (Defender la Libertad, 2021).

Violencia sexual y violencias de género

De manera complementaria, la Policía Nacional informó con corte a 2 de junio 9 casos de violencia de género en el marco de las jornadas de manifestación, de los cuales 1 corresponde es funcionaria de la Policía. Al respecto, INDEPAZ, Temblores ONG y PAIIS Uniandes hasta el 31 de mayo han tenido conocimiento de 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de otras violencias violencia basadas en género. La Campaña Defender la Libertad advierte en su boletín Informativo 17: #ParoNacional, una cifra bastante alarmante y de igual forma a las cifras de las 3 primeras organizaciones, exponencialmente distante de las que reporta el balance del Ministerio de Defensa. En el citado boletín se indica que:

106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la

misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 27 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 11 casos de agresiones sexuales, que incluyen abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 3 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres. (Defender la Libertad, 2021)

Esta campaña y otras organizaciones como Temblores e INDEPAZ, han insistido en que los hechos que se han presentado en el marco de la protesta social son muestra de que

para las mujeres y las diversidades de género existe un riesgo diferenciado debido a las condiciones estructurales de este tipo de violencias arraigadas en nuestra sociedad. Los principales responsables de las de victimizaciones han sido en este contexto los miembros de la fuerza pública, siendo los casos más alarmantes el abuso y acoso sexual, las detenciones arbitrarias y la no separación en el marco de las detenciones de acuerdo con la identidad de género, lo cual incrementa el riesgo de tocamientos indebidos, manoseos y otras violencias sexuales. (Farfán, 2021)

Para ilustrar cómo se han implementado estas modalidades de violencia en algunos de los casos que se han logrado conocer o que han sido denunciados públicamente, es preciso mencionar los siguientes sucesos:

- INDEPAZ, Temblores ONG y PAIIS Uniandes en su más reciente informe, exponen el Caso ocurrido el 2 de mayo en las manifestaciones desarrolladas en Palmira, Valle del Cauca, en el que dos mujeres que relatan haber estado apoyando a los integrantes de la primera línea haciendo entrega de leche para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos usados por la fuerza pública, fueron retenidas por agentes de la policía, agredidas física y verbalmente y sometidas a tocamientos indebidos y abusivos en el procedimiento

de registro sobre sus cuerpos. Luego fueron trasladadas a un peaje donde las retuvieron de manera irregular en una habitación y en el lugar varios uniformados aprovecharon para agredirlas mediante el uso de miradas lascivas y actos como la exhibición de los genitales con el pretexto de que hacían uso del baño cercano a la habitación donde ellas se encontraban. El informe también denuncia otros actos de tortura y advierte que la denuncia penal tuvo que ser remitida a la fiscalía en por lo menos 3 oportunidades lo cual debe ser examinado como una negligencia de la entidad para impulsar el proceso. (Temblores ONG, Indepaz y Paiis, 2021)

- El de la adolescente Alison Meléndez, una joven de 17 años que se suicidó tras haber sido víctima de abusos por parte 6 agentes del ESMAD durante las protestas del 12 de mayo en Popayán. Las agresiones que fueron perpetradas en contra de la menor fueron negadas públicamente y tachadas de falsedad por el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante de la Región 4 de la Policía. (El Espectador, 2021)

Las afirmaciones del general fueron refutadas por la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, la Red por la vida y los Derechos Humanos del Cauca y otras organizaciones del Cauca. (Pazcondignidad, 2021)

A su vez, la abogada representante de víctimas del caso Lizeth Montero, expresó que

“la violencia sexual y la violencia basada en género, no se configuran única y exclusivamente cuando hay acceso carnal violento. Los tocamientos indebidos, las insinuaciones, las palabras de contenido sexual o cualquier otra actividad que haga sentir a una mujer violentada en su integridad sexual constituye violencia sexual” (Montero, 2021).

- El caso de la joven de 18 años Junto en Popayán, que denunció haber sido víctima de agresiones de contenido sexual por parte de agentes del ESMAD que amenazaron con violarla y la agredieron físicamente. (Indobae, 2021)

- El caso de tres jóvenes entre los 18 y 22 años de edad que fueron detenidos en el marco de las movilizaciones del 21 y 22 de mayo en la ciudad de Barranquilla, las víctimas fueron agredidas estando bajo custodia de la policía en la estación de Soledad y aunque las agresiones no les son atribuidas directamente a los agentes de policía, si se les acusa no solo haber permitido los vejámenes a los que fueron sometidos, sino también de haber ordenado a los reclusos que les agredieran sexualmente:

el patrullero que nos recibió entró a las celdas y empezó a alentar a los presos diciendo que había llegado carne fresca”. A renglón seguido en la denuncia aseguran que ese mismo uniformado comenzó a gritar: “aquí están pa’ que los violen, estos son los tira piedra” (El Espectador, 2021) .

Las denuncias de este caso también denotan el riesgo diferenciado al que se encuentran expuestas las personas con identidad de género diversa pues se expone dentro de los hechos, que, en particular, una de las víctimas fue sometida a mayores abusos debido a su orientación sexual. Y más allá de este punto, todos los casos citados, alertan sobre el uso de este tipo de violencias específicamente como una forma de aleccionamiento y tortura por parte de los agentes del Estado, en razón a la actividad de protesta y participación en la movilización social de las víctimas.

Investigación e impunidad en presuntas faltas disciplinarias

Ahora bien, sobre las Investigaciones por presuntas faltas disciplinarias a miembros de la policía, el balance del Ministerio de Defensa reporta que se han abierto:

- A. 178 investigaciones, de las cuales 87 son por abuso de autoridad;
- B. 13 por homicidio;
- C. 32 por agresiones físicas, 19 por lesiones personales, 2 por acoso sexual;
- D. 25 por otras conductas, estas últimas no se especifican claramente en el informe (Ministerio de Defensa , 2021).

Sin embargo, respecto de las instancias de estas investigaciones hay una

disparidad evidente ya que a renglón seguido el balance indica que se han abierto tan solo 127 expedientes contra integrantes de la fuerza pública en la Procuraduría General, de los cuales tan solo 3 son investigaciones disciplinarias y 124 corresponden a indagaciones preliminares. De estas últimas, 106 indagaciones han sido adelantadas por las procuradurías regionales y provinciales, 21 las adelanta la Procuraduría General, en ejercicio del poder preferente, y finalmente, 34 casos son investigados por la justicia penal militar. Hasta la fecha de elaboración de este análisis solamente se conoce de un caso en el cual la Fiscalía ha propuesto conflicto entre jurisdicciones para mantener la investigación en cabeza de la justicia ordinaria⁴⁴.

De otra parte, se mencionan 160 personas sobre las cuales ya se realizó imputación de cargos y se han dictado 49 medidas de aseguramiento, los delitos que se persiguen tampoco son señalados en el balance. Llama la atención que pese a que el balance indica que hay 278 casos en lo que denominan “investigación priorizada” de personas que figuran como víctimas de lesiones personales y abuso de autoridad, las investigaciones formales en la Procuraduría sean solo 3 como ya se mencionó.

De cara a este punto es necesario evidenciar nuevamente las profundas distancias entre las cifras de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil; esta constante, que va más allá de ser una simple discordancia en la información, debe ser examinada como evidencia de los mecanismos para mantener la impunidad frente a las graves violaciones y afectaciones a los derechos humanos que se han generado en el marco de las acciones represivas por parte de la fuerza pública y contra de los manifestantes.

Al respecto, INDEPAZ, la ONG Temblores y PAIIS Uniandes han registrado 3789 casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Así mismo, la Campaña Defender la Libertad expone en el citado boletín número 17 que posee un registro de 1304 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

Además, las organizaciones y colectivos han advertido que hay una pérdida
⁴⁴ Respecto del caso de un joven de 19 años que de acuerdo con el comunicado de prensa murió por impacto de proyectil de arma de fuego disparado por miembros de la policía nacional en hechos ocurridos el 01 de mayo https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1392092036950597633.

de credibilidad en los procesos que adelantan las instituciones frente a la investigación, juzgamiento y sanción, por lo que las víctimas se abstienen de acudir a las autoridades en algunos de los casos. Entre muchas otras razones se expone la falta de independencia y garantías en los procesos, pues como ya se ha señalado, muchas de las víctimas reciben amenazas posteriores a la interposición de las denuncias.

De otra parte, no hay que dejar de lado el hecho de que los discursos institucionales que califican de manera generalizada a las violencias que se desatan en las manifestaciones como acciones vandálicas provenientes de grupos armados organizados son considerados como una forma de estigmatización a la protesta y a las personas que participan en ellas.

La desaparición forzada y la situación de las personas retenidas y confinadas en secreto y en sitios desconocidos

Abordando la situación de las personas que han sido reportadas como desaparecidas, el balance del Ministerio de Defensa indica que se ha aplicado el mecanismo de búsqueda urgente – MBU en por lo menos 419 casos, de los cuales 111 aún se encuentran activos y 308 se reportan como personas ubicadas. (Ministerio de Defensa , 2021)

Sin embargo, la Fiscalía a la vez revela que solo hay 3 denuncias por desaparición. Destaca para el análisis de este punto del balance, el hecho de que no se reporta ninguna información sobre las circunstancias en las que fueron halladas las 308 personas que se registran como ubicadas, tampoco se expone información sobre si se han adelantado acciones institucionales para esclarecer si estas personas fueron víctimas del delito de desaparición forzada. Esto último partiendo de la premisa de que el hecho de que aparezca una persona no implica que el delito no se haya configurado y que tal como lo han advertido las organizaciones defensoras de derechos humanos la desaparición forzada es también en muchas ocasiones la antesala para la ejecución de otras graves violaciones a los derechos humanos.

Cabe mencionar que el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, en

sus declaraciones sobre el tema, se ha empeñado en sostener que no hay un fenómeno de desaparición forzada sino lo que han denominado “Situación de no localización” (Fiscalía General de la Nación, 2021).

Al respecto Alberto Yepes coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – Coeuropa, expresó en entrevista para el Tiempo:

En este ambiente de negacionismo los organismos de control están esmerados en ocultar la realidad de la desaparición, ni siquiera nombrarla, porque sabemos la carga emotiva que conlleva y la gravedad normativa de que se estén dando desapariciones forzadas en un país. Entonces prefieren acudir a un eufemismo que es “personas no localizadas” como si fueran simplemente personas que no están en un radar o cuya ubicación topográfica es desconocida. Como si no hubiera detrás de eso un delito, como si fueran personas que no quieren reportarse o registrarse de manera voluntaria, no se quiere demostrar que detrás de eso hubo una participación previa en un acto de protesta, que generalmente fue disuelta y hubo personas detenidas y luego no aparecen. Ahí hay un delito. (El Tiempo, 2021)

Así el 31 de mayo, la fiscalía general publicó el boletín 39360, en el cual informa que la mesa de trabajo interinstitucional compuesta por la Fiscalía y Defensoría del Pueblo consolidó los reportes recibidos desde el 28 de abril al 30 de mayo “frente a las denuncias relacionadas con personas no localizadas o fallecidas en desarrollo de las manifestaciones violentas en el país”. En este boletín se refieren a las cifras anteriormente citadas e indican que, sobre las 3 denuncias por presunta desaparición forzada, éstas se encuentran relacionadas con hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia) y el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca) (Fiscalía General de la Nación, 2021).

Sobre este punto, se hace necesario recordar que INDEPAZ y la ONG Temblores han logrado consolidar a partir de información proporcionada por la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones defensoras como la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano, Francisco Isaías Cifuentes -RedDhFic y otras organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, entre otras fuentes, un listado de 346 nombres de personas que fueron reportadas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2021. Dicho listado

fue aportado formalmente por INDEPAZ a las autoridades competentes través de un derecho de petición dirigido con carácter urgente a la Defensoría del pueblo y a la Fiscalía General el día 26 de mayo, con el objetivo de contribuir a la búsqueda efectiva de estas personas y al esclarecimiento de lo ocurrido (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz, 2021).

Sin embargo, a la fecha de elaboración de este análisis INDEPAZ solo ha recibido respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo. Mediante comunicación de fecha 09 de junio de 2021 en la que la entidad indica lo siguiente:

Respecto de su solicitud del listado aportado por ustedes referente a las 346 personas presuntamente desaparecidas, se realizó el cruce de las bases de datos de la Defensoría del Pueblo, de las cuales de 171 personas no se tenía conocimiento por parte de nuestra entidad, y las cuales fueron reportadas en la Mesa Interinstitucional de Información en el marco de la protesta social. Así mismo, de las 175 personas del listado, ya se encontraban en el listado de la Defensoría y se informa lo adelantado frente a cada caso, se adjunta cuadro adjunto en Excel. (Defensoría del Pueblo Respuesta N° 2021035295 , 2021).

El Investigador y coordinador del Observatorio de Derechos humanos y Conflictividades Leonardo González Perafán afirma que, luego de haber efectuado la revisión de los datos del archivo digital anexo en la citada respuesta. Se puede extraer en primer lugar, que de los 175 registros coincidentes entre el listado aportado por INDEPAZ y el entregado por la Defensoría, hay 57 personas que fueron localizadas, 42 personas aún no han sido localizadas, 14 se encuentran por confirmar y 62 corresponden a casos que califican como “infundados”. En segundo lugar, hay un dato que evidencia la relevancia de hacer registros autónomos frente a las posibles violaciones a los derechos humanos, ya que como indica la entidad 171 de los casos aportados por INDEPAZ eran datos de los cuales no tenían conocimiento. En consecuencia, deberían ser incluidos en la labor de la “mesa de coordinación interinstitucional en el marco de la protesta social” y en el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).

En relación con los casos calificados como “Infundados” es importante destacar que, de acuerdo con la respuesta de la Defensoría⁴⁵, hasta el 04 de junio 45 de homicidios y personas no localizadas que se han presentado durante las manifestaciones. Esta Mesa está conformada por un equipo de fiscales y policía judicial del CTI, la DIJIN y la SIJIN de la Policía Nacional, coordinado por un fiscal adscrito a la Dirección Nacional del Cuerpo

la Fiscalía ha enmarcado 153 casos dentro de esta categoría, por carecer de mínimos presupuestos que permitan continuar la verificación y/o orientar la búsqueda.

De acuerdo con lo anterior, y gracias al trabajo conjunto que se ha venido adelantando en el espacio precitado, se ha logrado la ubicación de 328 personas a la fecha del 4 de junio de 2021 (localizados vivos 196 y 132 registros duplicados); asimismo, se mantiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) activo para 91 casos. Por otro parte, la Fiscalía General de la Nación ha encontrado como infundados 153 registros, por carecer de mínimos presupuestos que permitan continuar con la verificación y/o que orienten la búsqueda.

La anterior calificación usada por la Fiscalía remite ineludiblemente a algunas preguntas:

1. Sí la labor de verificación se ha dado en el marco de una mesa interinstitucional que tiene “el propósito de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y personas no localizadas que se han presentado durante las manifestaciones” y no en el marco de una investigación judicial formalmente hablando ¿Cuáles son los presupuestos mínimos que usan para dicha verificación y la orientación de las búsquedas?
2. Usar el término “Casos infundados” para calificar estas situaciones ¿es coherente con la sustentación que entrega la Fiscalía respecto de la carencia de presupuestos?
3. O por el contrario ¿estamos en presencia de un eufemismo que comporta una tendencia a la impunidad? como ya ha ocurrido frente a otras situaciones de graves violaciones a los derechos humanos en los que el gobierno y la fiscalía han usado la categoría por ejemplo “homicidios colectivos” para referirse a las masacres.

Frente a este aspecto en la ya citada entrevista para el Tiempo, Alberto Yepes de la Coeuropa alerta de uno de los elementos en los cuales estaría fundado este eufemismo:

Nosotros tenemos casos en los que la persona, cuando se la iban a llevar, solo alcanzó gritar: “me llamo Julián” y no alcanzó a decir su nombre completo o dar su número

Técnico de Investigación, tendiente a recaudar material probatorio que permita esclarecer los hechos reportados. Ver Radicado: 20210030201961431 del 09 de junio de 2021.

de cédula. Entonces nosotros sólo alcanzamos a reportar que se llevaron a Julián de camisa blanca y bluyín azul. ¿Y qué dice la Fiscalía? Que no puede investigar porque tiene información insuficiente, entonces inadmite esos casos y los declara infundados. Por esa razón nuestros datos son mucho más elevados que los datos que tiene la Fiscalía, porque ellos no están investigando, se conforman con el listado de las personas que son puestas en libertad que le proporciona la Policía, pero ni siquiera cuando la persona es puesta en libertad se ocupa de investigar en qué condiciones fueron detenidas, cuánto tiempo transcurrió entre el momento de la captura y el momento de la liberación. (El Espectador, 2021)

A este grave fenómeno de personas presuntamente desaparecidas, se suma la peligrosa situación que ha sido denunciada por las comunidades, distintas organizaciones de derechos humanos y misiones de verificación como la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en el departamento del Valle del Cauca, sobre la presunta utilización de sitios de detención clandestinos o lugares no convencionales a donde son llevadas las personas retenidas por los agentes de la Fuerza Pública (Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos , 2021).

Las organizaciones han alertado sobre las graves violaciones a los derechos humanos y los escabrosos hechos que han rodeado la permanencia de las personas que son trasladadas a estos lugares de detención irregular. Entre las violaciones se presentan asesinatos, sometimientos a torturas y tratos crueles, la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre las personas a los familiares, a los defensores de derechos humanos y a los medios de comunicación. Sobre este tema se destacan los acontecimientos ocurridos en el almacén Éxito en la zona de Calipso y en el establecimiento Dollar City en Siloé, este último donde apareció calcinado un adolescente de 16 años de edad, que presuntamente había sido detenido de manera arbitraria, sometido a tortura y trasladado por agentes de la policía hasta este lugar donde apareció muerto (El Espectador, 2021).

No concuerdan los datos operacionales y de investigación judicial

Finalmente, es pertinente exponer que, de acuerdo con el balance del Ministerio de Defensa, de las 12.478 manifestaciones que se han realizado a nivel nacional, 11.063 han sido pacíficas y en 1.415 se han presentado disturbios o afectaciones a la convivencia pacífica, todas ellas con intervención del ESMAD.

En ese contexto la policía reporta como resultados operacionales entre otros:

- A. 1.249 capturas en flagrancia, sin aportar información sobre los delitos que dieron origen a las detenciones.
- B. 71 capturas por requerimiento judicial, sin aportar información sobre los delitos que dieron origen a las mismas.
- C. 69 aprehensiones a menores de edad, sin aportar información sobre los delitos que dieron origen a dichas aprehensiones.
- D. 470 noticias criminales, sin aportar información sobre los delitos que se investigan.

En este escenario y en concordancia con el análisis anteriormente efectuado, queda desvirtuada a partir de las mismas cifras oficiales, la tesis del gobierno nacional con relación a que las acciones violentas en el paro obedecen al maquinario de grupos armados organizados al margen de la ley que, en el marco del conflicto armado interno, realizan acciones que buscan desestabilizar al gobierno.

Hay que señalar que el reporte del Ministerio enlista una serie de elementos como resultados operacionales de la Fuerza Pública, pero no aporta información sobre el contexto en que fueron incautados, es decir, si fueron incautados a personas, a grupos de personas o en allanamientos; entre estos elementos se encuentran 40.747 armas cortopunzantes, 691 armas neumáticas, 1.625 armas de fuego y 207 elementos explosivos.

Los datos anteriormente citados, no aportan ningún elemento concluyente que le permita al gobierno nacional sustentar dicha tesis, ni justificar la escabrosa y desproporcionada respuesta armada que ha venido dándole y que pretende incrementar frente a las protestas sociales. Por el contrario, su aparente discordancia si genera varios cuestionamientos, en clave de esclarecer esta tesis que ha sostenido el gobierno. Por ejemplo, si se habla de 1.625 armas de fuego incautadas, ¿cuántas de estas corresponden a las personas que fueron capturadas en flagrancia? ¿Cuántas de estas armas fueron incautadas en procedimientos de captura por orden judicial y/o en allanamientos? ¿Qué pasa con las armas neumáticas incautadas? ¿Cuántas personas han sido en efecto judicializadas y cuáles son los delitos por los que se les investiga? ¿Cuáles son los 207 tipos

de elementos explosivos? Y para concluir ¿Por qué obran apenas 470 noticias criminales abiertas?

Referencias Bibliográficas

Revista semana . (29 de mayo de 2021). Iván Márquez habría enviado

US\$160.000 para financiar actividades terroristas en el paro. *Revista Semana*. Recuperado el junio de 2021, de <https://www.semana.com/nacion/articulo/ivan-marquez-habria-enviado-us160000-para-financiar-actividades-terroristas-en-el-paro/202104/>

CNN en Español. (23 de mayo de 2021). *cnnespanol.cnn.com*. Recuperado el junio de 2021, de <https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/23/muere-policia-cali-segundo-uniformado-protestas-colombia-orix/>

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (08 de mayo de 2021). *www.colectivodeabogados.org*. Recuperado el junio de 2021, de [www.colectivodeabogados.org](https://www.colectivodeabogados.org/defensa-devela-montaje-judicial-que-desvia-investigacion-por-homicidio-contra-agente-de-la-sijin-en-soacha/): <https://www.colectivodeabogados.org/defensa-devela-montaje-judicial-que-desvia-investigacion-por-homicidio-contra-agente-de-la-sijin-en-soacha/>

Defender la Libertad. (05 de junio de 2021). *defenderlalibertad.com*. Obtenido de [defenderlalibertad.com](https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-17-paronacional/): <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-17-paronacional/>

Defensoría del Pueblo Respuesta N° 2021035295 , N° 2021035295. (Defensoría del Pueblo 09 de junio de 2021).

El Espectador. (28 de mayo de 2021). *www.elespectador.com*. Recuperado el junio de 2021, de [www.elespectador.com](https://www.elespectador.com/judicial/miembro-del-cti-que-disparo-a-civiles-en-cali-no-estaba-en-funciones-fiscal-barbosa/): <https://www.elespectador.com/judicial/miembro-del-cti-que-disparo-a-civiles-en-cali-no-estaba-en-funciones-fiscal-barbosa/>

El Espectador. (14 de mayo de 2021). *www.elespectador.com*. Recuperado el junio de 2021, de [www.elespectador.com](https://www.elespectador.com/judicial/es-una-noticia-falsa-policia-niega-abuso-de-joven-detenido-en-popayan-y-fiscalia-investiga/): <https://www.elespectador.com/judicial/es-una-noticia-falsa-policia-niega-abuso-de-joven-detenido-en-popayan-y-fiscalia-investiga/>

El Espectador. (31 de mayo de 2021). *www.elespectador.com*. Recuperado el junio de 2021, de [www.elespectador.com](https://www.elespectador.com/judicial/paronacional-tres-jovenes-detenidos-en-barranquilla-denuncian-violencia-sexual/): <https://www.elespectador.com/judicial/paronacional-tres-jovenes-detenidos-en-barranquilla-denuncian-violencia-sexual/>

El Espectador. (01 de junio de 2021). *www.elespectador.com*. Obtenido de [www.elespectador.com](https://www.elespectador.com/colombia/cali/al-parecerlo-mataron-antes-de-tirarlo-al-dollar-city-familia-de-joven-que-murio-quemado-en-cali/): <https://www.elespectador.com/colombia/cali/al-parecerlo-mataron-antes-de-tirarlo-al-dollar-city-familia-de-joven-que-murio-quemado-en-cali/>

El Tiempo. (09 de mayo de 2021). *www.eltiempo.com*. Recuperado el junio de 2021, de [www.eltiempo.com](https://www.eltiempo.com/bogota/capitan-solano-quien-era-el-policia-asesinado-en-soacha-587110): <https://www.eltiempo.com/bogota/capitan-solano-quien-era-el-policia-asesinado-en-soacha-587110>

El Tiempo. (31 de mayo de 2021). *www.eltiempo.com*. Obtenido de [www.eltiempo.com](https://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-alberto-yepes-sobre-desapariciones-durante-el-paro-nacional-592123): <https://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-alberto-yepes-sobre-desapariciones-durante-el-paro-nacional-592123>

Farfán, P. (28 de mayo de 2021). Recuperado el junio de 2021, de https://www.facebook.com/watch/live/?v=1200261997104646&ref=watch_permalink

Fiscalía General de la Nación. (01 de mayo de 2021). *twitter.com/FiscaliaCol*. Obtenido de [twitter.com/FiscaliaCol](https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1392092036950597633): <https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1392092036950597633>

Fiscalía General de la Nación. (25 de mayo de 2021). *twitter.com/FiscaliaCol*.

Recuperado el junio de 2021, de twitter.com/FiscaliaCol: <https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1397318325164720128>

Fiscalía General de la Nación. (25 de mayo de 2021). *www.fiscalia.gov.co*. Obtenido de [www.fiscalia.gov.co](https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/golpe-a-las-estructuras-de-crimen-organizado-que-estarian-auspiciando-actos-de-vandalismo-y-otras-acciones-ilicitas-en-el-suroccidente-del-pais/): <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/golpe-a-las-estructuras-de-crimen-organizado-que-estarian-auspiciando-actos-de-vandalismo-y-otras-acciones-ilicitas-en-el-suroccidente-del-pais/>

Fiscalía General de la Nación. (21 de mayo de 2021). *www.fiscalia.gov.co*. Recuperado el junio de 2021, de [www.fiscalia.gov.co](https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/desarticulada-estructura-criminal-dedicada-al-trafico-de-armas-traidas-desde-estados-unidos-para-proveer-a-grupos-armados-ilegales-en-colombia/): <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/desarticulada-estructura-criminal-dedicada-al-trafico-de-armas-traidas-desde-estados-unidos-para-proveer-a-grupos-armados-ilegales-en-colombia/> Fiscalía General de la Nación. (31 de mayo de 2021). *www.fiscalia.gov.co*. Recuperado el junio de 2021, de [www.fiscalia.gov.co](https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/en-el-marco-de-las-manifestaciones-violentas-registradas-en-el-pais-308-personas-han-sido-localizadas-y-se-mantiene-activo-el-mecanismo-de-busqueda-urgente-en-111-casos/): <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/en-el-marco-de-las-manifestaciones-violentas-registradas-en-el-pais-308-personas-han-sido-localizadas-y-se-mantiene-activo-el-mecanismo-de-busqueda-urgente-en-111-casos/>

Infobae. (16 de mayo de 2021). *www.infobae.com*. Recuperado el junio de 2021, de [www.infobae.com](https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/16/gobernador-del-cauca-rechazo-el-anuncio-de-recompensas-por-los-responsables-del-vandalismo-en-popayan/): <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/16/gobernador-del-cauca-rechazo-el-anuncio-de-recompensas-por-los-responsables-del-vandalismo-en-popayan/>

Infobae. (17 de mayo de 2021). *www.infobae.com*. Obtenido de [www.infobae.com](https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/17/a-mi-hija-entre-seis-policias-le-volvieron-trizas-la-dignidad-el-dramatico-relato-de-una-mama-en-popayan/): <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/17/a-mi-hija-entre-seis-policias-le-volvieron-trizas-la-dignidad-el-dramatico-relato-de-una-mama-en-popayan/> Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz. (octubre de 2020). *Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2020*. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz. Obtenido de [www.indepaz.org.co](http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf): <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf>

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz. (15 de mayo de 2021). *www.indepaz.org.co*. Obtenido de [www.indepaz.org.co](http://www.indepaz.org.co/comunicado-indepaz-popayan-15-de-mayo-de-2021/): <http://www.indepaz.org.co/comunicado-indepaz-popayan-15-de-mayo-de-2021/>

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz. (26 de mayo de 2021). *www.indepaz.org.co*. Recuperado el junio de 2021, de [www.indepaz.org.co](http://www.indepaz.org.co/derecho-de-peticion-de-indepaz-sobre-acciones-de-fiscalia-y-defensoria-por-los-desaparecidos-en-el-marco-del-paro-nacional/): <http://www.indepaz.org.co/derecho-de-peticion-de-indepaz-sobre-acciones-de-fiscalia-y-defensoria-por-los-desaparecidos-en-el-marco-del-paro-nacional/>

Ministerio de Defensa . (junio de 2021). *twitter.com/mindefensa/status/1401154960843288579*. Obtenido de twitter.com/mindefensa/status/1401154960843288579: <https://twitter.com/mindefensa/status/1401154960843288579>

Ministerio de Defensa. (05 de junio de 2021). *twitter.com/mindefensa*. Obtenido de [twitter.com/mindefensa](https://twitter.com/mindefensa/status/1401154960843288579): <https://twitter.com/mindefensa/status/1401154960843288579>

Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. (2021). *Informe Preliminar Violación de DDHH en Colombia en el marco del paro nacional 2021*. Recuperado el junio de 2021, de https://www.dropbox.com/s/nb2ynognwekd3s6/INFORME%20PRELIMINAR%20MISION%20COLOMBIA_3J_VERSI%C3%93NFINAL.pdf?dl=0

Montero, L. (24 de mayo de 2021). Recuperado el junio de 2021, de <https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/no-solo-el-acceso-carnal-es-violencia-sexual-abogada-de-familiares-de-alison/20210524/nota/4137477.aspx>

Pazcondignidad. (14 de mayo de 2021). *www.pazcondignidad.org*. Recuperado el junio de 2021, de [www.pazcondignidad.org](https://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-Publico-Ante-las-declaraciones-del-Brigadier-General-Ricardo-Augusto-Alarcon-Campos-actual-comandante-de-la-Region-4-de-la-Policia-Nacional.pdf): <https://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-Publico-Ante-las-declaraciones-del-Brigadier-General-Ricardo-Augusto-Alarcon-Campos-actual-comandante-de-la-Region-4-de-la-Policia-Nacional.pdf>

Presidencia de la República. (29 de abril de 2021). *www.presidencia.gov.co*. Recuperado el junio de 2021, de [www.presidencia.gov.co](https://www.presidencia.gov.co/prensa/valoramos-la-expresion-pacifica-de-la-ciudadania-pero-es-importante-210429): <https://www.presidencia.gov.co/prensa/valoramos-la-expresion-pacifica-de-la-ciudadania-pero-es-importante-210429>

Ruiz, M. d. (29 de mayo de 2021). (r. p. Noriega, Entrevistador) Twitter . Vice. Recuperado el junio de 2021, de <https://twitter.com/drnoriega/status/1398731300266135553>

Semana . (20 de abril de 2021). Duque dice que el vandalismo durante el paro nacional es “terrorismo urbano de baja intensidad”. *Revista Semana* . Recuperado el junio de 2021, de <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-presidente-ivan-duque-dice-que-el-vandalismo-durante-el-paro-nacional-es-terrorismo-urbano-de-baja-intensidad/202158/>

Semana. (20 de mayo de 2021). Capturan a 25 personas por, presuntamente, ser promotores de actos violentos en medio del paro . *Revista Semana*. Obtenido de <https://www.semana.com/nacion/articulo/capturan-a-25-personas-por-presuntamente-ser-promotores-de-actos-violentos-en-medio-del-paro/202140/>

Temblores ONG, Indepaz y Páais. (junio de 2021). *www.indepaz.org.co*. Recuperado el junio de 2021, de [www.indepaz.org.co](http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-indepaz-y-paiis-a-la-cidh/): <http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-indepaz-y-paiis-a-la-cidh/>



Fotografía: Santiago González

La Ley de “seguridad ciudadana” en contra de las garantías ciudadanas⁴⁶.

Isaboth Cortés

En el mes de febrero del presente año organizaciones defensoras de derechos humanos, así como varios congresistas presentaron al menos dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 2197 del 25 de enero de 2022. Los argumentos planteados van desde el hecho de que la ley aborda el problema de seguridad desde un enfoque punitivo y populista, hasta el desconocimiento de las observaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la visita de trabajo en el marco del Paro Nacional del 2021. Lo sustancial del asunto se encuentra en que, contrario a lo que plantea su nombre, la llamada Ley de “Seguridad Ciudadana” lo que fomenta es la afectación de las garantías fundamentales que contempla la constitución, así como los tratados en materia de derechos civiles y políticos suscritos por el Estado colombiano.

La prensa en distintos artículos ha mencionado punto por punto los cargos que atacan las acciones de litigio estratégico adelantadas. Sin embargo, desde una óptica un poco más pedagógica este documento abordará 6 de los asuntos que tratan las disposiciones más controvertidas en la Ley con el objetivo de facilitar la comprensión ciudadana frente a lo que significa en términos más concretos las afectaciones demandadas ante la Corte Constitucional. Para ello se agruparán en las siguientes temáticas:

1. La figura de legítima defensa privilegiada vulnera el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza letal y pone en grave el peligro el derecho a la vida de los ciudadanos;
2. Aumentar el máximo de pena privativa de la libertad atenta contra la garantía de abolición de la pena de muerte;
3. El delito de invasión de tierras criminaliza la ocupación pacífica y desconoce la problemática nacional frente al derecho de acceso a la tierra;

⁴⁶ Artículo realizado en Abril de 2022, Bogotá, D.C.

4. La inclusión del delito de obstrucción de la función pública y el agravante en los casos que se trate de aquella que ejercen las fuerzas militares y de policía, vulnera la garantía al debido proceso;
5. La regulación de las denominadas armas menos letales o de letalidad reducida por parte de los particulares profundiza el problema de la violencia, haciendo aún más distante alcanzar el derecho a la paz de los colombianos;
6. La modificación del procedimiento de traslado por protección legaliza criterios estigmatizantes que atentan contra el debido proceso y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos.

Antes de entrar en materia es importante, precisar dos temas comunes a los 6 asuntos propuestos:

En primer lugar, indicar que cuando se trata de derechos fundamentales estos se caracterizan por su indeterminación normativa (PULIDO, 2007), es decir la imposibilidad de delimitar absolutamente lo que comprende dicha garantía desde el punto de vista semántico en la norma. De allí se entiende el reto que representan y que se evidencia no solo en la necesidad de estar en permanente revisión de las normas que desarrollan estos derechos o garantías fundamentales, apelando al núcleo esencial de los mismos. Sino también a la hora de conceptualizar y hacer pedagogía sobre su contenido y alcance, para lo cual una aliada metodológica clave es la casuística.

En segundo lugar, es necesario indicar que la proporcionalidad es un criterio que se utiliza para darle forma a los elementos que contienen las normas que desarrollan o se refieren a un derecho fundamental y su función es la de garantizar que dichas leyes se justen a las disposiciones constitucionales. En otras palabras, este criterio se usa para efectuar el control constitucional de las normas. (PULIDO, 2007)Dicho esto, se puede empezar a revisar los asuntos propuestos.

¿Legítima defensa privilegiada?

- La figura de legítima defensa privilegiada vulnera el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza letal y pone en grave el peligro el derecho a la vida de los ciudadanos: La legítima defensa es una aplicación condicional y excepcional a la garantía fundamental del derecho a la vida,

una forma de afectación que está contemplada dentro del Artículo 32 del código penal como causal de ausencia de responsabilidad penal. Es decir, la posibilidad de que el Estado no sancione el uso de la fuerza que casusa la muerte, por haberse ejercido bajo la necesidad de defenderse de una agresión injusta actual o inminente.

- La gravedad del **Artículo 3** de la Ley de seguridad ciudadana radica en que este introduce la figura de “legítima defensa privilegiada” para ampliar la causal de exclusión de responsabilidad, permitiendo que las personas puedan reaccionar con fuerza capaz de ocasionar la muerte a otras para defender bienes como sus vehículos, generando así una ponderación errónea del derecho a la propiedad privada, ubicándolo por encima del derecho a la vida y la integridad física.
- En este punto es importante mencionar las agresiones contra indígenas presentadas en la ciudad de Cali en el marco de las protestas del Paro Nacional 2021, más concretamente las ocurridas en la glorieta de ciudad jardín el 09 de marzo, que evidencian lo problemático que puede resultar legitimar normativamente este tipo acciones. No se puede olvidar que uno de los videos que registraron las acciones violentas de ese día y que más impacto causó a la opinión pública, fue en el que se observaba cómo un vehículo Mazda blanco atropella a uno de los indígenas y huye del lugar de los hechos. Disponer de la posibilidad legal para que las personas aludiendo su derecho a defender su propiedad privada o repeler posibles agresiones hagan uso de la fuerza letal, es a todas luces una forma de decirle a la ciudadanía que la vida vale menos que la seguridad de los bienes materiales.

¿Otra cadena perpetua?

- Aumentar el máximo de pena privativa de la libertad atenta contra la garantía de abolición de la pena de muerte: El **Artículo 5** de la Ley que aumenta de 50 a 60 años el máximo de la prisión como medida privativa de la libertad, trae consigo una imposición que puede significar para los sujetos de la acción penal una **cadena perpetua**, como lo advierten los colectivos de abogados defensores de DDHH demandantes, esto va en contra del horizonte

resocializador que debe contemplar la sanción penal y viola la garantía constitucional contra la pena de muerte en Colombia (Defender la Libertad, 2022), así como el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que se encuentra destinado a que todos los Estados partes garanticen acciones para abolir la pena de muerte en su jurisdicción. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas , s.f.)

¿Criminalizar la ocupación de tierras en lugar de dar soluciones sociales?

- El delito de invasión de tierras criminaliza la ocupación pacífica y desconoce la problemática nacional frente al derecho de acceso a la tierra: La ley al crear en su **Artículo 13** el delito de avasallamiento retrocede frente a los desarrollos legales y jurisprudenciales que reconocen la problemática frente al acceso al derecho a la tierra para promover el aprovechamiento y distribución de la riqueza. Por ejemplo, mediante la adjudicación de baldíos, la cual tiene como requisito una ocupación previa por parte del o los solicitantes de la adjudicación.
- En este sentido, la ley de seguridad ciudadana criminaliza la ocupación de hecho y pacífica de bienes inmuebles, en especial aquellos de dominio público y/o patrimonio del Estado y sanciona de manera desproporcionada las acciones de hecho grupales o colectivas. Atentando de manera directa contra la caracterización de la función social de la propiedad privada, que otorgar garantías constitucionales a las formas de propiedad y economía solidaria en reconocimiento de los movimientos cooperativos, así como de aquellos de carácter pluricultural y pluriétnico del país. (Sentencia C-595 , 1999)

¿Poder absoluto a la policía y militares y cárcel a quienes les exigen respeto a sus derechos?

- La inclusión del delito de obstrucción de la función pública y el agravante en

los casos que se trate de aquella que ejercen las fuerzas militares y de policía, vulnera la garantía al debido proceso: En el marco del Paro Nacional 2021, el Artículo 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana o Ley 1801 de 2016, fue usado arbitrariamente en contra de las personas que pretendían impedir o evidenciar alguno de los graves abusos de autoridad y violaciones a los DDHH que fueron claramente señalados en el informe del grupo de trabajo de la CIDH en la visita de verificación realizada. Ahora el **Artículo 20** de la Ley de seguridad ciudadana adiciona al código penal el delito de obstrucción de la función pública e impone una pena 3 a 5 años para quienes impidan la realización de cualquier función pública e incluye un agravante de responsabilidad cuando se trate de la función de las fuerzas militares y de policía. Este delito genera una desproporción frente al poder con el cual se enviste a las autoridades públicas y el derecho que tienen todos los ciudadanos a exigir y verificar que los procedimientos se ajusten a derecho y se cumpla con el debido proceso.

- En síntesis, este artículo de la Ley es un instrumento que hace prácticamente absoluto el poder las autoridades frente a los ciudadanos y más aún cuando se piensa en las posibilidades de su aplicación en conjunto con otras disposiciones de la Ley. Por ejemplo, en el caso de procedimientos que persigan el delito de invasión de tierras, del que se habló en el numeral anterior, pero que vale la pena volver a retomar para mostrar la peligrosidad de la aplicación de esta norma en su conjunto. Recordando que se han presentado varios hechos, que dan cuenta acerca de procedimientos de desalojo realizados por autoridades administrativas, que con el uso del escuadrón antidisturbios han concluido en graves afectaciones a los derechos humanos de los grupos o colectivos de personas que ocupan de hecho.
- *Miembros de la comunidad muestran videos de policías antidisturbios fuertemente armados disparando gas lacrimógeno y destruyendo casas. Algunos de los habitantes que se negaron a salir aún estaban dentro de sus casas cuando comenzaron las demoliciones. Aseguran que la policía birió con proyectiles a los habitantes; los niños están aterrados. Algunos dicen que las autoridades amenazaron con llevar a sus hijos a agencias de servicios sociales si no cooperaban. (The Washington Post, 2020)*

¿Armas letales que pueden matar en contra de la protesta y para justicia privada?

- La regulación de las denominadas armas menos letales o de letalidad reducida por parte de los particulares profundiza el problema de la violencia, haciendo aún más distante alcanzar el derecho a la paz de los colombianos: El título sexto de la Ley, a partir del **Artículo 25** reglamenta la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones para particulares. Sacándolos así del ámbito de uso exclusivo de la fuerza pública. Lo anterior es extremadamente peligroso no solo por lo indiscutiblemente letal que ha resultado el uso de este tipo de armas en personal bien capacitado como los miembros del ESMAD, en casos que hoy enlutan a la ciudadanía, como lo es el caso de Dilan Cruz. Sino porque, deja abierta la posibilidad para que grupos inescrupulosos e incluso los mismos grupos armados organizados al margen de la ley, hagan uso de este tipo de armamento, que en principio estaría legalmente regulado. Este escenario dificulta aún más la tarea del desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, labor que representa uno de los principales retos del Estado Colombiano para lograr la paz, e incrementa la complejidad para atacar el problema de las agresiones contra los líderes asociales, así como el problema de delincuencia común organizada y otras problemáticas violentas.
- Ahora, si se piensa en la posibilidad de que las personas puedan contar con este tipo de armas para hacer uso de la “legítima defensa privilegiada” que contempla como ya se dijo el Artículo 3 de la Ley de seguridad ciudadana. Es pertinente citar por ejemplo los siguientes casos, para mostrar lo inconveniente y altamente peligroso que resulta para la ciudadanía si se da aplicación a esta reglamentación: i) en el marco de las protestas del Paro nacional se presentaron varios hechos en los que personas que argumentaban sentirse en peligro por las protestas o que simplemente estaban en desacuerdo ideológico, salieron a intimidar con armas traumáticas a los manifestantes para que se retiraran de las calles, poniendo en grave peligro la vida e

integridad física de los ciudadanos. ii) Juan Sebastián Martínez un joven de tan solo 18 años, fue gravemente herido con un arma traumática usada por asaltantes que querían despojarlo de su celular; las heridas causadas durante los hechos que se presentaron el 18 de abril del 2021 en el municipio del Rosal en el departamento de Cundinamarca, causaron finalmente su muerte aproximadamente una semana después. (El Tiempo, City Noticias, 2021) iii) En el mes de octubre del 2021, Cristian Alejandro Campos de tan solo 24 años de edad fue herido con arma traumática en medio de un altercado ocurrido en el corregimiento de Guacacallo en municipio de Pitalito en el departamento del Huila. Cristian falleció en el centro asistencial de salud, pues los médicos no pudieron restablecer su condición tras los cinco disparos del arma traumática que recibió en su cabeza y pecho (La Nación, 2021).

¿Traslado por protección a discreción del autoritarismo policial?

- La modificación del procedimiento de traslado por protección legaliza criterios estigmatizantes que atentan contra el debido proceso y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos: La ya polémica figura del traslado protección que se encuentra en el Artículo 155 del Código Nacional de Seguridad, fue utilizada de manera indebida en el marco del Paro Nacional para la realización de detenciones arbitrarias contra los manifestantes, situaciones que fueron ampliamente denunciadas por los colectivos de abogados defensores de DDHH. Ahora, la Ley de seguridad ciudadana, en su **Artículo 40** introduce varias modificaciones que a simple vista pueden parecer más garantistas en términos de los sub - procedimientos que deben acompañar la aplicación de la figura. Sin embargo, al hacer un análisis comparativo de la norma anterior y su modificación, lo que se evidencia es que el nuevo texto deja un margen muy amplio para que los miembros de la fuerza pública hagan aplicación de la figura con una mayor discrecionalidad.
- Pues al eliminar la prohibición expresa que tenía el texto anterior frente al uso del traslado para quienes simplemente estuvieran consumiendo alcohol u otras sustancias, y aludiendo a criterios como la “alteración del

estado de conciencia” o “aparentar estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas, así como exteriorizar comportamientos agresivos o temerarios”. Sumado al hecho de que la nueva norma no hace referencia a los centros de salud u hospitales, que es donde se encuentra el personal capacitado, así como los medios científicos y tecnológicos para establecer si en efecto una persona presenta o no una alteración de la conciencia. La ley de seguridad ciudadana deja un margen muy amplio para el autoritarismo de los funcionarios de policía.

Referencias Bibliográficas

Caracol. (02 de febrero de 2022). caracol.com.co. Recuperado el 28 de febrero de 2022, de caracol.com.co: https://caracol.com.co/radio/2022/02/02/politica/1643835388_601573.html

Colombiacheck. (02 de junio de 2021). Canal Youtube Colombiacheck. Recuperado el 02 de marzo de 2022, de Canal Youtube Colombiacheck: <https://youtu.be/Rs4eD3NHqpM>

Congreso de Colombia. (29 de julio de 2016). www.secretariasenado.gov.co. Recuperado el 02 de marzo de 2022, de www.secretariasenado.gov.co: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html#35

Defender la Libertad. (15 de febrero de 2022). defenderlalibertad.com. Recuperado el 28 de febrero de 2022, de defenderlalibertad.com: <https://defenderlalibertad.com/demanda-de-ley-de-seguridad-ciudadana/>

Defender la Libertad. (15 de febrero de 2022). facebook live. Recuperado el 28 de febrero de 2022, de facebook live: <https://www.facebook.com/DefenderLaLibertad/videos/452002386657506/>

El Tiempo, City Noticias. (27 de abril de 2021). Facebook El Tiempo. Obtenido de Facebook El Tiempo: <https://www.facebook.com/watch/?v=1672036599850783>

La Nación. (05 de octubre de 2021). www.lanacion.com. Recuperado el 03 de marzo de 2022, de www.lanacion.com: <https://www.lanacion.com.co/asesinado-con-un-arma-traumatica-en-pitalito/>

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas . (s.f.). www.ohchr.org. Obtenido de www.ohchr.org: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/second-optional-protocol-international-covenant-civil-and>

PULIDO, C. B. (2007). www.corteidh.or.cr. (C. D. CONSTITUCIONALES, Ed.) Recuperado el 2022, de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/carlosbernal.pdf>

RCN radio. (29 de enero de 2022). www.rcnradio.com. Recuperado el 03 de marzo de 2022, de www.rcnradio.com: <https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/capturan-hombre-que-intimido-con-arma-traumatica-manifestantes-en-medellin>

Sentencia C-595 , Expediente D-2292 (Corte Constitucional Colombiana 18 de agosto de 1999). Recuperado el 02 de marzo de 2022, de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-595-99.htm#:~:text=FUNCION%20SOCIAL%20DE%20LA%20PROPIEDAD&text=La%20funci%C3%B3n%20social%20tiene%2C%20por,de%20ciertas%20clases%20de%20propiedad>

The Washington Post. (08 de junio de 2020). www.washingtonpost.com. (S. Grattan, Editor) Recuperado el 03 de marzo de 2022, de www.washingtonpost.com: <https://www.washingtonpost.com/es/tablet/2020/06/08/autoridades-de-colombia-desalojan-familias-pobres-durante-el-brote-del-coronavirus/>



MEBOG-1

MEBOG-1

15370

POLICE

POLICE



QUIEN DEFIENDE LA
VIDA, NO DEBERIA
PERDERLA
NOS ESTÁN MATANDO!

Las políticas de seguridad como dispositivo legitimador de las actitudes antidemocráticas de los gobiernos de derecha en América Latina: un estudio de casos de Brasil y Colombia⁴⁷

Valeria Quintana

A. Puentes interpretativos entre las políticas de seguridad de Iván Duque y Jair Bolsonaro.

La Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia, Ley 2197 de 2022, que entró en vigencia el 26 de enero, ha evidenciando las preocupantes narrativas que se están dando frente a las manifestaciones legítimas. También, implementa políticas punitivas que podrán ser utilizadas por una institucionalidad que históricamente ha apelado al lenguaje corriente de la violencia, y la represión para relacionarse con ciertos sectores de la población.

El uso del Derecho para legitimar la violencia como forma de reprimir o naturalizar dinámicas de segregación y desigualdad, no es un fenómeno reciente en Colombia. Esto se ve por ejemplo en el estatuto de seguridad de Turbay de 1977, el cual se instauró para hacer frente a lo que se conocería como el primer Paro “real” (Bejarano, 2022).

Sin embargo, las políticas punitivas y su relación con la radicalización de las fuerzas policiales no son exclusivas a Colombia, sino que se presentan en otros países Latinoamericanos. En Brasil, Jair Bolsonaro ha puesto en el epicentro de la agenda de su gobierno los problemas de seguridad pública y un discurso de el “enemigo”. Se trata de un enfoque que resulta discordante con la Constitución de 1988 y los procesos de redemocratización tras la dictadura.

Así, Iván Duque y Jair Bolsonaro han instaurado mandatos de derecha en la región, y han impulsado políticas de seguridad planificadas y metódicas que vulneran las garantías de protección consagradas en los regímenes

47 Artículo realizado en Abril de 2022, Bogotá, D.C.

constitucionales. Colombia y Brasil son países en los que, en las últimas décadas, se ha presentado un fenómeno por el cual prevalece el movimiento pendular entre cambios moderados para reformar la gestión policial, y contrarreformas apoyadas por los modelos policiales que surgen de las narrativas de lucha contra las drogas y la represión social.

B. Colombia: La cortina de humo de la seguridad ciudadana de la Ley 2197 de 2022.

El fetichismo legal como estrategia para mostrar resultados.

La Ley de Seguridad Ciudadana de Iván Duque apela al fetichismo legal. Aumentó penas, coartó libertades e incluso flexibilizó el uso de la legítima defensa con el fin de incrementar su favorabilidad, tanto en los sectores conservadores, como las fuerzas públicas y sus entornos sociales. Aunque intentó venderla como una promesa de paz y convivencia ciudadana; el hecho que fuera a promocionarla a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander evidencia “el fortalecimiento de un Estado policial, y el uso de este instrumento legal para que la policía pueda asfixiar con más fuerza la manifestación social legítima en Colombia” (Bejarano, 2022).

El mandatario presentó este proyecto e incitó su celeridad agregándola a la agenda prioritaria de los debates del Congreso. El hecho de que esta Ley entró en vigencia tras únicamente 26 días de debate demuestra que se trata de un esfuerzo afanado de presidencia por demostrar resultados. Su trámite legislativo no contó con adecuada información, análisis de expertos y/o participación de organizaciones sociales y ciudadanas; pese a que esta incluyó más de 40 modificaciones al sistema punitivo de Colombia. Además, se trató de un proyecto que borró el trabajo logrado, en el marco de las discusiones de otras cuatro iniciativas en materia de reforma de la Policía Nacional.

El carácter militar de la Policía Nacional como un problema para juzgar casos de abuso policial.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del

Paro Nacional, propuso trasladar la Policía Nacional al Ministerio del Interior para dotarla de un carácter civil; esta nueva ley no resuelve el problema de que esta institución es parte del Ministerio de Defensa. Esto hace que preserve un carácter militar, y afecta la manera cómo se juzga a los policías que abusan de su poder y vulneran derechos humanos. Se trata de un asunto que ha generado arduos debates políticos, incluso entre los candidatos presidenciales de las elecciones de 2022 (estando a favor el Pacto Histórico, Juan Manuel Galán, y Alejandro Gaviria) (Fitzgerald, 2021).

El que la Policía Nacional haga parte del Ministerio de Defensa, permite que en los casos de graves violaciones de derechos humanos realizadas por sus miembros -como las torturas, las detenciones ilegales e incluso las ejecuciones extrajudiciales- la institucionalidad presione para que estos sean conocidos por la jurisdicción de la justicia especial militar (un juicio interno) y no por la jurisdicción ordinaria. Esta última, resulta beneficiosa porque ofrece mayores garantías a las víctimas de abusos policiales, y manda un fuerte mensaje de rechazo en contra del uso indiscriminado de la violencia por parte de la fuerza pública.

Lastimosamente hoy en casos críticos es la Corte Constitucional la que debe resolver problemas de competencia. Por ejemplo, frente a la acción de tutela presentada por la familia de Dilan Cruz, asesinado en noviembre de 2019 por el capitán Manuel Cubillos, este tribunal identificó que para garantizar la transparencia del juicio debe ser llevado en la jurisdicción ordinaria.

La flexibilización de la legítima defensa como detonador de nuevos ciclos de violencia.

Por otra parte, Duque reforzó la figura de la presunta defensa legítima, lo que puede resultar en que las personas cobren justicia por mano propia; pese a que es el Estado quien tiene el monopolio de la administración de justicia. Esto resulta verdaderamente preocupante para la búsqueda de una paz estable y duradera en Colombia, dado que las medidas que permitían que privados prestaran servicios de seguridad en el pasado reciente (administración de justicia por mano propia), llevaron a la consolidación de las Convivir, y posteriormente grupos armados paramilitares. Así, podríamos estar ante un detonador de nuevos ciclos de

violencia, especialmente en las ciudades.

Esta flexibilización de la defensa legítima es aún más crítica cuando las elecciones se acercan, y los gobiernos de derecha como el actual, apelan a su discurso del “enemigo” para solucionar problemas que requieren de reformas estructurales a la arquitectura de la policía y el reconocimiento de su deber de protección de los derechos y libertades en sistemas democráticos.

La afectación del derecho a la protesta de grupos étnicos.

Este instrumento legal vulnera el derecho fundamental a la protesta de los grupos étnicos, dado que introduce cambios frente a la imputabilidad por diversidad étnica. En la práctica se traduce en que esta medida facilita la represión de las personas racializadas y limita su participación política directa. Se trata de una medida dirigida a afectar negativamente la participación de la Minga en el Paro Nacional, y reprimir su movilización por fuera de sus territorios.

El uso incorrecto del concepto de seguridad ciudadano en la Ley 2197 de 2022.

El concepto de seguridad ciudadana consagrado en esta ley ha sido objeto de duras críticas. Esto, porque, aunque su definición correcta no hace referencia exclusiva a la protección de los ciudadanos frente a la actividad delictiva, sino también a las mismas políticas de seguridad. En su exposición de motivos se ve reflejado un interés por brindar lineamientos para el manejo de la criminalidad, sin los desarrollos de procesos de diferenciación de los tipos de violencias en los territorios, o abordajes que manejen eficazmente la violencia policial.

Así, la falta de enfoques territoriales hace que los tratos de los crímenes comunes (robos de objetos de valor y celulares) en ciudades grandes como Bogotá o Medellín, sean muy similares a los de las actividades delictivas de los narcotraficantes y grupos al margen de la ley en el Pacífico, o las intimidaciones de disidencias de las FARC en las zonas centrales del país. La mirada macro adoptada por un Estado alejado de la realidad permite asumir y promocionar el discurso hegemónico de la “guerra” (Observatorio de Gobierno Urbano de la Nacional, 2022).

La Ley 2197 de 2022 como herramienta para sancionar el uso de los espacios públicos y estigmatizar la protesta social legítima en Colombia.

Además, la ley ha sido descrita por el Observatorio de Gobierno Urbano de la Universidad Nacional como un manejo de la criminalidad del país que no ataca los nudos estructurales de una política de seguridad, sino que se limita a lineamientos punitivos y a la estigmatización de la protesta social en el marco del Paro Nacional desatado el 9 y 10 de septiembre de 2020 (2022). Esta ley faculta a la fuerza pública para hacer uso de la violencia con el objetivo de reprimir a quienes exigen cambios sustanciales en un país que ha sufrido graves afectaciones sociales, políticas y económicas durante la pandemia de Covid-19 y la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz con las FARC.

La emisión del “estatuto policial” de Duque, llega tras la agudización de las violencias policiales en los espacios públicos, como consecuencia de las restricciones a la movilidad en el marco de la pandemia. Esto se evidencia en el Informe de Temblores-ONG “Trapitos al sol del Autoritarismo”. Describe cómo las cuarentenas adoptadas desde marzo del 2020 fueron utilizadas para eliminar la habitabilidad del espacio público, e incrementó el número de multas, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía en las movilizaciones.

En palabras de esta organización,

Durante la cuarentena se legitimaron formas diferenciadas de violencia policial excusadas en la emergencia sanitaria. Además, permitió que estas prácticas pasaran no solo en el espacio público, sino que también facilitó su ocurrencia en gran medida en los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. De los 161 hechos de violencia policial registrados en GRITA entre marzo y agosto de 2020 (meses de cuarentena estricta en Colombia), en cuarenta casos hubo alguna situación de violencia en el interior de un CAI, es decir, en 24,8% de casos registrados, casi una cuarta parte del total de casos ocurridos en

cuarentena (Temblores-ONG, 2022).

La Ley 2197 de 2022 muestra cómo en Colombia se repiten los gobiernos represivos, que, ante el descontento de la ciudadanía, utilizan de forma inconstitucional el Derecho, para legitimar el uso indiscriminado de la violencia contra sus detractores. Sin embargo, se trata de un asunto que no se encuentra soldado, sino que, por el contrario, desde su entrada en vigencia, ha sufrido las fuertes respuestas de la ciudadanía que no esperó para demandar su inconstitucionalidad. Así, será la Justicia quien tome la decisión final. Lo cierto es que aun si este cuerpo normativo cae, Duque habrá logrado en el campo simbólico darles a sectores de la población herramientas interpretativas para sobreponer la propiedad privada sobre la vida y estigmatizar la movilización social.

C. Brasil: la seguridad como un asunto central de la agenda política de Jair Bolsonaro.

La influencia del discurso de seguridad pública de Bolsonaro en la radicalización de las fuerzas públicas.

Existe una situación similar en Brasil, donde Bolsonaro ha implementado una política de seguridad pública que materializa el papel represivo de las fuerzas policiales en el control del orden público. Desde su campaña presidencial en 2018, se mostraba a favor de la violencia en la lucha contra la criminalidad y la guerra contra las drogas. Se trata de una figura política que ha encarnado una fuerte polarización frente a asuntos como: la contienda entre valores tanto autoritarios como democráticos en la sociedad brasilera, la organización administrativa de la policía, y el papel de las fuerzas policiales en el control del orden social (Lima, 2022).

En este orden de ideas, Bolsonaro ha adoptado un enfoque punitivo caracterizado por la discriminación racial y de clase, a través del discurso de “el enemigo” que posiciona a las poblaciones más desatendidas como posibles amenazas para el orden social. A lo largo de su mandato, este ha fomentado el conservadurismo político de miembros de la policía y su participación radical en la esfera pública similarmente a lo que sucedió “no solo en Colombia sino también

en Alemania, Bolivia, Estados Unidos, Filipinas, Francia e India” (Lima, 2022).

Su apoyo ha hecho que los miembros de la fuerza pública se sientan cómodos dando fuertes declaraciones. Esto ocurrió con Augusto Heleno Pereira -general retirado nombrado por este ministro de Defensa- quien se sintió respaldado cuando públicamente defendió las intervenciones militares en las ciudades de Brasil diciendo “no son las misiones de ensueño para las fuerzas armadas, pero si son necesarias, y seguirán” (Londoño y Andreoni, 2018).

Bolsonaro entonces, fortalece la amalgama de condiciones políticas e institucionales que dan forma a la desigualdad brasilera y que es naturalizado por la mayoría de los policías” (Lima, 2022). Los invita a ignorar su obligación de garantizar la seguridad de “todos” los ciudadanos reproduciendo ideas antagónicas entre la policía y las poblaciones de ingresos bajos de las urbes, que permean las nociones y marco institucional del “orden público” provenientes de fuentes previas a la Constitución de 1988.

Bolsonaro como precursor de la agenda de seguridad en Brasil: una estrategia para ganar votos.

Esto es un nuevo fenómeno político porque ningún presidente antes de Bolsonaro había querido dirigirse directamente al manejo de la policía. Su continua insistencia por darle protagonismo a este asunto, ha contribuido a que este conquiste electoralmente a las bases policiales y sus círculos sociales.

Otros mandatarios encontraron que la falta de gobernabilidad era un obstáculo para su intervención. Aun hoy prevalecen fuentes legales previas a la Constitución de 1988 que regulan la materia (no ofrecen garantías para la protección de los derechos humanos) y su administración se encuentra fragmentada por la estructura federal del Estado (son los Estados y municipios quienes toman decisiones frente a su administración e incluso el carácter cívico o militar de quienes intervienen en una gama amplia de asuntos).

Según De Lima, Todos los expresidentes de la República desde 1989 intentaron no involucrarse directamente con la seguridad pública, dejando aisladas a las policías estatales y/o limitándose a dar apoyo financiero a las unidades de la

federación. Muchos ex presidente sintieron que la seguridad era una agenda de los gobernadores y que no sería políticamente comprometerse con ella (Lima, 2022).

El debate legislativo como estrategia para ganar espacio en el campo simbólico de la sociedad brasileira.

Adicionalmente, Bolsonaro ha logrado controlar el encuadre del debate público con propuestas absurdas, como autorizar que la policía mate a personas sin previa investigación; una ley antiterrorista que le permitiría reprimir los movimientos sociales; o la flexibilización del porte de armas para los “ciudadanos de bien” (Lima, 2022). Durante su campaña declaró que “un buen criminal es uno muerto”, mientras que su asesor Gustavo Bebianno afirmó que “no hay que hablar con los delincuentes, se habla después de disparar” (Londoño y Andreoni, 2018). Se trata de una postura que se alinea con los reclamos de las corporaciones y un sector de los brasileiros que están de acuerdo con el uso de medidas drásticas para atajar una ola de crímenes violentos que se disparó en el 2017 (Londoño y Andreoni, 2018).

La militarización de las ciudades brasileiras en la lucha contra el incremento en la comisión de los crímenes comunes.

Aunque los problemas de seguridad de las ciudades se deben en gran medida a la presencia de milicias conformadas por miembros retirados de las fuerzas públicas, que actúan por su propia cuenta, y que han adquirido poder en las comunidades menos atendidas por el Estado, extorsionando a los residentes a cambio de “protección”, operando negocios de transporte irregulares, y involucrándose en micro-tráfico (Londoño y Andreoni, 2018). En 2018, Bolsonaro le dio el control de la seguridad de su estado natal, Río de Janeiro, al ejército nacional.

Pese a que, los delitos de asalto y robo se redujeron, la cantidad de muertes violentas aumentaron. Hubo un incremento del 45% de los homicidios por parte de policías y militares en la ciudad en 2018, al reportarse entre marzo y

septiembre al menos 922 víctimas. Sorprendentemente, la intervención militar fue respaldada por la vasta mayoría de los habitantes de Río, sin importar su desproporcionalidad (Londoño y Andreoni, 2018).

El carácter militar de la policía resulta preocupante ya que este contribuye a una visión de “guerra” que impide el fortalecimiento de la policía como una institución encargada de velar por la protección de derechos. Como lo establece la experta en temas de seguridad de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adriana Beltrán, medidas como la intervención de las fuerzas militares son cada vez más comunes en países de la región para manejar situaciones sociales estructurales, y lidiar con áreas donde las fuerzas policiales quedan rebasadas y el sistema penal es deficiente. Sin embargo,

El uso de los militares no ha resultado en la interrupción de la actividad criminal o en el desmantelamiento de las redes delincuenciales. En muchos casos, las pandillas y grupo criminales han aumentado sus niveles de organización y sofisticación... Además, depender en las fuerzas armadas para temas policiales incrementa los abusos a los derechos humanos, incluidos la tortura, las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales (Londoño y Andreoni, 2018).

La flexibilización de las condiciones para el porte de armas como un riesgo inminente de mayor abastecimiento del mercado ilegal y violencia.

A través de decretos, Bolsonaro viene flexibilizando las condiciones para el porte y adquisición de armas en Brasil. Entre las medidas añadidas por él se encuentran el incremento de cupos para armas en cabeza de un civil y la reducción en el control y rastreo de estas y sus municiones. Se trata de un asunto preocupante dado que para 2020, se registró un aumento del 65% en la tenencia de armas por parte de civiles en este mandato.

Para expertos como Carolina Ricardo, directora del Instituto Sou Paz, la situación puede estar contribuyendo a que los grupos paramilitares brasileiros puedan abastecerse de armas.

Igualmente, miembros del partido PSOL como Marcelo Freixo han descrito estas disposiciones como “populismo armamentista” y

han rechazado el hecho que el presidente legisle sobre armas a partir de decretos. Advirtió que las “armas de colección de un tirador o cazador pueden ser robadas o desviadas y abastecer el mercado ilegal”.

Bolsonaro legitimó el uso de la violencia en el lenguaje común de las interacciones de la policía con la ciudadanía.

Aunque muchas de las leyes propuestas por Bolsonaro no han logrado pasar en el Congreso, este ha logrado introducir en el Derecho la disputa del uso “legal” de la violencia como lenguaje que media con la población civil. En este sentido, su agenda ha logrado permear el imaginario social de personas de clase media y alta que encuentran en sus propuestas soluciones drásticas y rápidas para tratar problemas de criminalidad sin comprender que este asunto requiere de una reforma estructural a la arquitectura institucionalidad e incluso identidad. Esto con el fin de garantizar también la seguridad de las favelas donde viven mayoritariamente personas racializados o/y de bajos ingresos.

D. Duque y Bolsonaro: el discurso de “los enemigos” como punto de partida para la seguridad.

Duque y Bolsonaro han impulsado el uso de categorías que separan a la población entre “buenos ciudadanos” dotados de derechos y “bandidos/vándalos” que deben ser perseguidos y eliminados en ambos contextos. Lima describe esta situación como “un típico ciclo latinoamericano de convivencia con altos índices de violencia: la región concentra cerca de un tercio de los homicidios del mundo, y Brasil, con el 3% de la población mundial, acumula alrededor del 10% de todos los asesinatos” (2022).

Se evidencia en ambos casos, un intento por legitimar una noción peligrosa para un sistema democrático por la cual el Estado debe “eliminar a los enemigos” o “los otros”, lo que en un pasado cercano terminó en graves vulneraciones de derechos humanos.

Por ejemplo, en 1979 militares colombianos detuvieron ilegalmente y

torturaron a Olga López de Roldán a quien acusaban de prestar servicios médicos a integrantes del M-19 (Bejarano, 2022). Y, en el caso de Brasil, con propuestas como la potestad de la policía de matar sin previa investigación. Además, el Observatorio de Gobierno Urbano de la Universidad Nacional también encuentra que la reforma legal implementada por Duque en su exposición de motivos señala una lucha casada con la protesta social legítima y el “vandalismo”, que no segrega la criminalidad urbana de los fenómenos de conflicto en zonas rurales. Igualmente, desconoce que parte de ese “vandalismo” lo realizó las fuerzas públicas en condiciones irregulares en las que acompañaron a civiles que dispararon en contra de los manifestantes.

Para concluir, tanto Duque como Bolsonaro apelan a dinámicas populistas, como el fetichismo legal vinculado al alza de las penas y las medidas de privación de la libertad para ganar votos y favorabilidad en tiempos de elecciones. En este sentido, tienen propuestas esencialistas con miradas limitadas de los graves problemas sociales de ambos países. Estos, buscan la favorabilidad y radicalización de los sectores policiales e incluso militares incorporando beneficios en servicios como la hotelería o incremento de las penas por los homicidios a los miembros de estas fuerzas públicas. Sin embargo, desconocen otros graves fenómenos como el asesinato de manifestantes en el marco de la protesta en Colombia o los asesinatos de personas racializadas por parte de la policía en Brasil.

Referencias Bibliográficas

- Bejarano, A. (2022). El Estatuto de Duque. *Los Danieles*.
- De Lima, R. (2022). El encantador de policías. *070*.
- Fitzgerald, M. (2022). 5 conclusiones del debate sobre Reforma Policial. *070*.
- Jiménez, C. (16 de febrero de 2021). Jair Bolsonaro eleva a seis el cupo de armas para civiles y hasta 60 para tiradores y cazadores. *El País*.
- Londoño, E., & Manuela, A. (1 de noviembre de 2018). ‘Cavaremos las tumbas’: Brasil se alista para la política de seguridad de Bolsonaro. *The New York Times*.
- Observatorio de Gobierno Urbano. (enero de 2022). *Ley de seguridad ciudadana y debate electoral*. Obtenido de Radio UNAL: Ley de seguridad ciudadana y debate electoral
- Temblores ONG. (2022). *Trapitos al sol del autoritarismo*. Bogotá: Temblores ONG.

A large crowd of people is gathered in the Plaza de la Patria in Mexico City, in front of the Panteón de la Patria. The crowd is diverse in age and appearance, with many people wearing yellow shirts. In the foreground, a white bus with a yellow banner is visible. The background shows modern buildings and a clear sky. The title text is overlaid on the right side of the image.

CUARTA PARTE:

CALÍ Y EL SUROCCIDENTE EN EL EPICENTRO DEL PARO

Fotografía: Alejandro Calderón

Sobre los repertorios de acción colectiva en el marco del paro nacional del 28 de abril del 2021 en Santiago de Cali⁴⁸

JuanSebastián Céspedes Mendoza

Aida Milena Acevedo Jaramillo

Desde inicios del año varios sectores e incluso el mismo gobierno venían advirtiendo acerca de las intenciones del gobierno de realizar una reforma tributaria. Este proyecto se materializó entre mayo y abril del 2021 pasando a discusión en el congreso, desde donde tenía que ser aprobado, pero precisamente es aquí donde empiezan los cuestionamientos. El día 15 de abril la propuesta fue presentada en el congreso bajo el nombre de “Ley de solidaridad sostenible” y desde ese momento empezó un debate nacional alrededor de las implicaciones que este traería para las mayorías sociales. Luego, desde múltiples organizaciones, se empezó a gestar la idea de un paro nacional y se hizo la convocatoria de la mano del comité del paro para el 28 de abril.

En el caso de la ciudad de Santiago de Cali, el paro empezó con el derribamiento por parte de indígenas Misak de la estatua de Sebastián de Belalcázar, continuó con movilizaciones pacíficas y finalizó con enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Con una fuerte represión por parte del Estado, que provocó que la rabia contenida en la ciudadanía aumentara, prolongando así el paro. A su vez, esto hizo que el paro fuera mutando de carácter, pues si bien, la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional Ley “Solidaridad Sostenible” era la punta del iceberg, fueron los hechos sucedidos durante los días posteriores al inicio del paro, los que hicieron que se volviera, más que un estallido, un proceso de “rebelión social” para la generación de cambios estructurales para el país.

Durante los casi 3 meses que duró el paro nacional las jornadas de movilización y protesta estuvieron caracterizadas por bloqueos permanentes de puntos

⁴⁸ Artículo publicado en Octubre 01 de 2021, Bogotá, D.C.

estratégicos y demás vías de la ciudad de Santiago de Cali. Marchas constantes, jornadas artísticas, pedagógicas, y constantes momentos de agresión violenta contra los manifestantes, que se encontraban ejerciendo su derecho legítimo a la protesta como mecanismo de presión al gobierno nacional frente a los cuestionamientos y la necesidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía. El Estado dio un tratamiento militar y de guerra a la movilización social y esto ineludiblemente tuvo como consecuencia la confrontación entre fuerza pública y manifestantes.

Las protestas del 28 de abril cambiarían la historia de la rebeldía en Colombia, pues por un lado definieron, “una nueva calidad de la protesta, la resistencia y la movilización social”, y por otro lado mostraron “un continuum”, no solo de importantes luchas previas a la pandemia por COVID-19 y durante la misma, sino de décadas de confrontación por la opresión, la desigualdad, el modelo económico capitalista y neoliberal y la guerra contrainsurgente.” (Estrada, 2021)

Actores presentes

Teniendo en cuenta el contexto coyuntural de la protesta social en Colombia, el reclamo social a los entes gubernamentales tanto en la esfera nacional como local, y las condiciones que aquejan a la población de Cali, es importante analizar los actores que participaron en ella, sus perspectivas y su *modus operandi* para comprender las dinámicas que estuvieron presentes en la ciudad. A su vez, se analiza que, de acuerdo a estas características especiales, la participación de actores en este paro nacional es distinta, debido a los intereses particulares, la magnitud de la coyuntura y la inconformidad creciente. Esto se puede ver desde la acción colectiva, donde se concluye que los participantes son difusos y heterogéneos, no son predeterminados y se establecen como tal a lo largo de la protesta. Mientras que las identidades colectivas se reconfiguran, los liderazgos se vuelven difusos y emergentes y los promotores se ven superados por la solidaridad y la magnitud de las movilizaciones (Castillo, 2021).

Estatales

Gobierno nacional:

Presidencia: encabezada por el presidente Iván Duque Márquez, integrante del partido político Centro Democrático y representante del Uribismo, es determinante, tanto en la protesta social como en la política de Colombia. El uribismo se remonta casi veinte años atrás durante el primer mandato de Uribe y durante los años posteriores, pues el Centro Democrático cumple su tercer periodo en el poder. La visión negacionista sobre el conflicto político-armado y el discurso de estigmatización sobre organizaciones y movimientos sociales, así como de la protesta, jugaron un rol fundamental a la hora manejar el reclamo social. Para el caso del paro nacional del 28 de abril, esto se manifiesta en el despliegue de la fuerza pública durante las manifestaciones y principalmente el despliegue militar en la ciudad de Cali desde el mismo 28 de abril y posteriormente, con el Decreto 575 del 28 de mayo sobre asistencia militar emitido por el gobierno. La negativa del gobierno a dialogar con la juventud volcada a las calles y la dilatación en la negociación con el comité del paro, también definió en gran medida la radicalización que tomaría el paro.

Ministerios: para esta ocasión, el ministerio de hacienda y el ministerio de defensa, encabezados por Alberto Carrasquilla y Diego Molano respectivamente, fueron los que estuvieron directamente involucrados, al ser el primero, el gestor de la ampliamente criticada reforma tributaria; y el segundo, al estar encargado de la administración y uso de la fuerza pública, siendo este uno de los altos mandos en materia de seguridad del país. Además, sus pronunciamientos y accionar se vieron caracterizados por desconocer la realidad económica y de seguridad con respecto a la protesta social, ya que invisibilizaba el reclamo social causado por la precaria situación de vida en la que se encuentra sumergida la mayoría de la población, estigmatizando a sus participantes, deslegitimando sus formas de protesta e ignorando las demandas de distintos sectores.

Gobierno local:

Gobernación departamental: a cargo de la gobernadora Clara Luz Roldán, a quién recientemente la contraloría General de la república ordenó abrirle un juicio de responsabilidad fiscal por casi 4 mil millones de pesos, debido a irregularidades en la contratación para atender los problemas derivados de la pandemia por COVID-19, tuvo también varias actuaciones cuestionables en el marco del paro nacional e incluso antes de este. Para el 23 de abril dio la orden a la fuerza pública de ingresar al campus de la Universidad del Valle para expulsar a unos estudiantes que se encontraban realizando una toma en forma de campamento en las instalaciones del campus, exigiendo las condiciones necesarias para el retorno a clases presenciales o al menos en alternancia. Frente a este hecho, el estudiantado decidió irse a paro en aras de exigir la renuncia del rector y la gobernadora por haber violado la autonomía universitaria declarada constitucionalmente, entre muchas otras razones subyacentes. Una vez comenzó el paro nacional, fue la primera en pedirle al presidente Duque que enviará más fuerza pública y militarizara la ciudad; en efecto, para el 30 de abril llegaron 700 uniformados de la policía y 300 soldados. Durante todo el paro, mantuvo un trato represivo hacia la protesta, así como en los días previos al 20 de Julio, en el marco de la realización de la Asamblea Nacional Popular, organizada por diferentes colectividades, procesos organizativos y la ciudadanía independiente. En la cual ordenó el cierre de fronteras en todo el departamento para impedir la entrada de las múltiples delegaciones que venían de distintos lugares del país, entorpeciendo así el encuentro.

Alcaldía: La alcaldía de Jorge Ivan Ospina estuvo envuelta en escándalos públicos relacionados con irregularidades en la inversión del presupuesto en medio de la pandemia, poniendo en tela de juicio la legitimidad de su administración y generando un sentimiento de insatisfacción popular que se vio reflejado en las manifestaciones de quienes participaron del paro nacional. La administración se caracterizó por su falta de claridad a la hora de establecer posicionamientos firmes sobre el trato que se le dio desde la presidencia a la protesta social

desde la represión y la violencia perpetrada en contra de la ciudadanía. El investigador José Fernando Sánchez (2021), argumenta “que el gobierno municipal implementó la ambigüedad institucional en múltiples ocasiones” . Esta práctica, según el autor, se utiliza con la intención de no resolver las problemáticas existentes, ya que no se toman decisiones claras, dilatando a su vez el tiempo a través del silencio administrativo llegando a decisiones confusas y que generan desconfianza en los administrados.

Sin embargo, la administración municipal manifestó el deseo de resolver la situación a través del diálogo, mediar los diferentes puntos de vista por medio de sus secretarías, reivindicar ciertos actos como por ejemplo la caída del monumento de Sebastián de Belalcázar y las formas de protesta pacífica. Si bien, en un inicio manejó un discurso estigmatizador hacía los manifestantes, posteriormente se pronunció en contra de la narrativa propuesta por los entes gubernamentales nacionales que estereotipaban la protesta social al reconocer la Unión de Resistencias de Cali como actor legítimo para la articulación de las demandas sociales.

El Sociólogo Álvaro Guzmán Barney, indica que el alcalde también fue el único mandatario en pronunciarse sobre la presencia de civiles armados en la protesta social y el presunto conocimiento y acompañamiento que le brindó la policía nacional a estos grupos . Por último, es necesario recalcar que la autoridad de la alcaldía se ha visto sobrepasada por los intereses del gobierno departamental y nacional; también que las negociaciones desde un principio avanzaron lentamente debido a la desconexión entre el gobierno local y la fuerza pública; y la falta de confianza por parte de la sociedad civil hacia estos.

Actores armados legales

Fuerza pública: La fuerza pública colombiana viene siendo fuertemente cuestionada durante los últimos años por sus actuaciones como encargados de garantizar el control del orden público. Estos cuestionamientos han venido creciendo de manera directamente proporcional en relación con

el actuar violento de la institución, pues cada vez son más los casos documentados que muestran la sistematicidad en la actuación. Contrario a las afirmaciones del gobierno sobre los casos aislados y/o ‘manzanas podridas’, este fenómeno fue protagónico y cobró una importancia mucho mayor durante el paro nacional, pues los casos denunciados, documentados y comprobados sobre prácticas que violan los derechos humanos por parte de la fuerza pública, van desde violencia física, asesinatos, violencia sexual, hasta desapariciones forzadas, persecución judicial, entre otras formas de violencia. La policía y el ejército nacional hicieron un uso indiscriminado de las armas de fuego, accionándolas directamente contra los manifestantes el ESMAD con el uso desproporcionado e injustificado del arma “VENOM”, que empezó a ser utilizada en el paro nacional del 2021. Además de otras actuaciones como el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos y aturdidoras, tanto a los cuerpos de los manifestantes como dentro de barrios residenciales y al interior de las viviendas, lo que también constituye evidentes violaciones a los derechos humanos y fundamentales.

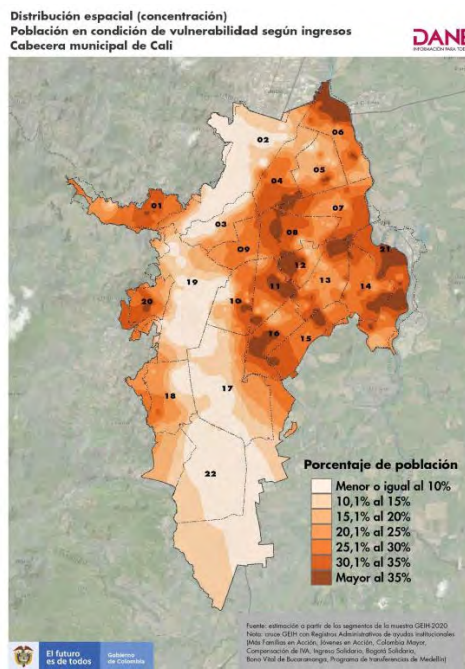
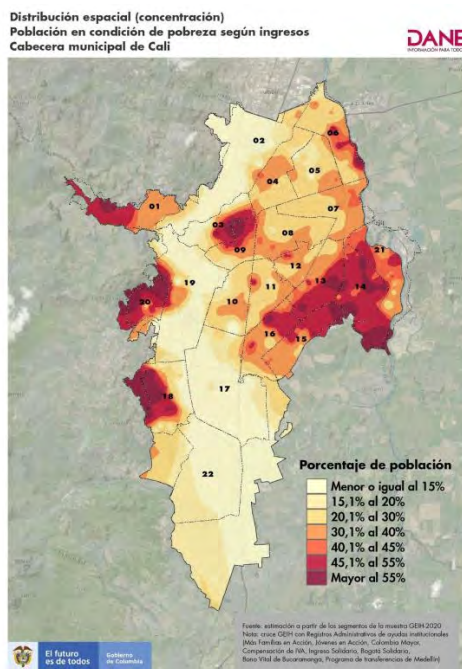
Además de la policía, el ESMAD y el ejército, el GOES también fue determinante durante el paro del 2021, algo no visto en manifestaciones anteriores y casi nunca en paros nacionales. Su accionar, varió desde la intimidación hasta acusaciones de haber disparado a los manifestantes durante las confrontaciones y en altas horas de la noche, en los puntos de bloqueo. Finalmente está la DIJIN quienes, desde la investigación judicial, estuvieron a cargo de realizar allanamientos y judicializaciones a quienes hicieron parte activa de la protesta.

Sociedad civil

Juventud: Caracterizada por ser en su mayoría jóvenes entre los 15 y los 28 años, de sectores populares, empobrecidos por condiciones históricas y sistemáticas de explotación, racismo, marginalización y estigmatización. Esta juventud, se encuentra ubicada principalmente en la periferia de la ciudad, en el sector de La Ladera al occidente, y en el sector del distrito de Aguablanca al oriente, como se puede apreciar en el siguiente mapa realizado por el DANE

que ilustran la distribución territorial que demuestra los índices de pobreza y vulnerabilidad en Cali. La mayoría de puntos de bloqueo, coinciden con los sectores más vulnerables y con las tasas más altas de pobreza. De acuerdo con el DANE en su informe, *Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia. ¿Quiénes son, qué hacen y cómo se sienten en el contexto actual?*, para el trimestre móvil de mayo a julio del 2020, la población de personas jóvenes NINI fue del 33%, mientras que la tasa de desempleo juvenil fue del 29,7%.

Mapa tomado del DANE⁴⁹



Otros sectores ciudadanos: Dentro de esta categoría se engloba la ciudadanía general en la que se encuentra, por una parte, ciudadanía de clase baja, integrada por adultos entre los 29 y los 65 años, trabajadores formales e informales, que en su mayoría no habían culminado sus estudios de primaria o secundaria, pero también algunos profesionales que hicieron parte activa del paro o que

49 Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Ver en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>

simplemente acompañaron y apoyaron las manifestaciones durante los casi 3 meses. Y finalmente, un último pequeño porcentaje de adultos mayores.

Por otro lado, se reconoce un sector de la ciudadanía que en su mayoría pertenece a la clase alta, empresarial o a familias de tradición terrateniente o negociante de la región que en gran parte están ubicados al sur de la ciudad. El actuar de este grupo de la ciudadanía despertó discusiones sobre profundos conflictos entre la sociedad colombiana, pues para este sector social, tanto la protesta en general, como el paro nacional en particular, debían ser manejados con autoridad e intervención de la fuerza pública. De allí surge su molestia con el actuar del alcalde y el respaldo al presidente Duque, con acciones que iban desde realizar marchas rechazando las manifestaciones, borrar murales que denunciaban hechos históricos y recientes del paro nacional, hasta organizarse para atacar con violencia armada los bloqueos, particularmente, en la zona sur de la ciudad, con el pretexto de ayudar a la fuerza pública en el control y desarticulación de la protesta.

Organizaciones: La presencia de organizaciones sociales, si bien jugó un papel importante en cuanto al acompañamiento que realizaron desde lo jurídico, pedagógico, entre otras acciones. Estas no representaron al grueso de los actores que participaron en la protesta. De hecho, a muchos sindicatos y sectores pertenecientes históricamente a los movimientos sociales de izquierda, se les cuestiona por no haber apoyado en bloque el paro nacional. Por ejemplo, movimientos sociales como el movimiento estudiantil, brillaron por su ausencia, pues la presencia que hubo fue de estudiantes como individuos más no como organización. A los sindicatos de trabajadores, al gremio de los transportadores, al sector campesino, etc., también se les cuestionó lo mismo, pues si bien argumentaban que el paro les correspondía a los jóvenes porque ellos lo estaban haciendo posible y duradero, esto no era motivo para su severo distanciamiento.

En este caso sucedió la contradicción, este distanciamiento hizo que los jóvenes desconfiaran y tampoco quisieran su presencia, razón por la que muchos sectores y movimientos mermaron su acompañamiento. Quienes quedaban como parte de organizaciones y/o en representación, fueron quienes se articularon a los procesos que se mantuvieron a lo largo del paro e incluso se proponen una

continuidad indefinida. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Popular, iniciativa que articula procesos nacionales, territoriales y de diversos sectores, que se propone como espacio de encuentro de procesos populares.

Comunidades: En cuanto a las comunidades que participaron en el paro, es importante destacar la presencia de Organización Regional Indígena de Valle del Cauca -ORIVAC- en varios puntos del departamento del Valle y la visita del CRIC a la ciudad de Cali para el fortalecimiento de la Minga indígena Nacional. Además, cabe recordar que Cali ha sido destacada como una de las ciudades con mayor población que se auto reconoce como afrodescendiente. Al respecto, el investigador y politólogo Fernando Urrea Giraldo (2021), menciona las dimensiones espaciales y raciales que estructuran la interacción con las comunidades en la sociedad caleña⁵⁰.

A su vez, el autor hace hincapié en que geográficamente la localización de la ciudad como centro de la región suroccidente hizo que a lo largo de la historia las poblaciones blancas-mestizas confluyeran, debido a la herencia del colonialismo, con comunidades racializadas como las afrodescendientes e indígenas. Este proceso desemboca en la diversidad étnico racial que, a través del legado racista del colonialismo, estructura la ciudad en lo que el autor llama un “patrón de segregación racial residencial en Cali”, cuya distribución se asemeja a los índices de pobreza y vulnerabilidad presentados anteriormente. Esta disposición geográfico-racial demuestra a su vez, el posicionamiento de los puntos de concentración presentes en el paro nacional conectando así estas problemáticas con el desagrado social y las condiciones constitutivas del racismo y la segregación en términos económicos, políticos y sociales.

A lo largo del paro hicieron presencia diversos actores pertenecientes a otras comunidades marginalizadas como la LGBTIQ+, quienes han sido oprimidos históricamente por dinámicas de poder provenientes también del legado colonial que los relega a la periferia, construyendo o incluso eliminando cualquier oportunidad de integración en la sociedad, participación ciudadana y “progreso”

50 Urrea Giraldo, F. (2021). Algunos factores desencadenantes del levantamiento popular en Cali y su región metropolitana. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 167-182). Santiago de Cali: CIDSE.

social en lo que refiere a oportunidades de estudio y trabajo. Dichos factores se han encargado estructuralmente de alimentar la indignación que se termina por manifestar en la heterogeneidad de la protesta social, en cuanto a la creación de nuevos actores políticos, en cuanto a la reivindicación de espacios públicos, monumentos, comunidades y formas de manifestarse y más claramente, en el malestar con la elite socioeconómica estructurada en su mayoría por blancos-mestizos pertenecientes a las clases altas y medias del país.

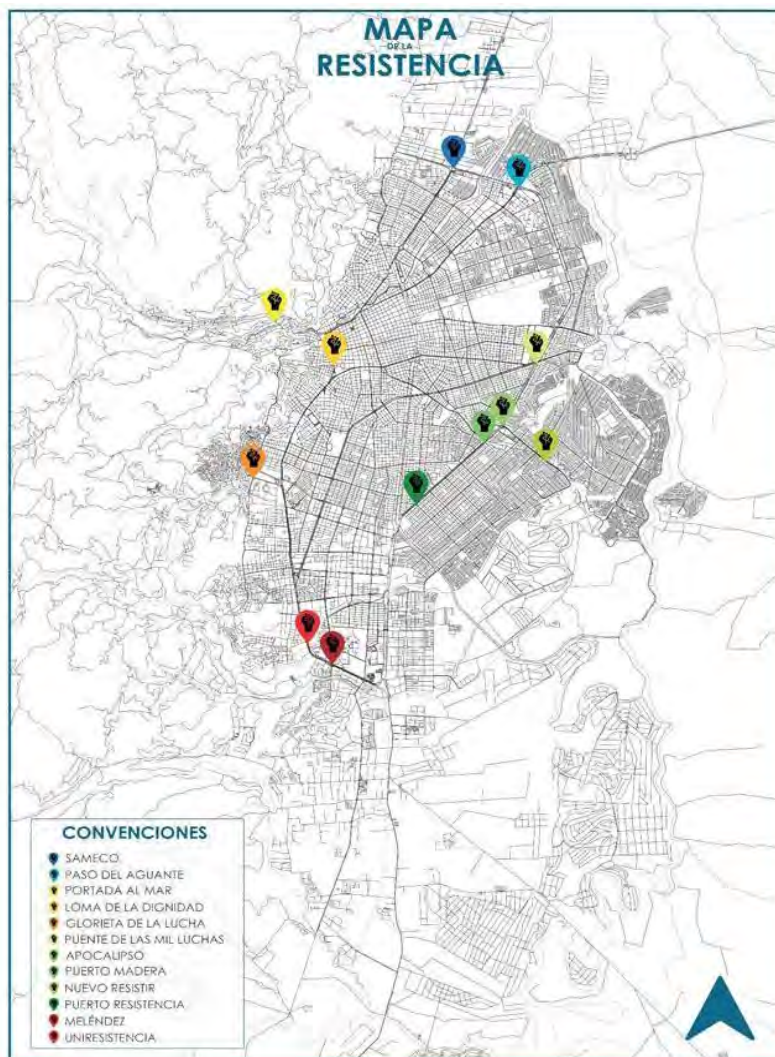
Actores armados ilegales

Actores armados y grupos al margen de la ley: El sociólogo Jorge Hernández Lara afirma que, no hay evidencia de que las guerrillas sobrevivientes, las estructuras del narcotráfico u otras bandas criminales organizadas hayan aportado violencia al paro en Cali, pero tampoco se puede descartar. Por un lado, los entes gubernamentales denunciaron la presunta participación e influencia que ejercieron grupos como el ELN y las disidencias de las FARC-EP en el establecimiento de los ideales que estructuraron la protesta social y las formas de protesta. Esta tesis de infiltración de los grupos armados fue central a la hora de justificar la magnitud de la represión perpetrada por la fuerza pública.

Sin embargo, el autor menciona que a partir de las denuncias de las ONG's Temblores e Indepaz se reconoció la intervención de civiles armados que también participaron en la violencia perpetrada en contra de los manifestantes. También se denunció por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos la presunta colaboración de estructuras paramilitares en la represión de la protesta mediante intimidaciones, amenazas, desapariciones e incluso asesinatos a líderes de las manifestaciones, Amnistía Internacional, por ejemplo, denominó a este fenómeno “actos de paramilitarismo urbano”⁵¹. Cabe resaltar el caso de los civiles armados de la zona sur de la ciudad de Cali, que fueron acompañados por la fuerza pública durante las agresiones que se dieron el domingo 9 de mayo

51 Amnistía Internacional Colombia: Represión Violenta paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas contra manifestantes pacíficos en Cali. Julio, 2021. <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-represion-violenta-contra-manifestantes-pacificos-cali/>

contra la Minga indígena. Así como los casos de infiltrados por parte de la fiscalía, la policía⁵² y otros miembros de la fuerza pública en las manifestaciones. Mapa1. Puntos más prominentes de bloqueo /resistencia⁵³



Mapa de elaboración propia con datos recogidos en terreno

52 Guardia indígena retiene a supuesto policía que se habría infiltrado en protestas de Cali. Ver en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/07/guardia-indigena-retiene-a-supuesto-policia-que-se-habria-infiltrado-en-protestas-de-cali/>

53 Véase la versión completa en el siguiente link: <http://www.indepaz.org.co/mapa-cali-paro-nacional/> (Esta versión del mapeo viene acompañada de unas entrevistas que recogen las perspectivas de diversas personas)

54 Véase la versión completa en el siguiente link: <http://www.indepaz.org.co/linea-de-tiempo-cali-paro-nacional-2021/> (Dicha versión muestra los acontecimientos que se pudieron documentar desde el 28 de abril del 2021 hasta el 20 de julio del 2021).



Repertorios de acción colectiva en el marco del paro nacional

Habiendo dejado claras las condiciones económico-políticas del país, las razones para la protesta, sus implicados y las contradicciones entre estos, pasaremos entonces a realizar una descripción de los diferentes “repertorios de acción colectiva”⁵⁵ realizados en el marco del paro nacional del 28 de abril en la ciudad de Cali y los significados que estas tienen para la historia de la protesta en Colombia.

Hasta ahora los movimientos sociales en Colombia venían presentando unas formas relativamente constantes de manifestación, expresión, revuelta y confrontación violenta que, para la protesta del 28 de abril aumentarían considerablemente. Durante este paro, no solamente estaban esas formas tradicionales de manifestación, sino que hubo la irrupción de nuevas formas de rebelión, algunas propias y otras adoptadas de manifestaciones en otros lugares del mundo, como por ejemplo el caso de Chile. Algunas marcaron particularmente las manifestaciones, como las primeras líneas, las brigadas médicas, los cuerpos de derechos humanos, los bloqueos permanentes con barricadas, etc., todas ellas están contenidas en unos tipos de acciones colectivas que serán explicadas a continuación.

Repertorios de acción

Acciones expresivas: Según Sandoval son aquellas “prácticas” que se realizan en entornos públicos y buscan, a través de “las dimensiones estéticas⁵⁶, expresivas y performativas”, romper con la cotidianidad en un espacio donde interactúa la sociedad, generar una reflexión política y solidarizar actores menos activos en el ámbito político con los reclamos de los manifestantes (Sandoval, 2020). Se comprende entonces que, estas acciones influyen en el individuo, la

55 Sandoval, J. 2020. “El repertorio de acción política en el ciclo de movilizaciones estudiantiles chilenas”. Revista de estudios sociales 72: 86-98. <http://doi.org/10.7440/res72.2020.07>.

56 En este sentido se comprenden como dimensiones estéticas sociales aquellas que el autor Leroi-Gourhan define en su investigación “El gesto y la palabra” como los procesos que relacionan las conductas de la interacción social con la percepción (sensorial, cognitiva y afectiva) del individuo y definen en el espacio y tiempo un “código de las emociones”.

sociedad y las creencias, ya que su objetivo es realizar una reflexión política en el espacio público. Estas acciones se dieron desde las artes visuales y escénicas, la música y la cultura, generando espacios donde diferentes comunidades históricamente excluidas ganaron visibilidad y protagonismo. Estos repertorios unificaron a la gente alrededor de objetivos políticos comunes y sirvieron para relacionar diversos sectores permitiendo poner en perspectiva los distintos problemas y situaciones compartidas.

Acciones de construcción de tejido social: Rodríguez y Cabedo, argumentan que el tejido social es una red de “relaciones humanas” que están conectadas entre sí y generan “vínculos” en el día a día, los cuales transmiten, entre otras cosas, “creencias y valores” que definen la forma de actuar y las decisiones de los individuos en la sociedad⁵⁷ .

Las acciones de construcción de tejido social, surgen como repertorio de acción en las manifestaciones de Colombia y Cali, ya que sientan un precedente al fomentar dicha construcción a través de la pedagogía, la cultura y la reflexión política. Estas al igual que las expresivas, tomaron lugar en los puntos de resistencia que se establecieron como puntos de encuentro y diálogo de diferentes esferas sociales. La diferencia está en que estas se centran en cómo la acción compartida nutre el tejido social al poner en la mesa diversos conocimientos, personas y realidades socioeconómicas promoviendo el intercambio de conocimiento y la reflexión sobre sentimientos compartidos, resultando en el cuestionamiento de los estereotipos sociales.

Acciones de confrontación: son aquellas acciones como paros, marchas, tomas de centros académicos y demás, que “perturban” el orden cotidiano y el espacio público, generando una interpelación a los implicados, poniendo en tela de juicio el poder establecido. El principal objetivo de este tipo de acciones es hacer explícito el conflicto y la confrontación entre ellos y aquello(s) que se

57 Rodríguez, A. del P., & Cabedo, A. (2017). Espacios musicales colectivos durante y después del conflicto armado como lugares de preservación del tejido social. *Co-Herencia*, 14(26), 257–291. <https://doi.org/10.17230/co-herencia.14.26.10>

58 Ibidem.

interponen o se oponen a las satisfacciones de sus necesidades individuales o del colectivo. Con la materialización de su antagonismo, disputan el espacio público, el poder y la autoridad a su contraparte, en este caso, el Estado⁵⁸ .

Acciones violentas: Son aquellas acciones que tienen como objetivo la instauración de un poder o el cuestionamiento de este, usando como medio el daño a la propiedad pública o privada y/o un enfrentamiento directo con una contraparte durante las manifestaciones. Estas acciones tienen lugar dentro de un sistema político-económico y social que solo hace énfasis en las violencias ejercidas por quienes se manifiestan contra un poder establecido, generalmente en una relación desigual de fuerzas, mientras naturaliza las violencias ejercidas por el mismo establecimiento, que son el punto de partida para el accionar violento de los manifestantes.

Durante el paro nacional del 28 de abril, muchos de los argumentos que tenían los manifestantes eran sobre la violencia que empezaba desde arriba, desde la exclusión de todo lo que necesitaban para vivir; desde los sistemas de salud, educativo; desde la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, a costa de otros que tenían que trabajar en jornadas extenuantes sin ninguna garantía, situación que se repite de manera generacional.

Modos de comunicación y convocatoria: En la actualidad los movimientos sociales y sus formatos de acción se han visto nutridos por las tecnologías de la comunicación como el internet, las redes sociales y medios alternativos de comunicación. Como lo expone Sandoval, en el caso de las movilizaciones estudiantiles en Chile, estas nuevas dinámicas de comunicación jugaron un rol importante, ya que hicieron posible el informar en tiempo real lo que “sucede en su contexto inmediato y además, reaccionar de manera contingente y oportuna a los cambios que se producen en su entorno” (Sandoval, 2020).

Esta situación se pudo ver también en Cali donde los manifestantes hicieron uso de herramientas de comunicación como las transmisiones en vivo en redes sociales por medio de Facebook e Instagram, generando

58 Ibidem.

información en tiempo real de lo que pasaba en los puntos de bloqueo y/o concentración. A su vez, estas plataformas fueron usadas para la recolección y coordinación de donaciones e insumos, reforzar los puntos de bloqueo que estaban siendo reprimidos por la fuerza pública, introducir un medio de comunicación alternativo permitiendo el diálogo directo entre los manifestantes y la ciudadanía, fomentar la democracia directa en la organización y la vocería, y manifestar los objetivos y realidades de las razones de la protesta. Por otro lado, Howard Rheingold argumenta que estas nuevas formas de interacción hacen posible repensar las prácticas como acción política desestructurada . A su vez, esto se puede ver en la participación de variados sectores sociales y en las múltiples quejas que se manifestaron en el paro nacional.

Modos de organización: los modos de organización en el marco del paro nacional se vieron caracterizados por el predominio de la horizontalidad en la relaciones personales y políticas entre los integrantes, el rechazo a las formas tradicionales de la democracia representativa y en general a toda forma de organización jerárquica. Para los manifestantes, esta forma de organización aparece como una condición en su ejercicio político, bajo la conciencia de que en ellas se juegan la construcción de nuevas prácticas políticas, preferiblemente alejadas de la institucionalidad con el objetivo de construir una nueva sociedad bajo otras lógicas diferentes a las instauradas en el orden imperante. Las reuniones de tipo asambleario que comenzaron a realizarse durante el paro nacional con el ánimo de unir causas y fuerzas dieron cuenta de la ruptura que hubo con los roles tradicionales, en donde las responsabilidades son colectivas.

Referencias bibliográficas

Castillo, L. C. (2021). Arde Cali, sucursal del cielo y capital mundial de la salsa. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 95-126). Santiago de Cali: CIDSE.

DANE, Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia. ¿Quiénes son, qué hacen y cómo se sienten en el contexto actual? (2020). Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/informe-panorama-sociodemografico-juventud-en-colombia.pdf>

Estrada, Jairo. (2021) Paro y rebeldía en Colombia; la rebelión social. Revista Izquierda (96). Recuperado de: <https://www.revistaizquierda.com/secciones/Numero-96/izq-rev-96-paro-y-rebelia-en-colombia-la-rebelion-social-y-el-movimiento-real-de-la-clase-trabajadora>

Estrada, Jairo. (2021) Paro y rebeldía en Colombia; la rebelión social y el “movimiento real” de la clase trabajadora. Revista Izquierda (96). Recuperado de: <https://www.revistaizquierda.com/secciones/Numero-96/izq-rev-96-paro-y-rebelia-en-colombia-la-rebelion-social-y-el-movimiento-real-de-la-clase-trabajadora>

Guellé, C. (1970). Franz Fanon and Colonized Man. *África Today*, 17(1), 8–11.

Guzmán, Á. (2021). La situación del paro nacional en Cali. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 183-200). Santiago de Cali: CIDSE.

Indepaz, (2021). Informe de Temblores ONG, Indepaz y País a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

Hernández, J. (2021). De la marcha hacia el centro al bloqueo en los barrios: las luchas por reconocimiento y oportunidades en Cali durante el paro nacional de Abril-Mayo de 2021. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 127-150). Santiago de Cali: CIDSE.

Ortiz, C. H. (2021). Otra vuelta de tuerca. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 41-52). Santiago de Cali: CIDSE.

Razón pública (17 de mayo del 2021), Protección a la protesta: derechos humanos y abusos frente al Derecho Internacional. Recuperado de: <https://razonpublica.com/proteccion-la- protesta-derechos-humanos-abusos-frente-al-derecho-internacional/>

Redacción El País (27 de enero de 2021). ElPaís.com.co. Obtenido de <https://www.elpais.com.co/cali/en-alcaldia-usan-contratos-interadministrativos-para-malversar-recursos-elmer-montana.html>

Rheingold, H. (2004). Multitudes inteligentes. Barcelona: Gedisa.

Sánchez, J. F. (2021). Reflexiones sobre prácticas y culturas políticas en el paro del 2021. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 53-66). Santiago de Cali: CIDSE.

Toro, G. R. (19 de abril de 2021). Caracol Radio. Obtenido de https://caracol.com.co/radio/2021/04/19/politica/1618840904_099933.html

Urrea-Giraldo, F. (221). Algunos factores desencadenantes del levantamiento popular en Cali y su región metropolitana. En CIDSE, Pensar la resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia (págs. 167-182). Santiago de Cali: CIDSE.

Lucha comprensiva con cambios estructurales y sustanciales

Juan Sebastián Céspedes Mendoza

“(…)La función de una estructura social es establecer instituciones al servicio de las necesidades del hombre. Una sociedad que lleva a sus miembros a buscar soluciones desesperadas, no es una sociedad viable, es una sociedad que debe ser reemplazada. Es el deber del ciudadano el decir esto. Ninguna moralidad profesional, o solidaridad de clase, o deseo de lavar el linaje familiar en privado puede tener una reclamación más prominente. Ninguna mistificación pseudo-nacional puede prevalecer en contra del requerimiento de la razón”^{59/60} .

Resulta importante recalcar que la magnitud de las protestas del 28 de abril sentó un precedente en la memoria nacional y permitió el reencuentro de la mayoría de colombianos en las manifestaciones en medio de la cuarentena bajo la premisa de “Si un pueblo protesta y marcha en plena pandemia es porque su gobierno es más peligroso que el virus”. Más allá, es importante reconocer que, si bien se configuran diversas fuentes del descontento, se puede a su vez distinguir que existe un enfoque, desde la misma estructura del gobierno y sus instituciones, que beneficia desproporcionadamente los intereses económicos por encima del bienestar de la sociedad.

Dicho enfoque se reconoce a escala universal como una constante que afecta desproporcionadamente el futuro de la juventud, que al ver la precaria situación social, ambiental y política se propone, a través de la protesta, repensar el paradigma social en el que se dan estas situaciones.

Por otra parte, las acciones desarrolladas permitieron que se diera una resignificación de la voz de la clase media y baja la cual se articuló al son de arengas a lo largo y ancho del territorio nacional y puntualmente en la ciudad que

59 Guellé, C. (1970). Franz Fanon and Colonized Man. *Africa Today*, 17(1), 8–11.

60 Traducido del original: “(…)The function of a social structure is to set up institutions to serve man’s needs. A society that drives its members to desperate solutions is a non- viable society, a society that needs to- be replaced. It is the duty of the citizens to say this. No professional morality, no class solidarity, no desire to wash the family linen in private, can have a prior claim. No pseudo-national mystification can pre-vail against the requirement of reason.”

fue renombrada como “la capital de la resistencia” Santiago de Cali, haciendo alusión al título de capital de la salsa y otorgándole una nueva investidura que se populariza y enaltece el temple que mostraron los manifestantes en los tres meses de protesta.

Esta resignificación surgió desde la heterogeneidad de actores que participaron en el paro, a partir de las múltiples intervenciones creativas de índole artístico, social y cultural, como la toma y la reimaginación de espacios públicos, la creación de bibliotecas populares en los CAI’s, así como la conformación de memoria colectiva a través de los murales y monumentos que surgieron como expresión del descontento. También, el liderazgo de esta juventud politizada propuso talleres y conversatorios que permitieron, por medio de la pedagogía y la interacción social seguir fomentando la construcción del tejido social. Por último, se estructuró el reclamo de forma descentralizada, lo cual permitió por un lado vislumbrar la determinación del pueblo para luchar por sus intereses así sea de forma no unánime y por otro la falta de confianza en el sistema social y político del país.

A raíz de estos planteamientos se puede considerar entonces que la protesta social ha ganado, a través de sus nuevos y reimaginados repertorios de acción, profundidad debido a la magnitud del reclamo, así como visibilidad al demostrar las fracturas sociales a través del mensaje de resistencia desplegado en cada una de las acciones que realizaron a lo largo de las manifestaciones a pesar de los oídos sordos de la comunidad internacional, de la represión y estigmatización estatal, de la brutalidad policial y de la violencia perpetrada tanto por actores estatales como paraestatales.

Es importante enfatizar en que la lucha por una mejor sociedad se da en el día a día, en asumir el rol político que jugamos todos en la sociedad, en cuestionar nuestros privilegios y construir a través de la educación, el diálogo social, la protesta, la crítica y la veeduría, una sociedad incluyente y consciente de los procesos de marginalización y opresión que se dan por parte de las estructuras de poder impuestas a escala global y replicadas a nivel local debido a la preservación de los intereses coloniales que defienden el capital de unas minorías.

Finalmente, es necesario reconocer el esfuerzo activo que se requiere para articular una lucha comprensiva que desemboque en cambios estructurales y sustanciales. Se puede entonces comprender que Colombia viene en un proceso de concienciación y construcción social que da cada vez nuevas herramientas para articular la voz y hacerse partícipe del cambio. Para este proceso de cambio social que se quiere ver la resistencia tiene que ser continua, consciente de que se va a poder considerar un nuevo y mejor paradigma social, que sea responsable tanto de preservar la diversidad y la riqueza del ser humano como la del medio ambiente.

Entonces la pregunta que queda es ¿Qué tanto está dispuesta a hacer la sociedad *colombiana para cambiar la estructura de este país y el mundo?*





Otra sociedad posible

Ayda Milena Acevedo Jaramillo

El paro nacional del 28 de abril, que se prolongaría por casi tres meses, con vías principales totalmente bloqueadas, barricadas, ollas comunitarias, constantes confrontaciones con la fuerza pública, manifestaciones artísticas, pedagógicas y profundamente políticas deja un precedente en la historia de la protesta en Colombia, pero también un amargo sabor respecto a los objetivos propuestos y si el esfuerzo realizado fue directamente proporcional al logro de estos.

Sea esta la ocasión para mencionar la sensación generalizada de frustración y desesperanza que quedó después de haber tenido la oportunidad de empujar grandes transformaciones político- económicas y no haber sido posible por:

1. Las constantes divisiones que hubo dentro del mismo movimiento, donde unos querían objetivos menos ambiciosos y meramente participativos del sistema electoral, mientras que otros buscaban cambios en la organización misma de la economía y el Estado.
2. La poca estructura política en algunos de los manifestantes hizo que articularse al unísono por objetivos claros, contundentes y profundos fuera un obstáculo dado precisamente la heterogeneidad de intereses de quienes participaron activamente del paro.
3. La disyuntiva necesaria a la que se enfrentaron los manifestantes en el acto de protestar y bloquear permanente el funcionamiento de la economía, entre negociar lo que el gobierno les imponía abandonando banderas principales de las mismas asambleas, o persistir en el paro y la confrontación, pero ¿Con qué objetivo?
4. La pérdida paulatina del apoyo masivo en las calles por el miedo generalizado a salir a manifestarse a raíz de los asesinatos y ataques armados por parte de fuerza pública, así como aquellos perpetrados por el fenómeno de “Paramilitarismo Urbano” contra quienes permanecían en las calles.

5. 5) El desgaste físico, emocional y psicológico al que fueron sometidos, tanto quienes se mantuvieron en las calles aguantando las condiciones climáticas y violentas, como quienes desde casa observaban por las redes sociales, estupefactos e impotentes, la violencia con la que el Estado respondió a la gente.

Es necesario señalar, también que se dio un proceso de intensificación de la persecución contra opositores de gobierno por parte de la derecha tradicional, pues no solamente cuenta que estamos en época electoral, sino también que el paro del 28A puso en cuestión la continuidad del gobierno de turno, lo que difícilmente pasará por alto la clase dirigente del país.

Por otro lado, de parte de algunos sectores existe una crítica frente a la exaltación de la juventud actual, respecto de las afirmaciones que les adjudican haber hecho lo que anteriores generaciones no habían hecho. Dejando de lado la construcción de procesos y movimientos políticos de las décadas anteriores que diezmaron y/o silenciaron con la arremetida violenta que tuvieron que soportar, viviendo incluso el exterminio sistemático contra un pensamiento opositor, como fue el caso de la UP, e invisibilizando que no fue del todo por falta de voluntad, o complicidad sino también por el terror sistemático que ha impetrado el Estado Colombiano hacia partidos y pensamientos políticos opositores al orden tradicional.

Para terminar, queda la reflexión sobre los profundos cuestionamientos que vienen realizando juventudes, adultos, comunidades y colectividades alrededor del mundo frente a las instituciones tradicionales, el sistema económico, la democracia, los intereses y prioridades de los Estados, la educación, la religión, la contaminación ambiental, sistemas de ideologías género, racismo, colonialismo. El trabajo gira ahora entonces alrededor de la construcción de argumentos y propuestas para otra sociedad posible.



Fotografía: Santiago González

La visita del grupo de trabajo de la CIDH, que tuvo lugar entre el 08 y 10 de junio del 2021, dio como resultado el pronunciamiento de la Comisión mediante un informe de observaciones y recomendaciones, en el cuál manifestó su preocupación por la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la movilización social (Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, 2021) por parte de las Fuerzas Militares. De este documento se extraen 12 recomendaciones que pueden categorizarse en, 2 de contenido general, y 10 que se refieren de manera específica a las violencias que fueron evidenciadas y/o los hechos que constituyen afectaciones a la garantía de los derechos humanos.

Estas últimas por razones de pertinencia para el balance que propone Indepaz, serán presentadas en la siguiente tabla:

Tabla 1. Recomendaciones de la CIDH al gobierno de Colombia a partir de la visita de trabajo en el marco del Paro Nacional 2021.	
	8. Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones, los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales. Asimismo, tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia en el marco de las protestas sociales.
	9. Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas	<p>10. Asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público estén sometidos a un protocolo estricto que prevenga y sancione su uso en grave afectación de la integridad y salud de personas manifestantes</p>
	<p>11. Implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.</p>
	<p>12. Reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como, las excepciones y limitantes del uso de la fuerza.</p>
	<p>13. Tomar medidas urgentes, en ámbitos de formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el ESMAD cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios.</p>
	<p>14. Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares.</p>
	<p>15. Asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos; así como juzgar y sancionar a los responsables. De igual manera, reparar a las víctimas y sus familiares.</p>
	<p>16. Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil. El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.</p>
	<p>17. Programa de reparación integral a las víctimas, especialmente en aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes.</p>

Respecto a la violencia basada en género	18. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de proximidad y de atención por personal especializado
	19. Reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección
Sobre la violencia basada en discriminación étnico-racial: Pueblos indígenas, Personas Afrodescendientes y Comunidades tribales	20. Adoptar todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, situación migratoria, origen nacional, o cualquier otra situación que obre en el deterioro de su dignidad humana.
Sobre el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas	21. Restringir el uso de la figura del traslado por protección a situaciones de debilidad o vulnerabilidad, circunstancial o permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Asimismo, abstenerse de utilizar dicha figura policial de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones.
	22. Garantizar el derecho al debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas.
	23. Asegurar que los familiares de personas detenidas, y en su caso sus representantes legales, tengan acceso a toda la información sobre el proceso de detención.
	24. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones interpuestas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas.
	25. Liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria o injustificada y aún se encuentren privadas de la libertad
	26. Crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas; en la que se garantice la participación de los familiares.

Sobre el uso de las facultades disciplinarias	27. Adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia.
Respecto a la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar	28. Garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles.
	29. En caso de necesidad de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, esa sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. De igual manera debe de ser regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces
	30. Reformar el Decreto 575 de 2021 a fin de asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté compatible con el derecho internacional en la materia
	31. Asegurar que el fuero militar sólo sea utilizado para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
	32. Asegurar que la justicia ordinaria sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.
Sobre las afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en el marco las protestas	33. Investigar y, en su caso, juzgar y sancionar, con apego a las garantías del debido proceso, a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas.
Sobre los cortes de ruta (Bloqueos)	34. Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas.
	35. Responder a eventuales restricciones a esta modalidad de protesta con base en consideraciones particulares, siempre y cuando sus eventuales restricciones atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática.
	36. Crear un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado, conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que tengan la capacidad necesaria para avanzar con procesos de diálogos transparentes y voluntarios, incorporando a autoridades locales, como gobernadores y alcaldes, para atender las particularidades de los territorios.

Sobre la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a Internet	37. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación.
	38. Garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.
	39. Brindar proactiva y periódicamente información sobre el funcionamiento de las redes Internet con el fin de que las denuncias sobre eventuales interrupciones y bloqueos sean contrastables con información técnica actualizada y accesible.
	40. Cesar las actividades de categorización policial de contenidos como “falsos” o “verdaderos” y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas.
Sobre misiones médicas	41. Reconocer la importancia de la labor de las misiones médicas en el ejercicio de sus tareas humanitarias en el marco de las protestas, garantizando su protección reforzada para que brinden sin obstáculos atención de salud a todas las personas sin discriminación y sin temor a represalias ni sanciones.

NI UNA MUERTE M
NI UN LÍDER MEN
NOS ESTÁN MATA





ÁS,
OS
NDO!

SE
QU
C

EL
VA



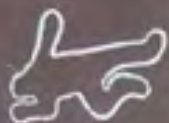


CRIMENES
DE
ESTADO
6402

987



986

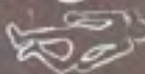


985

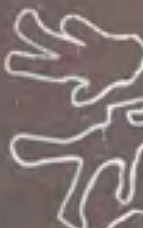
984



983

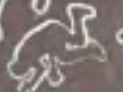


982

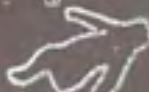


981

980



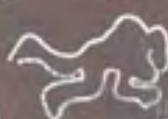
979



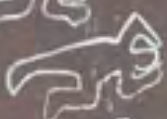
978



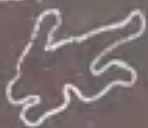
977



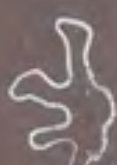
976



975



974



973

